

Colección Facultad de Ciencias Jurídicas
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

MANUAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS



Róger Aguilar Jeréz

Texto adaptado al
DR-CAFTA

El MSc. Róger Aguilar Jeréz, es Abogado y Notario Público, graduado en la Universidad Centroamericana (UCA) en 1995. Posee un Postgrado en Derecho Procesal, otorgado por la Universidad de Barcelona. Obtuvo el título de Máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), en donde se desempeña como Jefe de Área de Derecho Público y Social en la Escuela de Derecho de dicha Universidad, a la vez que imparte la asignatura Derecho de Propiedad Intelectual, entre otras. Ha sido profesor horario de la UCA desde 1998, impartiendo la disciplina de Derecho Procesal Civil. Ha participado en numerosos cursos y seminarios sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, entre los que destacan un seminario interregional de nivel intermedio impartido por la OMPI en su sede en Ginebra, Suiza y un curso de formación práctica en la sede de la SGAE, en Madrid, España. Desde el año 2002 es asesor legal de la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos NICAUTOR.

346.0482

A-283

C.3

Róger Aguilar Jeréz

Profesor de Derecho Procesal Civil
Universidad Centroamericana

MANUAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Fecha	29-17-06
Procedente	—
Destinado a	Do. para Colecc. genl.
Registro	Reg 200680618



N

346.0482

A-283 Aguilar Jeréz, Róger

Manual de Derecho de Autor y

Derechos conexos / Róger Aguilar Jeréz

--Managua: UCA, 2006.

278p. --(Colección Facultad de Ciencias Jurídicas)

COLECCIÓN A CARGO DE

Manuel Aráuz Ulloa

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas

Ma. Asunción Moreno Castillo

Coordinadora General de Postgrados

Jairo José Guzmán García

Profesor Adjunto de Derecho Civil

Jessenia Bonilla Olivares

Investigadora - Facultad de Ciencias Jurídicas

Diagramación: Matilde Bustos López

Impreso por Impresiones Helios, S.A.

Managua, Nicaragua, Abril 2006

Primer Edición

© Róger Aguilar Jeréz - ISBN 99924-0-518-X

© Universidad Centroamericana para la presente edición, 2006.

Derechos Reservados

Todos los derechos reservados de conformidad con la legislación nacional e internacional de la materia. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la presente obra.

*A mi hijo, Gabriel
A mis Padres
A los Artistas Nicaragüenses*



ÍNDICE

Prólogo	7
Presentación	9
Capítulo I	
Nociones de la Propiedad Intelectual.....	11
Capítulo II	
El derecho de autor y los derechos conexos	21
Capítulo III	
Del Autor y la Titularidad	35
Capítulo IV	
Excepciones y limitaciones al Derecho de Autor.....	57
Capítulo V	
Licencias y Contratos	67
Capítulo VI	
De la protección efectiva de los Derecho de Autor y los Derechos Conexos.....	79
Capítulo VII	
El Derecho de Autor y la evolución tecnológica.....	99
Capítulo VIII	
La gestión colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos	111
Capítulo IX	
Piratería intelectual.....	127
Capítulo X	
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	133
Legislación Nacional y Convenios de Berna y Roma	137
• Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ley N° 312	139
• Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.	184



- Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos 198
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literaria y Artísticas 215
- Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión 261

Prólogo

El libro es fuerza, valor, poder, alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor según nuestro insigne poeta Rubén Darío. Por ello, escribir un libro es un acto valiente porque el autor expone sus pensamientos, los defiende y critica sanamente lo que considera necesario mejorar y a la vez, se expone abiertamente al análisis de sus ideas.

El joven y prestigiado Profesor, MSc. Róger Aguilar Jeréz, haciendo gala del pensamiento de nuestro insigne poeta y sediento de aportar al desarrollo didáctico y pedagógico de la enseñanza del derecho, ha escrito una importante obra intitulada "Manual de Derecho de Autor y Derechos Conexos". Esta obra recoge con abundancia teórica todos aquellos conceptos, principios, procesos, características y de derecho comparado del derecho de autor.

Ha podido constatar el suscrito, que esta obra es producto de un gran esfuerzo y esmerada dedicación en donde aflora la capacidad profesional incuestionable del autor, aportando con ello lo que estudiantes y profesionales del Derecho esperaban de este nuevo aporte al Derecho de Propiedad Intelectual nacional e internacional.

Me siento muy honrado de que el Profesor Aguilar Jeréz me haya distinguido para prologar su primer libro que deberá tener una amplia acogida de profesores, estudiantes, abogados e intelectuales interesados en la enseñanza, aprendizaje, aplicación promoción y defensa del derecho de autor y conexos. Ojalá Dios le mantenga su espíritu inquieto y estudioso para que nos siga ilustrando con los frutos de su experiencia de estudioso, catedrático y abogado.

El libro que el colega Aguilar Jeréz ha puesto en circulación, para beneplácito de sus lectores, es una obra de singular valía que puede leerse de un solo tirón porque ha sido escrito con dedicación, cariño y conocimientos excepcionales que lo sitúan en las cimas de una materia tan apasionante y humana como es el Derecho de Autor, que precisa para ser cultivada de fina sensibilidad y sumo respeto hacia el prójimo, la cultura y la ciencia.



El estudio del Profesor Aguilar Jeréz, que me honro en prologar, es verdaderamente una puesta al día de las normas particulares, convenios, tratados y acuerdos en esta materia, tanto a nivel nacional como regional e internacional, pero principalmente no obvia y enfoca con mucho atino su relación con respecto al recién suscrito y puesta en marcha Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, denominado en sus siglas en inglés DR- CAFTA.

Este trabajo viene a dar esperanza para el futuro de nuestras leyes en esta materia, ya que con la globalización y los nuevos tratados internacionales, el Derecho de Autor debe surgir y desarrollarse y ser eficaz en todo nuestro país.

Esperamos, para dicha y suerte de sus lectores, que el MSc. Róger Aguilar Jeréz, prosiga empuñando la pluma con el mismo tesón y perseverancia con la que la ha esgrimido hasta hoy, para que nos siga aportando permanentemente a la consolidación de la Justicia, la Libertad y el Estado de Derecho que tanto anhela nuestra sociedad.

Managua, Nicaragua

Oscar Lorenzo Castillo Guido
Catedrático Universitario

Presentacion

Desde hace algún tiempo los términos "Propiedad Intelectual", "Derecho de Autor" y "Derechos Conexos", entre otros, se han venido escuchando cada vez con más fuerza y frecuencia, tanto a nivel de los profesionales del derecho, como en la sociedad en general. Sin embargo, a pesar de que son conceptos para nada nuevos, se tiene la impresión que pocos conocen su importancia en nuestra sociedad contemporánea.

En nuestro país ha existido una apatía casi generalizada en relación a los derechos que poseen los titulares de las obras literarias, artísticas y científicas. Todos nos hemos beneficiado de las creaciones espirituales del intelecto de nuestros artistas pero muy pocas veces nos hemos detenido a pensar en cuáles son los derechos que la ley brinda a los autores para la protección de sus obras y muchos menos nos hemos preocupado por hacer que esos derechos se respeten.

Más que nada por presiones foráneas que por un interés auténtico, el Estado de Nicaragua promulgó en 1999 la Ley N° 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y al año siguiente el Reglamento de la misma, a través del Decreto N° 22-2000. A partir de entonces, nuestro país cuenta con una moderna legislación en la materia que por ende brinda una mejor protección a los autores, tanto nacionales como extranjeros, para que se respeten sus obras. A esto hay que sumar la reciente reforma que, producto de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) el Estado Nicaragüense tuvo que realizar a varias leyes de propiedad intelectual, incluida la Ley No. 312.

Como en muchos casos, la aplicabilidad y eficacia de una ley depende en gran medida de la voluntad política del gobierno para hacerla cumplir, y en el caso de la Ley N° 312, se ha observado una falta de interés por parte del ejecutivo en aplicar las disposiciones legales de ésta en todo su rigor para que impere el respeto a los derechos de los autores, sobretudo en el aspecto del combate a la piratería de obras musicales y audiovisuales. Salvo las honrosas excepciones de



dos operativos anti-piratería realizados en el mes de abril de este año y el procesamiento de algunos infractores, la actuación de las autoridades competentes no ha sido muy efectiva en este ámbito.

La única pretensión que me ha motivado a escribir este libro ha sido la de llenar el vacío bibliográfico que existe en nuestro país sobre la materia que nos ocupa y que de esta forma los estudiantes del Derecho, los colegas profesionales y los artistas en general puedan tener a su alcance la información elemental necesaria para el manejo de los conceptos, principios y disposiciones legales del Derecho de Autor.

Se trata pues de una obra modesta y sin grandes pretensiones, en la cual se abordan los temas de una forma simple y llana para que el novel estudioso pueda encontrar en ella los elementos básicos del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Quiero agradecer especialmente a mi amigo de muchos años, el cantautor Engel Ortega García, por haberme permitido vincularme al tema en cuestión por medio de la Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos "NICAUTOR". Mis agradecimientos también para la Dra. Ambrosia Lezama, Directora del Registro de la Propiedad Intelectual; al Dr. Nicolás Sandino, Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Agradezco a los señores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España, particularmente a todo el cuerpo de expertos de ambos organismos, que han compartido conmigo sus conocimientos y sabiduría sobre el tema en los diferentes seminarios, prácticas y conferencias en que he tenido el privilegio de participar, tanto dentro como fuera del país.

Por último, pero no menos importante, agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), por auspiciar la publicación de esta obra, contribuyendo de esa forma a la divulgación del Derecho de Autor para beneficio de toda la comunidad estudiantil, profesional y de los artistas nacionales.

Managua, Marzo de 2006.

CAPITULO I

NOCIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Concepto de propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual, en las palabras de Hermenegildo Baylos Corroza¹ es la expresión utilizada *"para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte y literatura e invenciones) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas)"*.

Por su parte, el Diccionario Jurídico Espasa, conceptúa la Propiedad Intelectual como un *"Conjunto de derechos que la ley confiere al autor de una obra intelectual relativos a su publicación por cualquiera de los modos de manifestación del pensamiento"*².

La propiedad intelectual, por lo tanto, está relacionada con las creaciones del ser humano, obras del intelecto del hombre o la mujer, ya sean éstas literarias o artísticas, así como las invenciones, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

II. División de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se ha dividido tradicionalmente en dos categorías: la propiedad industrial, que abarca las marcas, las denominaciones de origen, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y el derecho de autor, que comprende:

1. Obras literarias: novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, etc.
2. Obras artísticas: dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y diseños arquitectónicos etc.

Debemos también señalar que existen derechos relacionados con el derecho de autor, llamados Derechos Conexos, y que constituyen

¹ Tratado de Derecho Industrial, pág. 44.

² Diccionario Jurídico Espasa, 1998.

los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

III. Derechos de propiedad intelectual

Algunos autores establecen una similitud entre los derechos de propiedad intelectual y los de propiedad en general , ya que permiten a su titular, o sea, al creador de una patente, marca o de una obra artística o literaria, sacar provecho de su creación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos contempla estos derechos ya que señala:

“Artículo 27.

- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.*

En nuestra Constitución Política, el artículo 127 establece: *“La creación artística y cultural es libre e irrestricta . Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y medios de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y proteger sus derechos de autor”.*

IV. Importancia de la propiedad intelectual

El Dr. Kamil Idris , Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al comentar su obra *Intelectual Property- A Power Tool for Economic Growth (La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico)*, señala que *“la propiedad intelectual constituye una herramienta al servicio del*

*desarrollo económico y la creación de riqueza cuyo potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular en el mundo en desarrollo*³.

No es necesario profundizar en este tema para convencerse que el intelecto del hombre y la mujer ha sido a lo largo de la historia uno de los principales motores del desarrollo de la humanidad. La innumerable cantidad de invenciones y obras que el hombre y la mujer han creado desde tiempos remotos han permitido un gran nivel de desarrollo en la sociedad contemporánea, tanto en el campo social, económico, científico, cultural, etc. En otras palabras, el desarrollo general de una nación se verá impulsado en gran medida en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico reconozca y proteja las invenciones y creaciones de sus ciudadanos y el Estado haga efectiva las leyes en materia de Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual, por lo tanto, se fundamenta en un principio muy simple: el reconocimiento, la retribución y la protección de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico.

Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como instrumento poderoso de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público, proporcionando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos⁴.

V. Evolución de la propiedad intelectual

El derecho de autor o derecho a la propiedad intelectual no es una preocupación que nace con la sociedad actual, sino que ya en el año 25 a.c., Marco Vitruvio lo recogía en su Libro Séptimo, De arquitectura, diciendo:

³ Idris, Kamil. La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico. Reseña. Junio 2003, Pág. 1.

⁴ Qué es la Propiedad Intelectual Publicación de la OMPI No. 450 (S).

"Ahora bien, así como hay que tributar merecidas alabanzas a éstos, incurren en nuestra severa condenación aquellos que, robando los escritos a los demás, los hacen pasar como propios. Y de la misma manera, los que no sólo utilizan los verdaderos pensamientos de los escritores, sino que se vanaglorian de violarlos, merecen reprensión, incluso un severo castigo como personas que han vivido de una manera impía".

Se vinculaba el avance de la sociedad a la creación y búsqueda de conocimiento de ciertos autores y se les reconocía el derecho moral sobre su obra, sobre todo literaria. Sin embargo, no es hasta la invención de la imprenta cuando aparece la posibilidad de proteger no un solo objeto como propiedad material, sino sus múltiples reproducciones como fuentes de propiedad intelectual. Así pues, el Estado comenzó a controlar las producciones con un doble fin: proteger a quienes invertían en la difusión de obras y controlar esta nueva fuente de oposición al poder⁵.

Es por esa razón que se considera la época del renacimiento el momento histórico cuando nace el sistema de propiedad intelectual, más concretamente a mediados y finales del siglo XV. En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta con tipos móviles, la cual indudablemente contribuyó al surgimiento del primer sistema de derecho de autor de la historia.

Hacia 1474 en la ciudad de Venecia, Italia, se da un primer esfuerzo para proteger de forma sistemática las invenciones por medio de una patente, que concedía un derecho exclusivo a un individuo.

En el año 1710 se brinda la primera protección formal al derecho de autor por medio del Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, el cual concedía el derecho exclusivo a imprimir. En Francia, en 1791 se suprimieron los privilegios de los impresores y surgió el derecho de autor en favor de los creadores. En España la primera ley fue promulgada en 1762.

Sin lugar a dudas, la revolución industrial de fines del siglo XIX repercutió grandemente a que en muchos países se promulgaran

⁵ Jiménez Fuentes, Esther. Derecho de Autor en Internet, Julio 2002.

las primeras leyes modernas de propiedad intelectual. Las formas innovadoras de fabricación, el movimiento de industrialización a gran escala, el rápido crecimiento de las ciudades, el ferrocarril, la inversión de capital, el aumento del comercio transoceánico y el surgimiento de gobiernos más centralizados, son entre otros los fenómenos que contribuyeron al surgimiento del Derecho de Propiedad Intelectual moderno.

En 1886, un funcionario federal americano inventó un sistema automático de tarjetas perforadas para facilitar el conteo del censo federal. Creó una máquina perforadora y fundó con ella una empresa a la que llamó Hollerith. Después de cierto tiempo de gran prosperidad y diversos cambios de nombres en 1924 pasó a llamarse como se le conoce hoy en día: IBM.

En tiempos de la segunda guerra mundial comenzó el desarrollo de grandes aparatos calculadores los cuales al finalizar el conflicto dieron paso a la primera computadora, la cual recibió el nombre de UNIVAC, siendo utilizada en la oficina del censo.

En 1951 se vendió en EEUU la primera computadora. Su número creció a 1000 para 1958 y en 1961 llegaban a 10000. El resto de la historia de este ingenio es de sobra conocida. La computadora u ordenador, constituye hoy por hoy un soporte más de cultura, diversión, comunicación y relaciones sociales.

En el año de 1969, el ejército de los EEUU creó una red experimental que conectaba a todas las computadoras militares. Ya para 1972 irrumpe el sistema de correo electrónico. La década de los 80 fue testigo de la proliferación de redes locales de las llamadas PC (computadores personales) lo que influyó en la vertiginosa expansión de Internet. A partir de 1990, con la desvinculación del ámbito militar, hace su aparición, primero en EEUU y luego en el resto del mundo, el Internet que hoy todos conocemos. Para febrero de 2005 existían a nivel mundial aproximadamente 972,828,001 millones de usuarios de la red.

En relación a la protección jurídica de la propiedad intelectual en el ámbito internacional, en las postrimerías del siglo XIX tuvo lugar la

suscripción de dos tratados de gran incidencia para el desarrollo de este nuevo derecho y sentar las bases de un sistema internacional de propiedad intelectual: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Este último fue completado en París el 04 de Mayo de 1896; revisado en Berlín el 13 de Noviembre de 1908; completado en Berna el 20 de Marzo de 1914; revisado en Roma el 02 de Junio de 1928; revisado en Bruselas el 26 de Junio de 1948; revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967; revisado en París el 24 de Julio de 1971 y enmendado el 02 de Octubre de 1979.

Tanto el Convenio de París como el de Berna constituyen el punto de partida del sistema de tratados de la OMPI. A lo largo de todo el siglo XX se suscribieron otros tratados que han ampliado y profundizado el sistema internacional de la propiedad intelectual, adaptándose a los avances tecnológicos y los nuevos ámbitos de interés, destacándose en materia de Derecho de Autor los siguientes:

1. Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. (1961).
2. Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonograma. (1971).
3. Convenio de Bruselas sobre la Distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974).
4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994).
5. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, conocido por sus siglas en inglés WCT o TODA en español (1996).
6. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, conocido por sus siglas en inglés WPPT o TOIEF en español, (1996), el que junto al anterior se encuentra vigente desde el año 2002.

El WCT y el WPPT son conocidos también como los "*Tratados Internet*", ya que establecen normas internacionales claras dirigidas a impedir el acceso no autorizado a obras creativas y su utilización en Internet.

VI. El derecho de autor en Nicaragua

El Código Civil de 1906 regulaba lo relativo al Derecho de Autor en el Título IV del Libro II, Arts. 724 a 867. Desde el año 1999, entró en vigencia la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y desde el año 2000 rige el reglamento a dicha ley, promulgado como Decreto 22-2000. Asimismo, como consecuencia de la suscripción por el Estado de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, (DR-CAFTA), se aprobó el 22 de marzo del 2006 la Ley No. 577, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley No. 578, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas.

La entrada en vigencia de este nuevo ordenamiento jurídico en materia de derecho de autor ha significado una modernización de la legislación nacional en este ámbito, la cual permite una mejor protección para los autores nicaragüenses. Sin embargo, algunas de las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento no se aplican a cabalidad, sobre todo en lo relativo al combate de la piratería, debido a la ausencia de una política decidida del Estado para reducir este flagelo.

Nicaragua a la fecha se ha adherido a los siguientes Convenios Internacionales en materia de Derecho de Autor:

1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).
2. Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961).
3. Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971).
4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994).

5. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, conocido por sus siglas en inglés como WCT (1996).
6. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, conocido por sus siglas en inglés como WPPT (1996).

CAPITULO II

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

I. Concepto y objeto del derecho de autor

Al Derecho de Autor se le atribuye la cualidad de ser un eficaz medio de promoción, enriquecimiento y difusión de la herencia cultural de un país, en vista que el desarrollo cultural de los pueblos, de su creatividad artística e intelectual, depende de forma directa del nivel de protección jurídica que los Estados otorgan a las obras creadas por sus ciudadanos.

Desde el mismo instante en que una persona crea una obra, ya sea ésta literaria, musical, científica o artística, pasa a ser su titular, su dueño, lo cual implica, entre otras cosas, que es libre de decidir acerca de su uso. De tal manera que, únicamente esa persona, llámese "creador", "autor" o el "titular del derecho", puede decidir lo que desea hacer con su obra.

El artículo 4 de la Ley No. 312 señala que *"El Derecho de Autor de una obra literaria, artesanal, artística o científica corresponde al autor por el sólo hecho de su creación"*.

También se afirma que el Derecho de Autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se hace referencia como "obras"⁶.

Este derecho comprende dos categorías principales de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales, a los cuales me referiré más adelante.

El Derecho de Autor asegura a los creadores el respeto para sus obras y el derecho de recibir una compensación económica cuando éstas son utilizadas por terceros. Aún, cuando el objeto de protección del derecho de autor va dirigido a la obra como resultado del talento creativo del hombre, no obstante, el derecho de autor también protege derechos que conciernen a la personalidad del autor o creador y que son conocidos como "derechos morales"⁷.

⁶ ¿Qué es la Propiedad Intelectual?. Publicación de la OMPI No. 450(s). Pág. 18.

⁷ Rubio, Felipe. La Obra como Objeto del Derecho de Autor. CERLALC, 1998.

II. Derechos conexos

Estrechamente vinculados al Derecho de Autor están los Derechos Conexos, que conceden derechos similares o idénticos al derecho de autor y cuyos beneficiarios, como ya sabemos, son:

1. Los artistas intérpretes y ejecutantes (cantantes, músicos, actores) sobre sus interpretaciones o ejecuciones.
2. Los productores de grabaciones sonoras (grabaciones en casetes, CD's) sobre dichas grabaciones.
3. Los organismos de radiodifusión, sobre sus programas de radio y televisión.

El rasgo característico de estos derechos es que son más limitados que los derechos de autor y de más corta duración.

Diferencias entre el sistema de derecho de autor y el *copyright* anglosajón

Generalmente se entiende por derechos de autor a los derechos que éste posee para controlar el uso que se hace de su obra. Sin embargo, no existe una idea uniforme sobre el alcance y el contenido concreto de esos derechos. Las tradiciones anglosajona y europea conciben esos derechos de forma distinta. Mientras en el mundo anglosajón predomina una concepción utilitarista de los derechos de autor, en Europa se ha adoptado un enfoque que los concibe como derechos de la persona.

J.A.L. Sterling ha resumido las principales diferencias entre los derechos de autor europeos y el *copyright* norteamericano:

1. Se dice que el sistema de *copyright* está fundamentado básicamente en consideraciones económicas, mientras que el sistema de derechos de autor está vinculado a un concepto de derecho de la personalidad.
2. En el sistema de *copyright*, es posible que el autor sea tanto una persona física como jurídica, mientras que en el ámbito de los derechos de autor se entiende que se trata siempre de una actividad surgida de una persona natural.
3. En el sistema de *copyright* el reconocimiento legal de derechos morales del autor ha tenido un lento desarrollo. En cambio,

- en el sistema de derechos de autor, los derechos morales ocupan una posición preeminente y existe una tradición de alto nivel de protección de tales derechos.
4. La fijación en forma material de la obra es generalmente esencial en el sistema de *copyright*. En el de derechos de autor no es, en cambio, precisa para la protección de la obra.
 5. Cuando se trata de obras cinematográficas, en el sistema de *copyright* el propietario inicial del *copyright* puede ser una persona jurídica --por ejemplo, una compañía productora--, pero en el sistema de derechos de autor tienen que ser las personas que han contribuido a la creación de la obra.
 6. En el sistema de *copyright* el empresario puede ser el inicial propietario del *copyright*, mientras que en el de derechos de autor, la regla general es que el empleado es el inicial propietario del derecho de autor, aunque pueda este ser cedido, mediante contrato, al empresario.
 7. No es normal en el sistema de *copyright* que los contratos contengan previsiones muy detalladas sobre la publicación, mientras que tales regulaciones pormenorizadas son regla en el sistema de derechos de autor.
 8. En cuanto a los derechos conexos a los de autor, en Estados Unidos solo los trabajos originales de autor se protegen mediante *copyright*. Los derechos conexos gozan de una protección minorada o incluso, a veces, de ninguna en especial. En el sistema de derechos de autor, en cambio, está generalmente clara la distinción entre derechos de autor en las obras de creación y los derechos conexos o vecinos de los ejecutantes, productores de fonogramas, productores televisivos u otros.

Lo cierto es que muchas de esas diferencias son más teóricas que prácticas. De hecho, aunque se mantienen las discrepancias entre ambas concepciones, también se ha ido dando un proceso de convergencia en algunos aspectos, mientras que las aplicaciones prácticas de enfoques distintos no han dado como resultado divergencias serias⁸.

⁸ Villate, Javier, La propiedad intelectual en la nueva era digital, 2001.

III. Obras protegidas por el derecho de autor

El Convenio de Berna en su Artículo 2 enumera las creaciones tenidas por obras literarias y artísticas y que son objeto de la protección que brinda el derecho de autor. Señala que son todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramáticos-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

En la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, encontramos que el artículo 13 señala que *" Están protegidas por esta Ley todas las creaciones originales y derivadas, literarias, artísticas o científicas, independientemente de su género, mérito o forma actual o futura, tales como:*

- 1. Las obras artísticas artesanales producto del arte popular en sus diversas expresiones y formas.*
- 2. Las obras literarias, ya sean orales como los discursos, alocuciones, sermones, conferencias, alegatos de estrado y las explicaciones de cátedra; ya escritas como las novelas, cuentos, poemas, comprendiendo también los programas de cómputo, sean estos programas fuente o programa objeto y cualquiera que sea su modo o formas de expresión.*
- 3. Las composiciones musicales, con o sin letra.*
- 4. Las obras dramáticas, las dramático-musicales, las coreográficas, las pantomimas y en general, las obras teatrales.*
- 5. Las obras audiovisuales dentro de las cuales se comprenden los videogramas.*
- 6. Las esculturas, pinturas, grabados, fotograbados, litografías, dibujos, las historietas gráficas o cómicas y las obras plásticas en general.*

7. *Las fotográficas y las producidas por un procedimiento análogo.*
8. *Las obras de arquitectura y sus proyectos, ensayos, bosquejos, planos, maquetas, bosquejos y diseños de obras de arquitectura.*
9. *Los gráficos, mapas, diseños y figuras tridimensionales referidos a la geografía y topografía, y en general, a la ciencia.*

No son objeto de protección las ideas, procedimientos, métodos o conceptos matemáticos”.

Agrega el artículo 14 de la referida Ley que “Son consideradas como obras independientes, sin perjuicio del Derecho de Autor, que en su caso, correspondan a las partes que las integren, las colecciones de obras literarias, artísticas o científicas, tales como las antologías, compilaciones de textos, resoluciones administrativas o judiciales y de otros elementos, comprendidas las bases de datos que, por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales”.

Por su parte, el artículo 15 añade que “sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de protección:

- 1. Las traducciones, adaptaciones y doblajes.*
- 2. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.*
- 3. Los arreglos musicales.*
- 4. Los compendios, resúmenes y extractos.*
- 5. Cualquier otra creación que resulte de la transformación de una obra original”.*

Cabe destacar que el Art. 9 del Reglamento de la Ley 312 señala que las disposiciones establecidas en la Ley, en relación a la protección de la obra, en sus Arts.13, 14 y 15 son de carácter meramente enunciativas, así como las modalidades de explotación indicadas en la sección segunda Capítulo IV, Título I de la misma.

En relación a las obras que están fuera del ámbito de protección del derecho de autor, el artículo 16 señala a las leyes, las disposiciones gubernativas, proyectos de ley, actas, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los órganos y organismos públicos y traducciones

oficiales de los textos anteriores. Las sentencias de los tribunales pueden ser reproducidas por cualquiera, luego que lo hayan sido oficialmente sujetándose el editor al texto auténtico.

En cuanto al título de una obra, el artículo 17 refiere que cuando éste sea original, quedará protegido como parte de ella, aún en el caso de que la obra se encuentre en dominio público.

En la Ley de Propiedad Intelectual de España, los artículos 10, 11, 12 y 13 señalan, con ligeras diferencias, las mismas obras que son objeto de protección del derecho de autor.

IV. Criterios para la protección de las obras

Felipe Rubio señala ciertos criterios que se utilizan para determinar cuándo una obra es objeto de protección del derecho de autor, algunos de los cuales están incorporados en la Ley No. 312, a saber:

1. Protección a la forma y no a las ideas

Una idea por si misma no es objeto de protección, no importa lo novedosa o innovadora que sea. (El artículo 13 infine de la Ley No. 312 recoge este principio). Una vez que las ideas son incorporadas físicamente a una obra literaria o artística, éstas comienzan a ser protegidas por la ley. Lo que constituye objeto de protección es la forma literaria plástica o sonora. Rubio señala como ejemplo, el caso del programador de computadoras que, siguiendo indicaciones específicas, desarrolla un programa de cómputo. En este caso dicho programador es el autor o titular de la obra y no quien le dio las indicaciones de cómo hacerlo.

2. Originalidad

Este criterio se refiere a que la obra, aunque no sea novedosa, debe poseer un sello personal que su autor le da a la manera de expresar sus ideas en cualquier campo del arte o la literatura. Al derecho de autor no le interesa la calidad de la obra. Puede ésta ser buena o mala pero en tanto sea producto de la particular expresión del autor, será objeto de protección. Por lo anterior, una obra será original

mientras no sea copia de otra. Este criterio lo recoge el artículo 13 in principio de la Ley No. 312: *"Están protegidas por esta Ley todas las creaciones originales..."*.

3. Formalidades

Este criterio hace alusión más bien a que la protección que brinda el derecho de autor a una obra comienza desde el instante en que ésta es creada. Por lo tanto, no se exige registro o formalidad alguna para ser objeto de la protección ya que a partir de que la idea se manifiesta en el disco, libro, escultura, película, etc, la protección inicia.

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en su artículo 5 establece en el inciso segundo que *"El goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad..."*.

Asimismo lo establece de forma clara nuestra legislación de la materia en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto No. 22-2000) el cual literalmente dice: *"El goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos no están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad y, en consecuencia, el registro y depósito del Derecho de Autor y Derechos Conexos es meramente facultativo y declarativo, no constitutivo de derechos. Las obras no registradas, ni publicadas quedan protegidas desde su creación."* Por su parte, el artículo 131 de la Ley señala que la falta de registro o depósito no perjudica la adquisición y el ejercicio de los Derecho de Autor y Derechos Conexos establecidos en la ley.

No obstante, muchos países cuentan con una oficina nacional de derecho de autor y algunas legislaciones nacionales permiten el registro de obras, por ejemplo, con el propósito de identificar y distinguir los títulos de las obras. En algunos países, el registro también puede servir como prueba irrefutable ante un tribunal de justicia en el caso de controversias relacionadas con el derecho de autor. Tal es el caso de Nicaragua, ya que el artículo 129 de la Ley No. 312 crea la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos

Conexos, la cual es parte del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

4. Calidad y mérito

La protección que el derecho de autor brinda es independiente del valor o mérito de la obra. Por lo tanto, se considerará obra, tanto la realizada por un artista famoso o reconocido y que tenga gran aceptación a nivel de la crítica y del público en general como cualquier creación de un aprendiz. No corresponde a la ley determinar el valor de una obra, sino que al público. Baste recordar que durante su vida, las obras de Vincent Van Gogh no tuvieron gran valor pero tras su muerte fueron tan apreciadas que hoy en día se valoran en millones de dólares.

5. Destinación

Por último, es irrelevante para el derecho de autor la destinación que la obra tenga ya que puede tratarse de una obra cultural, científica, educativa o de cualquier índole, más lo que interesa es que se trate de una obra literaria o artística.

V. Clasificación de las obras según su naturaleza

A fin de lograr una mejor comprensión sobre la naturaleza de las diferentes categorías de obras que son objeto de la protección del derecho de autor, haremos una clasificación de éstas.

1. Obras literarias

Las que poseen un carácter ya sea literario, científico, técnico o práctico. El elemento común en estas obras es la utilización del lenguaje escrito como forma de expresión, o sea, los libros, folletos y todos tipo de escritos, sin importar su valor estético o destinación. Tan literaria es una novela de Gabriel García Márquez como un programa de computación.

2. Obras artísticas

La finalidad más usual de estas obras es el de lograr algún tipo de efecto estético en los sentidos de aquellos que las contemplan. En

esta categoría se incluyen las pinturas, dibujos, esculturas, grabados, litografías y obras arquitectónicas, etc.

3. Obras escritas

Las que se valen de las palabras, las letras, los signos y las marcas convencionales como medio o formas de expresar las ideas.

4. Obras orales

Son las que emplean la palabra hablada como instrumento para transmitir las ideas, como por ejemplo: las conferencias, los sermones y todo tipo de alocuciones verbales.

5. Obras originales

Son aquellas cuya creación no está basada en ninguna obra preexistente. En ésta el autor no ha utilizado obras anteriores para desarrollar la suya.

6. Obras derivadas

Las que sin constituir copia o plagio de una obra preexistente la utilizan como base para la creación de una obra completamente nueva y autónoma. Normalmente se debe tener la autorización previa y expresa de los autores o titulares de las obras preexistentes. A modo de ejemplo podemos mencionar las adaptaciones, traducciones, compilaciones y las bases de datos.

7. Obras individuales

Las creadas por un único autor.

8. Obras de autoría plural

Aquellas que son creadas por dos o más personas. Se subdividen en:

- a) Obras en colaboración: Las creadas por dos o más autores, cuyos aportes no es posible identificar individualmente ni separarse.

- b) **Obras colectivas:** Las creadas por un conjunto de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que las coordine, las divulgue y las publique bajo su nombre.

9. Obras de dominio privado

Las obras que por estar vigente todavía su plazo de protección establecido por la ley, están bajo el control de sus autores o titulares y cualquier uso o explotación que se quiera hacer de ellas deberá realizarse con la autorización previa y expresa de aquellos.

10. Obras de dominio público

Aquellas obras cuya explotación por cualquier persona o institución, no requiere de autorización alguna, ya sea porque haya vencido su plazo de protección que señala la ley o en el caso de las obras extranjeras, cuando no haya convenio o tratados que garanticen su protección en un territorio determinado. Respecto al plazo de protección, el Convenio de Berna señala que la misma dura toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, cualquier plazo de protección calculado sobre la base distinta de la vida de una persona física, no podrá ser menor de 50 años contados desde la primera publicación autorizada de la obra o, a falta de publicación, dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra (no aplicable a las obras de fotografía o de arte aplicado). En el caso de Nicaragua, el plazo de protección es la vida del autor más 70 años después de su fallecimiento, según lo establece el Artículo 27 de la Ley No. 312.

En las obras seudónimas o anónimas y colectivas los derechos patrimoniales durarán setenta años desde su divulgación, a menos que antes de cumplirse este plazo fuere conocido el autor. En tal caso se aplicará lo previsto en el artículo 27.

En el caso de una obra en colaboración, el plazo de duración de los derechos previstos en el artículo 27 de la Ley se computará desde la muerte del último coautor sobreviviente.

Cabe señalar que los plazos establecidos en esta sección se computarán desde el primer día de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra.

11. Obras anónimas

Son aquellas que se divulgan o publican sin señalar el nombre o seudónimo del autor, independientemente que ésta sea la decisión del autor o porque se ignore su identidad.

12. Obras seudónimas

Las que son comunicadas al público por medio de seudónimo, para esconder la identidad del verdadero autor. El plazo de protección de ésta y las anteriores se computa a partir del momento en que se publican de forma lícita.

13. Obras postumas

Las que se divulgan y comunican al público después de la muerte de su autor o creador.

14. Obras musicales

Las obras de música con letra o sin ella, ej.: música popular (baladas, tonadas, coplas, etc.); música culta (sinfonías, coros, sonatas, música de cámara, etc.). La protección es igualmente independiente de su uso o destinación fines recreativos, culturales, publicitarios o comerciales.

15. Obras escénicas

Incluye prácticamente la totalidad de las obras teatrales, es decir, aquellas cuya escenificación se realiza frente a un público espectador. Dentro de esta categoría encontramos: Obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y de pantomima.

16. Obras de escultura

Las expresadas por medio de figuras o formas tridimensionales independientemente del material que se utilice.

17. Obras de pintura

Aquellas que son creadas combinando líneas y colores de forma armónica sobre una superficie.

18. Obras de dibujo

Las que se valen de las líneas como elementos de expresión creativa.

19. Obras de arquitectura

Las relacionadas con la construcción de edificaciones, ej.: planos, croquis, maquetas, modelos y la misma estructura arquitectónica ya construida.

20. Obras fotográficas y análogas

Las que constituyen una reproducción de la imagen de objetos de la realidad en una superficie sensible a la luz o cualquier otro tipo de radiación. Ej.: fotos, radiografías, etc.

21. Obras audiovisuales

Las que se crean mediante una secuencia de imágenes y sonidos, grabados sobre un material idóneo, y cuya finalidad es su ejecución o exhibición en público. Se incluyen las películas y los videos.

22. Otras

Multimedias, obras aplicadas a la industria, obras del folclore, programas de computación, bases de datos, obras de grabado, litografía, obras relacionadas con la geografía o topografía, obras creadas por computador, los chips (circuitos integrados), etc.

CAPITULO III

DEL AUTOR Y LA TITULARIDAD

I. Concepto de autor

El artículo 2, inco. 2.1. de la Ley No. 312 define al Autor como la persona natural que crea alguna obra, sea literaria, artística o científica. La Ley de Propiedad Intelectual de España en su artículo 5 inciso 2 da una definición idéntica.

Sólo puede considerarse como autor a la persona física que crea la obra, como quiera que es la única con la capacidad para realizar actos de creación intelectual a través de la palabra, música o el arte figurativo. En consecuencia, es en la persona física en quien inicialmente recaen los derechos de autor, entre otras cosas, porque las personas jurídicas, como en el caso de la Universidad, no tienen la posibilidad de realizar obras de intelecto⁹.

II. Contenido del derecho de autor y los derechos conexos

El derecho de autor y los derechos conexos están conformados por dos categorías principales de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Como hemos afirmado ya, y dado que por disposición de la ley, la obra está protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación, no es necesario proceder a trámite alguno, como el registro o depósito para obtener dicha protección.

1. Derechos morales

a) Concepto

En general, por derechos morales se comprende el derecho del autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación.

Estos derechos comenzaron a ser reconocidos a partir de la revolución francesa. Desde entonces no solamente se reconoció el derecho del autor a recibir una compensación por su creación intelectual, sino que también se respeta el derecho a la paternidad de la obra y la personalidad del autor.

⁹ Rubio, Felipe, Autoría y Titularidad, CERLALC, 1998.

El artículo 6 bis del Convenio de Berna señala que independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o reputación.

En nuestra legislación, el Artículo 19 de la Ley No. 312 establece que *"Corresponde al autor los siguientes derechos morales:*

i. Derecho a la paternidad

En virtud del cual debe ser reconocido como tal, en particular el derecho a que se indique su nombre en los ejemplares de su obra, y en la medida de lo posible, de forma habitual en relación con cualquier uso público de su obra.

ii. Derecho a la integridad

Que le faculta para exigir que se respete la integridad de la obra, por lo que podrá oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando pueda causar o cause perjuicio a su honor, legítimo interés o reputación.

iii. Derecho de divulgación

El autor es quien decide si su obra es divulgada, en que forma y momento.

iv. Derecho de retiro o arrepentimiento

Que le permite retirar la obra de circulación, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación de la obra.

v. Derecho de modificarla"

Respetando los derechos adquiridos por terceros.

b) Características de los derechos morales

La doctrina en general atribuye tres características fundamentales a los derechos morales, a saber:

i. Inalienabilidad

Ya que no puede ser objeto de venta, cesión o transmisión. Esto únicamente puede darse con los derechos patrimoniales. En virtud de esta característica, por poner un ejemplo, Carlos Mejía Godoy no puede vender, ceder o transferir a X persona el derecho para que ésta se atribuya la autoría de la canción "*La Tula Cuecho*".

ii. Irrenunciabilidad

Ya que el autor de una obra no puede renunciar a su autoría, toda vez que se ha hecho público que él es el creador de esa obra, ni siquiera que mediante contrato se haya establecido lo contrario.

iii. Perpetuidad

La calidad de autor no se extingue con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, William Shakespeare fue el autor de "*Romeo y Julieta*" y lo será por siempre.

Dos de estas características están señaladas para los derechos morales en el Artículo 20 de la Ley No. 312 porque establece que son irrenunciables e inalienables.

c) Sucesión de los derechos morales

La ley nicaragüense dispone en su artículo 21 que al fallecer el autor se transmite a sus herederos el ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 19 de la misma Ley, sin límite de tiempo. Sin embargo, el autor mediante testamento, podrá confiar el ejercicio de los derechos mencionados en el párrafo anterior a cualquier persona natural o jurídica.

A falta de herederos o de las personas designadas por el autor conforme se mencionan en el párrafo precedente, se procederá

según lo dispuesto en el Título VIII, artículos 1008 y siguientes del Código Civil "*De la Distribución de la Herencia*", en cuanto a los derechos mencionados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Ley No. 312, o sea, el derecho a la paternidad y a la integridad de la obra.

2. Derechos patrimoniales o económicos

a) Modalidades

Los creadores de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos y derechohabientes (por lo general denominados "titulares de los derechos") gozan de ciertos derechos básicos en virtud del derecho de autor, a saber, el derecho exclusivo a utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El titular o titulares de una obra pueden prohibir o autorizar:

1. Su reproducción bajo todas las formas, incluida la publicación impresa y la grabación sonora.
2. Su interpretación o ejecución pública, así como su comunicación al público.
3. Su radiodifusión.
4. Su traducción a otros idiomas.
5. Su adaptación, como en el caso de una novela adoptada en guión cinematográfico.

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren grandes esfuerzos de distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas con éxitos (por ejemplo las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen ceder los derechos sobre sus obras a empresas más capaces de desarrollar y comercializar sus obras, ello a cambio de una compensación en forma de pagos y/o regalías. (compensación basada en un porcentaje de los ingresos generados por la obra)¹⁰.

¹⁰ ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación de la OMPI No. 450(s). Pág. 19.

b) Principios de los derechos patrimoniales

Delia Lypszyc, experta de la OMPI en derecho de autor y derechos conexos y catedrática de la Universidad de Buenos Aires, señala los siguientes principios aplicables a los derechos patrimoniales y a los actos de transmisión de los mismos, a saber:

- La independencia de los derechos;
- El principio de la interpretación restrictiva de los contratos de explotación de las obras;
- Los derechos patrimoniales no están sujetos a *numerus clausus*;
- Los derechos patrimoniales no conocen más limitaciones que las establecidas en la ley;
- El autor puede fraccionar el ámbito de validez espacial y temporal de la autorización de uso de su obra;
- La presunción de onerosidad;
- El principio de la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material;
- El principio *"in dubio pro autore"*;
- La exclusividad en el uso autorizado debe ser expresa;
- Los contratos sobre derechos de explotación son *"intuitus personae"*;
- Los contratos deben constar por escrito;
- La obligación de respeto del derecho moral.

Por lo general, estos principios son acogidos en las legislaciones latinoamericanas, ya sea en forma expresa o bien solo implícitamente, en la regulación de los contratos típicos¹¹.

c) Derechos patrimoniales en los convenios internacionales

i) Convenio de Berna

El Convenio de Berna en su artículo 9 reconoce estos derechos al señalar que " *Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma*".

¹¹ Lypszyc, Delia. Transmisión de los Derecho de Autor y Conexos. Curso OMPI/SGAE, 2003.

ii) WCT (TODA)

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) amplía el derecho de reproducción al entorno digital, ya que el artículo 4 dispone que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco del Convenio de Berna (Art.2) y que dicha protección se aplicará tanto a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Este tratado también hace alusión en sus artículos 6, 7 y 8, al derecho de distribución, derecho de alquiler y derecho de comunicación al público, respectivamente, de los autores de obras literarias y artísticas, abarcando todo tipo de obras, incluyendo, como afirmamos atrás, a las del ambiente digital.

iii) Ley No. 312

Sobre los derechos patrimoniales, la ley No. 312 establece en el Artículo 22 que :

"Corresponde al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma".

Por su parte, en el artículo 23 encontramos las características de estos derechos: contrario a los derechos morales, éstos son alienables y temporales.

Esa misma norma dice que, sin perjuicio de otras modalidades, los derechos patrimoniales comprenden los siguientes:

1. Derechos de reproducción de la obra total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte. Se entiende como derecho de reproducción a la facultad de explotar la obra por medio de su fijación física y material en cualquier medio y a través de cualquier procedimiento, lo que hace posible a su vez la obtención de copias o ejemplares de la obra para su consecuente difusión pública. Comprende la a) Edición: tipografía, impresión, dibujo, grabado, fotografía, fotocopias, y en general cualquier procedimiento de artes gráficas. b) reproducción sonora o audiovisual: discos, casetes, videos, películas cinematográficas, etc. c) Reproducción gráfica de obras: fotocopias. d) Reproducción de obras en sistemas de computador: cintas, discos, disketes, etc.

2. **Derecho de transformación:** es la facultad que tiene el autor de explotar su obra autorizando la creación de obras derivadas. (Traducciones, adaptaciones, arreglos musicales).
3. **Derecho de traducción:** es cuando se realiza una versión de la obra en otro idioma.
4. **Derecho de adaptación.** Ésta constituye todo cambio o transformación de una obra para presentarlas al público a través de un género diferente al original. Ej: la novela de Mario Puzo, *"El Padrino"*, llevada al cine por Francis Ford Coppola.
5. **Derecho de comunicación al público.** Se entiende como la facultad de explotar una obra por medio del acto de hacerla accesible al público. Puede darse directamente, como una obra de teatro, un concierto, etc. o de manera indirecta: discos, videos, películas, etc. También se puede realizar a través de la radiodifusión (radio, televisión) o distribución por cable. Aquí se comprende las siguientes:
 - a) La declamación.
 - b) La representación, ejecución, en forma directa o indirecta.
 - c) La proyección y exhibición o exposición pública.
 - d) La transmisión digital o analógica, o por cualquier medio, por hilo o sin hilo, de sonidos, imágenes, palabras, a distancia, lo que comprende la captación en sitio público de obras y producciones protegidas, comprendida la puesta a disposición del público de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que ellos elijan.
 - e) El acceso público a base de datos informáticos por medio de la telecomunicación.
 - f) Radiodifusión.
6. **Derecho de distribución al público.**
7. **Derecho de alquiler.**
8. **Derecho de importación.**

Cabe recordar lo dispuesto por el Art. 9 del Reglamento en el sentido que las modalidades de explotación referidas en el Art. 23 son de carácter meramente enunciativo.

Asimismo, en dicho reglamento, el artículo 16 complementa el artículo 23 de la Ley, al decir que el contenido del derecho patrimonial

comprende especialmente el de modificación, comunicación pública, reproducción y distribución y que cada uno de ellos, así como sus respectivas modalidades, son independientes entre sí.

El autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra (Art. 17 Reg).

Profundizando en los actos considerados de comunicación pública, el artículo 18 del Reglamento complementa lo establecido en el Art. 23 de la ley, incluyendo los siguientes:

1. Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y artísticas de cualquier forma o procedimiento.
2. La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales: la emisión de una obra por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
3. La transmisión de cualquier obra al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
4. La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los numerales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o televisada.
5. La captación, en lugar accesible al público, mediante cualquier procedimiento idóneo, de la obra radiodifundida por radio o televisión.
6. La presentación y exposición públicas de obras de arte o de sus reproducciones.
7. El acceso público a bases de datos informáticos por medio de telecomunicación, cuando éstas se incorporan o constituyen obras protegidas.
8. La difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

La Reproducción comprende todo acto dirigido a la fijación material de la obra por cualquier forma o procedimiento o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, electrónico u otro similar.

También se considera como divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones.

En cuanto a la Distribución, ésta comprende el derecho del autor de autorizar o no la puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra, por medio de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler o cualquier modalidad de uso a título oneroso.

Por último, en relación al derecho de alquiler, los autores de programas informáticos, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras (Arts. 19, 20, 21 y 22 Reg).

Además de los derechos patrimoniales señalados en los párrafos anteriores, en los artículos 25 y 26 de la Ley podemos encontrar otros de diferente índole.

d) Transmisión de los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales pueden cederse por actos entre vivos en exclusividad o sin ella, quedando limitada al derecho o derechos concedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial, acorde a lo establecido en el artículo 46. Agrega esta norma que, a efectos de su cesión, los derechos se considerarán independientes entre sí.

Cabe mencionar que el Art. 12 del Reglamento dispone que salvo pacto en contrario, los efectos de la cesión de derechos patrimoniales, conforme el Art.46 de la Ley, se limitan a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato y al plazo y ámbito territorial pactados.

De no indicarse explícitamente y de modo concreto la modalidad de utilización objeto de la cesión, ésta quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la modalidad del mismo.

Según el artículo 47, cuando en el contrato no se indicara la duración, éste quedará limitado a cinco años. En el caso que no

se hubiere expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no especificaren de modo concreto las modalidades de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato.

Se considera nula la cesión de derechos por un período mayor de cinco años, respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor; así como el convenio en que el autor se comprometa a no crear ninguna obra, de acuerdo a lo que señala el Artículo 48.

La Ley establece el requisito que todas las transferencias deberán formalizarse por escrito.

i) Tipos de cesión

La cesión puede ser de dos formas: Exclusiva o No Exclusiva. En el primer caso, se deberá señalar en el contrato que se hace con ese carácter y la cesión así otorgada faculta al cesionario a explotar la obra con exclusión de los demás, incluyendo el cedente. También le permite conferir autorizaciones a terceros, salvo que se estipule lo contrario, y a perseguir, conjunta o separadamente con el cedente, las violaciones que afecten a los derechos cedidos. Advierte el artículo 53 in-fine que el cesionario en exclusividad está obligado a utilizar todos los medios necesarios a fin de asegurar una continua efectividad de la explotación otorgada, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

En el caso de la cesión no exclusiva, el cesionario únicamente puede utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente.

Cabe mencionar que en la reciente reforma a la Ley No. 312 con motivo de la implementación del DR-CAFTA, se incluyó el artículo 54 bis el cual dice: "Los artículos 55 a 85 de la presente Ley aplicarán únicamente a los contratos firmados en Nicaragua, a menos que las Partes estipulen lo contrario".

Las disposiciones antes apuntadas sobre la adquisición de la titularidad del derecho de autor se encuentran idénticamente establecidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España, en sus artículos 42, 43, 45, 48 y 50.

ii) Efectos de la cesión

Según lo dispuesto en el Art. 13 del Reglamento a la Ley 312, los efectos de un contrato de cesión de derechos patrimoniales, por aplicación de los Arts. 46 y 47 de dicha Ley, no alcanzan las modalidades de utilización inexistentes o desconocidas en la época de la transferencia, ni pueden comprometer al autor a no crear alguna obra en el futuro.

iii) Inscripción de la cesión

El Art. 15 del Reglamento establece la obligatoriedad de que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales, se inscriban en la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

III. Protección y contenido de los derechos conexos

1. En los convenios, tratados y acuerdos internacionales

- a) Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961).

Asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones radiodifundidas de los organismos de radiodifusión ¹².

En el primer caso, se protege a los artistas intérpretes o ejecutantes contra ciertos actos no autorizados por ellos, tales como: radiodifusión y comunicación al público de su interpretación o ejecución en directo; fijación de su interpretación o ejecución en directo; su reproducción en el caso que se haya hecho sin su autorización o con fines distintos para los cuales se autorizó.

¹² Reseña de Convenios, Tratados y Acuerdos Administrados por la OMPI, Publicación de la OMPI No. 442(S), Pág. 41.

A los productores de fonogramas se les otorga el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Por último, en el caso de los organismos de radiodifusión, se les concede la facultad de autorizar o prohibir: la retransmisión de sus emisiones; su fijación; su reproducción y su comunicación al público.

b) Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971)

Establece la obligación para los Estados contratantes de brindar protección a los productores de fonogramas de otros países contratantes en contra de: la producción de copias sin la autorización del productor; la importación de estas copias y la distribución de las mismas al público.

c) Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), (1996)

El Tratado se refiere a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas. Con respecto a los primeros, les confiere los siguientes derechos patrimoniales en relación a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas (no abarca fijaciones audiovisuales): derecho de reproducción; derecho de distribución; derecho de alquiler y derecho de puesta a disposición.

En relación a las interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o sea en directo, les concede los siguientes derechos: derecho de radiodifusión; derecho de comunicación al público y derecho de fijación.

En otro orden, el Tratado les confiere los siguientes derechos morales: derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante y derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación que pueda causar perjuicio a su reputación.

Respecto a los productores de fonogramas, en base al Tratado gozan de cuatro categorías de derechos patrimoniales con relación a sus

fonogramas: derecho de reproducción, derecho de distribución, derecho de alquiler y derecho de puesta a disposición.

El WPPT obliga a los países contratantes, el brindar, tanto a los artistas intérpretes o ejecutantes como a los productores de fonogramas, el llamado "trato nacional", o sea que, independientemente de la nacionalidad de éstos, deberá dárseles el mismo trato que a sus propios nacionales.

d) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)

Este Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también contiene disposiciones sobre la protección de los derechos conexos de los sujetos mencionados. En varios aspectos, son diferentes de las disposiciones contenidas en la Convención de Roma y en el Convenio de Ginebra.

2. Contenido de los derechos conexos en la Ley N°. 312

Como hemos afirmado anteriormente, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión son sujetos de la protección que brindan los derechos conexos.

- Artista intérprete o ejecutante

Es, según define nuestra ley, todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de folklore.

- Productor fonográfico

Es la persona natural o jurídica que fija, toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de los sonidos.

- **Organismo de radiodifusión**

Es la persona natural o jurídica que decide las emisiones de radiodifusión y el contenido de la misma, y que determina el programa así como el día y la hora de la emisión.

En la ley No. 312 se incorporan los derechos conexos a partir del artículo 86 y son los siguientes:

a) Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

- i. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho de autorizar o prohibir, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas:
 1. La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que esa interpretación o ejecución ya haya sido radiodifundida.
 2. El derecho a la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones.
- ii. Siendo el caso que las interpretaciones o ejecuciones estén ya fijadas, dichos artistas intérpretes o ejecutantes tendrán los siguientes derechos:
 1. El derecho de autorizar, llevar a cabo o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial, temporal o permanente, incluyendo el almacenamiento temporal de forma electrónica de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación en cualquier forma que sea.
 2. La distribución de esas misma interpretaciones o ejecuciones fijadas, ya sean en originales o copias, mediante venta u otra forma de transmisión de propiedad, incluyendo sus distribución a través de señales o radiodifusión o el alquiler.
 3. La comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico, incluyendo por radiodifusión.
 4. El alquiler y préstamo público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas, o la transmisión de posesión en cualquier forma permitida por la ley.

5. La puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones fijadas ya sea alámbrico o inalámbrico, de tal manera que el público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y al momento en que cada uno de sus miembros elija.
6. La adaptación o transformación de las interpretaciones o ejecuciones fijadas.

El artículo 88 establece que el artista tendrá siempre un derecho irrenunciable e intransmisible por acto entre vivos y deberá obtener una remuneración equitativa de los que exploten directamente cualquiera de los derechos señalados anteriormente, sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas. En caso contrario, el artista intérprete o ejecutante, tiene la potestad de acudir a la jurisdicción civil correspondiente, para que resuelva lo que tenga a bien en forma sumarísima. Esta facultad puede ejercitarse a través de una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, a quien puede transmitir dicha facultad.

iii. Derechos morales

Además de los derechos anteriormente señalados, los artistas gozarán del derecho al crédito de su nombre en sus interpretaciones o ejecuciones y al de oponerse a toda deformación o mutilación de su actuación que lesione su prestigio o reputación. Estos derechos son irrenunciables e intransmisibles. A su fallecimiento, el ejercicio de estos derechos pasará a sus herederos por un plazo de 70 años desde la muerte del artista.

iv. Duración

En nuestra legislación, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes tienen una duración de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la primera publicación de la interpretación o ejecución fijada, o en su defecto, al de su creación.

b) Derechos de los productores de fonogramas

- i. El artículo 92 de la Ley No. 312 otorga a los productores de fonogramas los derechos exclusivos de autorizar, llevar a cabo o prohibir:

1. la reproducción directa o indirecta, total o parcial, temporal o permanente, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación de cualquier forma que sea.
2. La distribución de sus fonogramas sea del original o de sus copias mediante venta u otra forma de transmisión de propiedad, incluyendo su distribución a través de señales o radiodifusión; o el alquiler.
3. La comunicación al público de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico, incluyendo por radiodifusión.
4. La importación de sus fonogramas o de sus copias o reproducciones.
5. La sincronización de sus fonogramas.
6. El alquiler y préstamo público de sus fonogramas o la transmisión de posesión por cualquier forma permitida por la Ley.
7. La puesta a disposición del público de los fonogramas, ya sea alámbrico o inalámbrico, de tal manera que el público pueda tener acceso a los fonogramas desde el lugar o al momento en que cada uno de sus miembros elija.
8. La adaptación o transformación de sus fonogramas

ii. Duración

La duración de los derechos mencionados es de setenta años, contados desde el primero de enero del siguiente año al de la primera publicación del fonograma o, en su defecto al de su fijación o creación.

c) Derechos de los organismos de radiodifusión

En último lugar, la Ley señala los derechos otorgados a los organismos de radiodifusión, los cuales consisten en el derecho de autorizar o prohibir:

- i. La retransmisión de sus emisiones de radiodifusión,
- ii. La reproducción de una fijación de sus emisiones,
- iii. La comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder solo mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

La duración de estos derechos es de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la emisión.

d) Derechos de los productores de grabaciones audiovisuales

Nuestra legislación no establece de forma directa derechos para el caso de los productores de obras audiovisuales, al contrario de la Ley Española, que en sus artículos 120 y siguientes, señalan entre otros: derecho exclusivo de autorizar la reproducción, directa o indirecta, del original y de las copias de la misma; derecho de comunicación pública; derecho de distribución, etc.

Sin embargo, el artículo 75 de la Ley No. 312, al tratar del contrato de producción audiovisual, establece la presunción de que, salvo pacto en contrario, los coautores de la obra audiovisual señalados en el artículo 11 de la misma, o sus derechohabientes, en su caso, han cedido en exclusividad al productor los derechos patrimoniales, con la aclaración que dicha presunción no abarca a los autores y derechohabientes de las composiciones musicales incorporadas a la obra.

e) Invulnerabilidad de los derechos de autor respecto de los derechos conexos

El Art. 11 del reglamento a la Ley 312 establece el principio de invulnerabilidad de los Derechos de Autor al señalar que de conformidad con lo establecido en la Ley en el Título II, Derechos Conexos, la protección reconocida a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, no podrá vulnerar de modo alguno la protección otorgada a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras interpretadas o ejecutadas, fijadas o emitidas, según los casos. En caso de conflicto entre titulares de derechos de autor y titulares de derechos conexos, se adoptará siempre la solución que más favorezca al titular del derecho de autor.

3. Presunción de autoría

Universalmente se acepta la presunción de que se presume autor de una obra, aquel cuyo nombre aparezca en ella, bajo cualquier forma

que lo haga indicar, a menos que se demuestre lo contrario. La Ley No. 312, en su artículo 6 establece que: *"Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma, seudónimo, iniciales o signo que lo identifique"*.

4. El titular del derecho de autor

Es la persona que ejerce los derechos de autor y éste puede ser de dos tipos:

- a) Originario: cuando la persona del titular coincide con la del autor de la obra
- b) Derivado: Es el caso que otra persona natural distinta del autor de una obra es el propietario de los derechos patrimoniales del autor producto de la cesión previa de los mismos. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables.

5. Adquisición de la titularidad

El artículo 45 de la Ley No. 312 establece que los derechos patrimoniales se transmiten por causa de muerte o por cualquiera de los modos admitidos en la Ley. En el primer caso, la transmisión se manifiesta de la misma forma que con el resto de los bienes que componen el patrimonio de una persona. Se puede transmitir por testamento o ab-intestato.

6. Titular de la obra anónima o seudónima

En el caso de tratarse de una obra anónima o seudónima, el titular o propietario del Derecho de Autor es la persona natural o jurídica (Editor) que la haga accesible al público en cualquier forma o procedimiento con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. De igual forma ocurre con el Derecho de Autor de la obra colectiva, el cual, salvo pacto en contrario, le corresponde a la persona que la edite o la divulgue (Art. 7 y 8 Ley No. 312).

Tratándose de las obras en colaboración, se requiere el consentimiento de todos los autores para divulgar y modificar la obra de colaboración. En este caso, los coautores, una vez divulgada la obra, ejercerán sus derechos de común acuerdo, sin que ninguno de ellos pueda rehusar

injustificadamente su consentimiento para la explotación de la obra en la forma en que se divulgó (Arts. 8, 9 y 10 Ley No. 312).

Si es el caso que varios autores han creado una obra en colaboración, la cual pertenece a géneros diferentes, cada cual podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución, siempre que no cause perjuicio a la explotación común (Art. 10 Ley No. 312).

7. Titulares de la obra audiovisual

En vista que en la creación de este tipo de obra participan varias personas y distintos fragmentos de obras, la ley establece la presunción que los derechos patrimoniales le corresponden exclusivamente al productor y los derechos morales al director. Esta presunción está contenida en el Art. 75 de la Ley No. 312.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley establece que son coautores de la obra audiovisual :

1. El Director-realizador.
2. Los autores del argumento, el guión y los diálogos.
3. Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.

De la misma manera lo establece el Art. 88 de la Ley española.

8. Titulares en relación laboral

Existen determinado tipo de obras protegidas por el derecho de autor que se realizan por encargo de un empleador. En este caso los derechos patrimoniales le corresponden al empleador, tal y como lo establece el Art. 52 de la Ley 312, la cual dice: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49, cuando se trate de una obra realizada por un autor por cuenta de una empresa natural o jurídica (en adelante denominada "empleador") en el marco de un contrato de trabajo y de su empleo, salvo disposiciones en contrario del contrato, el primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor, pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de la

creación de la obra. El empleador podrá demandar por infracciones a los derechos transferidos.”

9. Inembargabilidad de los derechos patrimoniales

Algunas legislaciones extranjeras permiten el embargo de los derechos patrimoniales derivados del derecho de autor. En nuestro caso no es así ya que el Art. 54 de la Ley 312 señala que no son embargables. De igual manera lo establece la legislación española en el Art. 53.2.

CAPITULO IV

EXCEPCIONES Y LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR

I. Justificación

Sin perjuicio del derecho exclusivo que el sistema jurídico otorga a los autores sobre las obras literarias y artísticas que crearon, protegidas por el simple hecho de su creación – con independencia de registros u otras formalidades - algunas excepciones o limitaciones a la regla general suelen restringir tal derecho absoluto en lo que se refiere a la utilización económica de la obra. La imposición de tales restricciones establecidas en virtud del Convenio de Berna o por conducto de la ley nacional, encuentra su justificación en el deseo de satisfacer los requerimientos del público y atender las necesidades de la información¹³.

Efectivamente, el fundamento principal para establecer determinadas excepciones y limitar al derecho de autor y los derechos conexos es el interés que la sociedad puede tener en el conocimiento y la información.

El ser humano a través de su inteligencia ha logrado crear a lo largo de la historia una gran cantidad de invenciones y obras que han permitido un gran desarrollo y bienestar para la humanidad, tanto en el plano físico como espiritual. Desde la invención de la rueda hasta el mapa del genoma humano; desde la *Ilíada* y la *Odisea* hasta los poemas de Rubén Darío, el hombre y la mujer han hecho progresar el conocimiento en sus diferentes áreas, valiéndose de su capacidad intelectual para satisfacer sus necesidades individuales y la de los demás.

Como ya hemos explicado antes, el derecho de autor le brindan protección al autor de las obras literarias y artísticas a fin de que éste se sienta motivado a seguir creando y produciendo. Sin embargo, la legislación debe tener presente el interés general de la sociedad y procurar que los intereses de ambos (autor y sociedad) no entren en contradicción.

Cabe destacar que las excepciones o limitaciones referidas son admitidas exclusivamente en el ámbito de los derechos patrimoniales. La legislación debe establecerlas de forma clara y no pueden ser extendidas a otras situaciones que no estén expresamente previstas, siendo de interpretación restrictiva.

¹³ Santiago, Vanisa. Duración de los derechos de autor y conexos y excepciones y limitaciones impuestas a los mismos. Dominio público “oneroso”. Curso OMPI/SGAE Lima, Perú. 2003.

II. Excepciones y limitaciones en el Convenio de Berna

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas señala algunas limitaciones y excepciones, por ejemplo la del artículo 2 inco. 8, que excluye del ámbito de protección a las noticias del día y los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Asimismo encontramos otras excepciones y limitaciones en el artículo 2 bis, incos. 1 y 2, que reservan a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección a los discursos políticos, los pronunciados en debates judiciales y otorga la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza pronunciadas en público pueden ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas o transmitidas por hilo al público con fines informativos.

Otra limitación establecida en el Convenio de Berna la encontramos en el Art. 9 inco. 2 y constituye a la vez la llamada Regla de los tres pasos para la reproducción de las obras, ya que éste faculta a los países miembros de la Unión el permitir la libre reproducción de obras literarias y artísticas (1) en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción (2) no atente a la explotación normal de la obra (3) ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Por último, el artículo 10 y 10 bis señalan otras excepciones, entre las cuales tenemos el Derecho de Cita, el uso de obras preexistentes como ilustración en la enseñanza y la utilización de determinados artículos y determinadas obras radiodifundidas, con tal que esa utilización sea conforme a los usos honrados.

III. Excepciones y limitaciones en el Convenio de Roma respecto a los derechos conexos

Las limitaciones a la protección de los titulares de derechos conexos se encuentra en el artículo 15 de la Convención de Roma. Indica dicha norma, que cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección de los artistas, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Los casos de limitaciones que señala la Convención de Roma son los

siguientes: a) cuando se trate de una utilización para uso privado; b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; y d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

En el inciso segundo del mismo artículo 15 de la Convención determinó que las legislaciones nacionales podrán restringir sus derechos en otras situaciones similares a aquellas establecidas respecto de los autores, siempre que exista una compatibilidad con sus disposiciones.

IV. Excepciones y limitaciones en la ley nacional

En el caso de la legislación nicaragüense, las excepciones y limitaciones al derecho de autor se encuentran reguladas a partir del artículo 31 de la Ley No. 312, y son las siguientes:

1. Copia privada (Art. 31)

Esta excepción establece que la reproducción doméstica de una obra divulgada y protegida por el derecho de autor en una sola copia, para uso personal y sin ánimo de lucro no necesita de autorización alguna. La ley nacional señala, sin embargo, una serie de casos donde no es aplicable la excepción, a saber:

- a) La reproducción de obras de arquitectura que revista la forma de edificios o de otras construcciones similares.
- b) La reproducción reprográfica de un libro íntegro o de una obra musical en forma gráfica (partituras).
- c) La reproducción de la totalidad o de partes importantes de bases de datos en forma numérica.
- d) La reproducción de programas de ordenador, salvo en los casos previstos en el artículo 39 de la presente Ley.
- e) Ninguna otra reproducción de una obra que pudiera afectar a la explotación normal de la obra o que pudiera perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor.

A pesar que esta excepción es contemplada en una gran cantidad de países desde hace mucho tiempo, los avances tecnológicos modernos en lo que se refiere a los medios de reproducción (videocámaras,

quemadores de CD y DVD, Internet, fotocopadoras, etc.) y su consecuente detrimento económico para el autor, ha hecho que este tema se aborde en la actualidad de forma distinta. Algunos países tratan de compensar estas pérdidas para el autor en virtud de la copia privada, estableciendo una especie de "impuesto" al precio de los medios de reproducción, que se concretiza en una mínima elevación porcentual del mismo. Al mismo tiempo, se han constituido sociedades de gestión colectiva de derechos reprográficos encargadas del cobro, administración y distribución de ese "impuesto", con lo cual se compensa al autor por la utilización de su obra bajo el amparo de esta excepción.

2. Derecho de cita (Art. 32)

En lo que atañe al derecho de autor, citar significa utilizar en una obra uno o varios extractos de obras ajenas. Admitida para ilustrar una opinión, defender una tesis o hacer una apreciación o reseña de una obra, dicha inserción puede ser utilizada lícitamente en un texto literario, en una emisión radiodifundida, en una grabación sonora, visual o audiovisual, siempre que se cumplan tres condiciones:

- a. La obra de que se toma el extracto debe haber sido publicada para conocimiento del público en general y en forma lícita, es decir, mediante la autorización del autor, o en virtud de una licencia no voluntaria;
- b. Es necesario que sea hecha conforme a los usos honrados, entendiéndose como tal lo que es admisible corrientemente, o sea, lo que no se opone al sentido común; y
- c. Deberá ser admitida solamente en la medida justificada por el fin que se persiga. Esa es una de las formas de utilización libre y gratuita incluidas en el Convenio de Berna, y comprende las citas de artículos periodísticos y colecciones bajo la forma de revistas de prensa.

Las obligaciones relativas a la mención de la fuente y a la indicación del autor, si este nombre figura en la fuente, se establecen en el párrafo 3) del Art. 10 del Convenio de Berna y corresponden a la observancia de los derechos morales ¹⁴.

Esta excepción permite, sin la autorización del autor, la reproducción de un fragmento de obras ajenas, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, siempre que, como decíamos antes,

¹⁴ Santiago, Vanisa, Duración de los derechos de autor y conexos y excepciones y limitaciones impuestas a los mismos, Dominio público "oneroso", Curso OMPI/SGAE Lima, Perú, 2003.

se trate de obras ya divulgadas y esa reproducción se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, en la medida justificada por el fin que se persiga, conforme a los usos honrados e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Lo importante en este caso es respetar el derecho moral del autor. Algunas legislaciones extranjeras establecen un límite al derecho a cita, como es el caso de Argentina que impone un máximo de mil palabras u ocho compases para las obras musicales. La ley No. 312 no señala límites, pero es obvio que la excepción en sí misma está limitada por el uso razonable de la obra.

3. Reproducción de obras para la enseñanza (Art. 33)

De nuevo nos encontramos en una situación en la que la ley debe procurar un equilibrio entre los intereses del autor, por un lado y la sociedad por el otro. Es obvio, que el derecho a la educación como derecho humano y con el rango constitucional que posee no puede verse afectado por una rígida protección al derecho del autor. Por lo tanto, es permitido, sin requerir la autorización del autor, la reproducción por medios reprográficos y siempre que sea para fines de enseñanza, de artículos aislados publicados en la prensa de extractos cortos de una obra, siempre que una y otra hayan sido publicadas. Los requisitos para que esta limitación tenga lugar son:

- a) Que la reproducción se efectúe en establecimientos de enseñanza.
- b) Que no existan fines de lucro, directo o indirecto.
- c) Que se realice en la medida justificada para el objetivo que se pretenda alcanzar y conforme a los usos honrados.
- d) Que se cite la fuente y el nombre del autor, si figura en la obra.

4. Reproducción de obras mediante sistema braille u otro análogo (Art. 34)

Por razones humanitarias obvias, algunas legislaciones (incluyendo la nuestra) permiten sin la autorización del autor, la reproducción de una obra para uso privado de los no videntes, siempre que la reproducción o copia se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que la misma no tenga fines de lucro.

5. Reproducción de obras para uso de bibliotecas y archivos (Art. 35)

Teniendo presente siempre el interés común, nuestra ley permite que las bibliotecas y servicios de archivo puedan reproducir, sin autorización del autor, ejemplares aislados de una obra que forme parte de su colección permanente a fin de conservarlos o de reemplazarlos, siempre y cuando el ejemplar en cuestión se haya perdido, destruido o se haya hecho inutilizable. Las exigencias son que no exista fin lucrativo directo o indirecto y que dicho ejemplar no se pueda adquirir en un tiempo y bajo condiciones razonables. En la legislación española, el artículo 37 incluye, además de las dos anteriores, a los museos, fonotecas, filmotecas, y hemerotecas.

6. Anotación de conferencias o lecciones en centros de enseñanza (Art. 36)

Las conferencias o lecciones dictadas en centros educativos pueden ser anotadas y recogidas libremente pero se establece la prohibición que las mismas puedan ser publicadas o reproducidas integral o parcialmente, sin la autorización expresa del autor.

7. Parodias (Art. 37)

Este tipo de obras es aquella que constituye una derivación de una obra literaria o artística preexistente convertida en una imitación burlesca. Nuestra ley no considera que en el caso de la parodia de una obra divulgada se trate de una transformación de la obra original. Por lo tanto, no se exige la autorización del autor.

8. Comunicación pública en establecimientos comerciales (Art. 38)

En el caso de las tiendas del comercio donde se comercializan fonogramas o videogramas, equipos de sonido, televisión, video, etc. no será necesaria la autorización del autor por efectuar la comunicación pública de sus obras siempre y cuando dicha actividad se realice con el propósito de demostrar a la clientela el contenido o funcionamiento de tales soportes, materiales o aparatos, en la medida estrictamente necesaria para dicho fin y no como reclamo o publicidad de los mismos.

Es de hacer notar que el artículo 38 que contiene esta limitación adolece de una omisión y es incoherente, pues no dice claramente que no se necesitará de la autorización del autor en estos casos.

9. *Copia de programas de ordenador (Art. 39)*

Permite esta limitación, que el dueño de un ejemplar de un programa de cómputos pueda, sin la autorización del autor, realizar una copia o la adaptación de ese programa, siempre que dichos actos sean:

- a) Necesarios para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se diseñó el programa.
- b) El archivo o reemplazo del ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que éste se haya perdido, destruido o sea inutilizable.

10. *Reproducción de artículos de actualidad (Art. 40)*

Es posible la reproducción, distribución y comunicación pública de porciones de artículos sobre temas de actualidad económica, política o religiosa, difundidos por los medios de comunicación social por cualesquiera otro de la misma clase sin contar con la autorización del autor, salvo que dichos actos se hayan reservado expresamente. Se exige siempre la indicación clara de la fuente y el nombre del autor, si figura en el Artículo.

11. *Reproducción de conferencias, discursos, alocuciones, informes ante los tribunales o autoridad administrativa (Art. 41)*

No existe inconveniente tampoco respecto de la reproducción, distribución y comunicación pública sin la autorización del autor de las conferencias, discursos, alocuciones, informes ante tribunales o autoridad administrativa y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público por los medios de comunicación social, siempre que esos actos se realicen con el exclusivo fin de informar de la actualidad y citando el nombre del autor. Se reserva el derecho del autor a publicar en colección tales obras.

12. *Reproducción de obras sobre acontecimientos de actualidad (Art. 42)*

Consiste esta excepción, en permitir la reproducción, distribución y comunicación pública sin la autorización del autor de cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad. Sin embargo, es requisito que dichos actos se realicen en la medida justificada por dicha finalidad

informativa. Dependiendo de la naturaleza de la obra, solo en casos excepcionales la reproducción podrá ser total.

13. Reproducción de obras artísticas ubicadas permanentemente en sitios públicos (Art. 43)

La legislación nicaragüense permite, sin contar con la autorización del autor y solamente para el uso personal, la reproducción por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía y las grabaciones audiovisuales de obras colocadas de manera permanente en parques, calles, plazas u otras vías públicas. Tratándose de obras de arquitectura, la disposición sólo será aplicable a su aspecto exterior.

V. Limitación en cuanto al tiempo de la protección

En el capítulo II de este libro, cuando hacíamos referencia a las obras de dominio público nos referimos al tema de la duración de la protección que brinda el derecho de autor y los derechos conexos. Como se recordará, el Convenio de Berna señala que dicho plazo dura toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, pero hay que tener presente que se deja al arbitrio de los Estados contratantes establecer plazos mayores de protección. Nuestra legislación establece un plazo de protección equivalente a la vida del autor más 70 años después de su fallecimiento (Art. 27 Ley No. 312).

En el caso de los derechos conexos, la misma ley establece en el artículo 90 que tienen una duración de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la primera publicación de la interpretación o ejecución, o en su defecto al de su creación.

VI. Interpretación restrictiva de limitaciones

Por último, es de destacar que el Art. 10 del Reglamento a la Ley 312 señala que los límites al derecho patrimonial establecidos por la sección II, Capítulo V, por su excepcionalidad, son de interpretación restrictiva.

CAPITULO V

LICENCIAS Y CONTRATOS

I. Licencias

El autor de una obra literaria o artística puede conceder licencias a otras personas para la realización de actos derivados de sus derechos patrimoniales. Las licencias tienen la particularidad que no transfieren de ninguna manera el derecho de explotación que pertenece al autor, sino que por medio de ellas se conceden autorizaciones de uso o disfrute concretos de la obra. Constituyen la modalidad contractual que generalmente establecen las legislaciones en la regulación de los contratos típicos del derecho de autor.

Tal y como indica el artículo 52.2 de la ley nicaragüense, las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

Las licencias exclusivas son comunes en materia de edición de obras literarias y de representación de obras dramáticas y dramático-musicales. El titular de una licencia en exclusiva tiene derecho a explotar la obra por los modos y en los ámbitos de vigencia temporal y espacial expresamente previstos en el contrato, con exclusión de todas las demás personas, comprendido el autor o su derechohabiente.

La ley considera que una licencia es exclusiva únicamente si está expresamente estipulado en el contrato concertado entre el autor y el titular de la licencia.

Las licencias no exclusivas son propias en materia de reproducción de obras artísticas para ilustración, de inclusión fonográfica y de ejecución pública de obras musicales. La licencia exclusiva autoriza a su titular a realizar, de la forma que le esté permitido en el contrato, los actos a los que ésta hace referencia y de conformidad con las modalidades de utilización comprendidas en la autorización, tolerando la concurrencia en el mercado del autor y demás titulares de licencias no exclusivas.

II. Contrato de edición (Arts. 55 al 65 Ley 312)

Existen ciertos tipos de obras que, dada sus características, se hace compleja su plena explotación por parte del autor en vista que se

requiere una considerable inversión económica y conocimientos de mercadeo, que en la mayoría de los casos éste no posee. Por lo tanto, se hace necesario que el autor o los titulares de la obra, cedan los derechos de reproducción y distribución a una persona natural o jurídica que se encargará de su efectiva explotación. El caso típico es el de los libros. El instrumento adecuado para la cesión de estos derechos es el llamado Contrato de Edición.

1. Definición

La Ley No. 312 en su artículo 55 define al contrato de edición como el celebrado entre el autor o sus derechohabientes y el editor, en virtud del cual los primeros, mediante remuneración, conceden al segundo los derechos de reproducción y distribución de la obra. Señala la misma norma que el editor queda obligado a realizar las operaciones referidas por su cuenta y riesgo, de acuerdo a las condiciones pactadas y sujetándose a lo dispuesto en la Ley.

2. Requisitos del contrato de edición

Nuestra legislación exige que el contrato de edición se formalice por escrito, expresando lo siguiente:

- a) Si los derechos se conceden en exclusiva.
- b) Su ámbito territorial.
- c) El número de ejemplares que tendrá la edición o cada una de las que se convengan. Para la segunda y sucesivas ediciones bastará con que se determine el número máximo o el mínimo de esos ejemplares.
- d) La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra.
- e) La remuneración del autor.
- f) El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor.
- g) El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición convenida, que no podrá exceder de dos años, contados desde la entrega del original por el autor.
- h) Deberá comprometer al Editor a emitir certificado notariado de los ejemplares de que consta la edición en cuestión.

Asimismo, deberá imprimirse en números, en cada ejemplar, la cantidad de unidades de que consta la edición respectiva.

3. Casos de nulidades y omisiones

La ley únicamente establece la nulidad del contrato de edición cuando éste no se haya formalizado por escrito o en el caso que no exprese el número de ejemplares y la remuneración del autor.

Si no se indica que el contrato se ha hecho con carácter exclusivo en relación a la cesión de derechos, deberá entenderse que se ha otorgado sin exclusividad.

Tratándose de la edición de un libro, el contrato debe señalar el idioma en que ha de editarse. En dicho caso, se entenderá cedido al editor el derecho de traducción de la obra. A falta de esta indicación el editor solo podrá editarla en el idioma original.

4. Obligaciones de los contratantes

a) Obligaciones del editor

- i. Someter las pruebas al autor.
- ii. Reproducir la obra en la forma convenida, respetando el derecho moral del autor.
- iii. Proceder a la puesta en circulación de los ejemplares de la obra en el plazo y condiciones estipulados.
- iv. Asegurar a la obra una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición.
- v. Satisfacer al autor la remuneración estipulada, presentándole, al menos cada seis meses, como mínimo, un informe del estado de cuentas referente al número de ejemplares impresos, vendidos, en depósito, así como los derechos de autor que le corresponden.
- vi. Restituir al autor el original de la obra una vez finalizada la impresión de la misma.

b) Obligaciones del autor

- i. Entregar al editor los originales de la obra en forma debida y dentro del plazo fijado.

- ii. Garantizar al editor la autoría y originalidad de la obra.
- iii. Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

4.1 Causas de resolución del contrato

El autor podrá resolver el contrato de edición en los casos siguientes:

- a) Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidas.
- b) Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero.
- c) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, el editor no efectúa la siguiente en el plazo de un año desde que fuese requerido para ello por el autor. Una edición se considera agotada a los efectos de este artículo cuando el número de ejemplares en existencia sea inferior a cien.
- d) En los supuestos de cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas por el autor en concepto de anticipo sobre las que le correspondan en el futuro como remuneración.
- e) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en el artículo 60 de la Ley 312, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.
- f) Cuando, a consecuencia de quiebra del editor o de otro procedimiento concursal planteado contra el mismo, se suspenda la explotación de la obra, si dicha explotación no se reanuda dentro del plazo fijado al efecto por el Juez a instancia del autor.
- g) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los ejemplares que le resten de la edición sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 64 de la presente Ley.

5. *Contrato de edición de obras musicales, dramático-musicales y coreográficas*

La Ley 312 dispone para este tipo de contratos que se ceden al editor, además de los derechos de reproducción y distribución, los de comunicación pública. Estos contratos se rigen por las mismas

disposiciones explicadas con anterioridad, más las estipulaciones siguientes:

- a) Será válido el contrato en que se exprese el número estimado de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades de las explotaciones concedidas, estimadas de acuerdo con el uso en el sector profesional de la edición musical.
- b) Para las obras dramático-musicales, las conocidas como de música seria y las coreográficas que incorporen composiciones de este género, el plazo previsto en el numeral 7) del artículo 57 de la Ley 312, será de cinco años.

Por último, cabe mencionar que todas las disposiciones que la Ley No. 312 establece para el Contrato de Edición explicadas anteriormente no se aplican a las obras cuya reproducción y distribución tengan por destino una publicación periódica.

III. Contrato de representación (Arts. 66 al 74 Ley 312)

1. Definición

El contrato de representación es el convenio mediante el cual el autor o sus derechohabientes autorizan a un empresario el derecho de representación pública de una obra dramática, dramático-musical, coreográfica o pantomímica mediante un precio, quedando el empresario obligado a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Dicho convenio se puede establecer a un plazo determinado o por una cantidad determinada de representaciones. Cualquiera que sea el caso, dicho contrato no podrá exceder el plazo de dos años contados desde que el autor puso al empresario en condiciones de realizar la representación.

2. Obligaciones de los contratantes

a) Obligaciones del autor

Se obliga el autor a entregar al empresario el texto de la obra, con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma impresa, y responderá frente al mismo de su autoría, de la originalidad de la obra y del ejercicio pacífico del derecho que le cede.

b) Obligaciones del empresario

El empresario queda obligado a:

- i. Llevar a cabo la representación pública de la obra en la modalidad o modalidades convenidas y dentro del plazo pactado o determinado en los artículos anteriores.
- ii. Efectuar dicha representación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes y supresiones no consentidas por el autor y en condiciones técnicas y artísticas que no perjudiquen el derecho moral de éste.
- iii. Facilitar al autor o a sus representantes la inspección de la representación y la asistencia a la misma gratuitamente.
- iv. Satisfacer puntualmente al autor la remuneración convenida, que se determinará conforme a lo dispuesto en esta Ley, si bien, cuando la asistencia del público sea gratuita, la participación proporcional del autor se calculará sobre el total importe de los gastos realizados por el empresario para la celebración del acto o actos.
- v. Presentar al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos y una declaración de los ingresos, entre lo que se comprenderá cualquier subvención o ayuda, y en defecto de ellos, los gastos.

El empresario tendrá el carácter de depositario de la remuneración correspondiente al autor y deberá tenerla diariamente a disposición de éste o de sus representantes.

3. Disposiciones especiales del contrato de representación

La Ley 312 establece una serie de disposiciones especiales para el contrato de representación, a saber:

- a) Corre por cuenta del empresario la obtención de las copias necesarias para la representación de la obra, las cuales estarán firmadas por el autor.
- b) Ambas partes elegirán de mutuo acuerdo los intérpretes principales; si participaren orquestas, coros o grupos artísticos análogos, también lo hará el director del grupo.
- c) La redacción de la publicidad de la representación o representaciones será convenida entre ambos.

Si surgiera una controversia entre autor y empresario, pueden éstos acudir al Juez Civil de Distrito o Local, dependiendo de la cuantía, para que resuelva lo que tenga a bien en forma sumarásima, según los usos profesionales y comerciales.

4. Revocación del contrato

El contrato podrá revocarse a instancia del autor en las siguientes situaciones:

- a) Si el empresario al que se le hubiese concedido el derecho en exclusividad, una vez iniciadas las representaciones, las interrumpiere durante seis meses.
- b) Si el empresario incumpliere sus obligaciones legales, siempre que, en cuanto a estas últimas, el empresario haya dejado transcurrir el plazo de quince días desde el recibo del requerimiento que al efecto le haya dirigido el autor persistiendo en el incumplimiento.

La revocación del contrato la puede hacer el empresario cuando, tratándose de una obra de estreno y estipuladas varias representaciones, ésta hubiera sido rechazada claramente por el público en la primera, salvo estipulación expresa en contrario.

5. Aplicación extensiva de las disposiciones sobre el contrato de representación

Todas las disposiciones que la Ley 312 establece para los contratos de representación son aplicables en lo que sea pertinente y en la medida en que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de los correspondientes contratos, el género de las obras objeto de los mismos y la modalidad de comunicación pública estipulada en ellos, a las concesiones exclusivas o no exclusivas de recitación pública de obras literarias, de ejecución pública de obras musicales, de exhibición pública de obras audiovisuales y de emisión, retransmisión y distribución por cable de cualquier clase de obras.

IV. Contrato de producción audiovisual

1. Definición

Es el contrato mediante el cual los autores de una obra audiovisual se obligan frente al productor a aportar a la creación de la obra sus respectivas contribuciones intelectuales mediante la cesión de los derechos de explotación que se estipulen.

Es de resaltar que la ley establece la presunción, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual (el Director-realizador, los autores del argumento, el guión y los diálogos y los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra) o sus derechohabientes, en su caso, han cedido en exclusividad al productor los derechos patrimoniales, con la excepción de los autores y derechohabientes de las composiciones musicales incorporadas a la obra.

2. Derechos de los autores de la obra audiovisual

Salvo pacto en contrario, los autores pueden disponer de sus aportaciones a la obra audiovisual para utilizarlas en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra.

También podrán disponer de sus aportaciones para otra obra audiovisual, una vez que haya transcurrido el plazo de quince años

de haberlas puesto a disposición del productor o antes del mismo según lo hubieren convenido con éste, si ello no causare perjuicio al productor.

Tratándose de obras preexistentes utilizadas en la obra audiovisual, sus autores y los derechohabientes conservarán siempre los derechos de explotación en forma de edición gráfica y de representación teatral.

Los autores de la obra audiovisual y a sus derechohabientes poseen además un derecho de remuneración, irrenunciable e intransmisible por actos entre vivos, por cada una de las modalidades de explotación que hayan cedido al productor en el contrato.

3. Obligaciones del productor

El productor tiene con respecto al autor las siguientes obligaciones:

- a) Presentar a los autores, como mínimo una vez cada seis meses, la relación de los ingresos procedentes de la explotación de la obra.
- b) Poner a disposición de los autores todos los documentos que permitan establecer la exactitud de las cuentas y, en particular, los contratos por los que haya cedido a terceros la totalidad o parte de los derechos de que disponga.

A los autores les corresponde la responsabilidad de la originalidad de su aportación a la obra y del ejercicio por parte del productor de los derechos cedidos.

4. Caducidad de los derechos cedidos

Si es el caso que la obra audiovisual no se inicia en el plazo de dos años o en el convenido por las partes, contados desde que el autor puso a disposición del productor o de su derechohabiente, en su caso, su aportación literaria musical, los derechos cedidos en el contrato de producción caducarán de mero derecho.

5. Resolución del contrato

El contrato de producción audiovisual puede resolverse a instancia de cualquiera de las partes por las causas de resolución de los contratos y en especial cuando la actividad de la empresa del productor haya cesado por más de tres meses o en los casos de quiebra o declaración de insolvencia.

CAPITULO VI

PROTECCIÓN EFECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

I. Acciones y procedimientos

1. Introduccion

De nada serviría la protección otorgada por los convenios, tratados internacionales y legislaciones nacionales a los titulares de derecho de autor y derechos conexos si no se contara con un mecanismo legal eficaz y ágil para hacer valer esos derechos ante la violación de éstos por terceros. Por tal razón, existen disposiciones que permiten a los titulares recurrir a la vía judicial o administrativa para solicitar la tutela jurídica de sus derechos morales o patrimoniales cuando son desconocidos, en lógico detrimento de sus intereses.

Habida cuenta de que no siempre se respetan los derechos de terceros, las actividades encaminadas a velar por la observancia de los derechos de propiedad intelectual son fundamentales. Las razones de esta inobservancia son muchas y variadas y van desde la codicia, la necesidad percibida, la falta de conciencia y el acto delictivo deliberado, hasta el error de ingenuidad. El grado de estas infracciones varía también considerablemente, desde la copia ilegal de una obra protegida que se hace en el propio domicilio para uso personal hasta la actividad delictiva de grandes empresas que producen cientos de miles de copias. Cuando los productos ilegales logran obtener una cuota de mercado (o consiguen aniquilar incluso un mercado potencial) o cuando impiden una inversión mediante una actividad delictiva, corresponde a los mecanismos que velan por el cumplimiento de la ley proteger los intereses vitales, no solo de los titulares de los derechos en cuestión sino del público en general¹⁵.

2. Disposiciones generales del acuerdo sobre los ADPIC

Considero necesario, antes de pasar al análisis de la legislación nacional sobre este tema, hacer referencia a las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de 1994, el cual es obligatorio para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¹⁵ Idris, Kamil, La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico, Reseña, Pág. 31. Publicación de la OMPI No. 888.1 (s) Junio 2003.

El artículo 41 del Acuerdo establece ciertas obligaciones generales, indicando que los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en esta parte del Acuerdo. Estos procedimientos deberán permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

El Acuerdo también insta a que estos procedimientos sean justos y equitativos sin ser innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Las resoluciones que sobre el fondo de un caso se dicten se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

Asimismo, se concede a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

Advierte el Acuerdo que no es obligación de los Miembros el instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Tampoco, se crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

3. Disposiciones de la legislación nacional

a) Derecho de acción

El artículo 97 de la Ley 312 concede a los titulares, sean éstos originarios o derivados, de los derechos de autor y derechos conexos y los cesionarios en exclusividad de los mismos, la facultad de instar, en caso de violación de su derecho, el cese de la actividad ilícita y exigir la indemnización de los daños morales y patrimoniales causados, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan.

También les otorga la facultad de solicitar la adopción de las medidas de protección provisional que se establecen en la ley.

Con la reciente reforma a la Ley No. 312, se adicionaron los artículos 97 bis 1 y 97 bis 2, los cuales señalan:

“Se presumirá en ausencia de prueba en contrario que la persona cuyo nombre es indicado como el autor, productor, intérprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma. Se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el Derecho de Autor o Derechos Conexos subsisten en dicha materia.”

“Las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las sentencias, decisiones o resoluciones, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Dichas sentencias, decisiones o resoluciones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna manera.

Por cese de la actividad ilícita se comprende:

a) La prohibición de realizar los actos en que consista, incluyendo entre otros, prohibir la entrada a los canales de comercio de los

bienes ilícitos importados, inmediatamente después de la liberación aduanera de dichos bienes o para prevenir su exportación .

b)La retirada de la circulación de los ejemplares ilícitos y su destrucción, o con la autorización del titular del derecho, la donación con fines de caridad.

c)El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la producción o creación o comercialización de los bienes ilícitos, excepto en casos de donación con fines de caridad y con autorización del titular del derecho. La destrucción o donación con fines de caridad de los materiales y equipos se hará sin compensación alguna. Las autoridades judiciales, al considerar las solicitudes de destrucción de los equipos, podrán tomar en cuenta, entre otros, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.;

d)El decomiso de la evidencia documental relevante a la infracción.

Este artículo señala que la autoridad judicial y para mejor proveer, está facultada para ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución y proporcionarle esta información al titular del derecho.

b)Presunción de afectación de los derechos morales y su indemnización

Es importante hacer notar que la ley establece la presunción de haberse lesionado también el derecho moral del autor, no solamente por las violaciones de algunas de sus facultades sino también por la infracción de cualquier derecho de explotación en exclusiva de las obras.

La indemnización de los daños morales cabe en ambos casos, sin perjuicio de la que proceda por daños patrimoniales, incluso si no fuere probada la existencia de perjuicio económico derivados de aquellos. A fin de calcular dicha indemnización se tomarán en cuenta las circunstancias de la violación, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

c) Formas de indemnizar al titular del derecho por los daños patrimoniales.

Sobre este particular, el arto. 100 de la Ley señala que los infractores están obligados a indemnizar al titular de la siguiente manera:

- i. Indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
- ii. Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el párrafo anterior.

La misma norma establece que al determinar los daños los jueces deben considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

d) Costas procesales y legales

Independientemente de la naturaleza de los daños resarcibles, al fijar el monto a indemnizar el Juez podrá ordenar al infractor el pago de las costas del proceso así como los honorarios razonables del Abogado patrocinador del afectado, salvo casos excepcionales (Art. 101).

e) Medidas cautelares

Siempre que se trate de la violación de derecho de autor o derechos conexos, el perjudicado podrá solicitar al Juez competente la adopción de las medidas de aseguramiento que en dependencia de las circunstancias, fuesen necesarias para la eficaz y urgente protección de los derechos. A este fin el Juez podrá decretar la prohibición o

suspensión de la actividad infractora, el secuestro de los ejemplares reproducidos o utilizados en ella y el de sus instrumentos, así como los depósitos de los ingresos obtenidos por la misma.

Para la adopción de las medidas cautelares a que hemos hecho referencia se deberán tomar en cuenta las siguientes reglas:

i. Competencia

Son competentes para conocer de estas medidas los Jueces de Distrito en cuya circunscripción haya tenido o tenga efecto la violación del derecho o el del lugar donde se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos, a elección del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda sobre el fondo, será único Juez competente, para cuanto se relacione con las medidas adoptadas, el que conozca de aquéllas.

En caso que las medidas se solicitaren simultáneamente con la interposición de la demanda sobre el fondo o bien durante la tramitación del proceso, será competente el Juez o Tribunal que conozca de éste.

ii. Trámite

Dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito de petición de la medida cautelar, el Juez oír a las partes que hayan comparecido al llamado. Vencido el plazo se pronunciará sobre la solicitud. Sin embargo, podrá el Juez autorizar las medidas solicitadas sin necesidad de oír a la otra parte, en caso que cualquier dilación pudiese ocasionar daños o perjuicios irreparables al interesado o existiese un riesgo evidente de que el infractor pudiese destruir o hacer desaparecer las pruebas de la violación o los ingresos de la actividad infractora cuyo depósito se haya pedido.

iii. Reconocimiento Judicial

En caso que lo consideren oportuno, las partes pueden solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial. Si el Juez la admitiese, ésta tendrá lugar a lo inmediato, pudiendo el Juez decretar medidas precautorias en los casos que lo amerite.

iv. Fianza de costas, daños y perjuicios

Siempre que lo estime pertinente, el Juez puede oficiosamente exigir al solicitante fianza para responder de los perjuicios y costas que pueda ocasionar. Dicha fianza se puede imponer antes de dictar la resolución cautelar o en la misma.

v. Tipo de resolución y recursos contra la misma

Las resoluciones que se dicten en materia de las medidas cautelares de que se ha venido hablando, se harán en forma de sentencia interlocutoria. En contra de ellas se podrá recurrir para ante el superior respectivo dentro del plazo de tres días a partir de la notificación. No obstante, la interposición de este recurso no suspenderá la ejecución de las medidas decretadas.

vi. Reiteración de la medida

Siempre que ocurriesen nuevos hechos relacionados con la violación de los derechos del titular o obtuviese pruebas de las que hubiese carecido con anterioridad, éste podrá solicitar nuevas medidas cautelares.

vii. Imposición de medidas sin necesidad de notificación

En los casos que el juez lo considere necesario, se podrá realizar la medida cautelar en contra del supuesto infractor sin necesidad de notificación previa.

viii.- Facultad del Juez para exigir pruebas al demandante de la infracción.

El inciso 8 del reformado artículo 103 le concede al Juez la facultad de exigir al actor que presente las pruebas razonablemente disponibles para acreditar de forma suficiente y con certeza que el derecho del actor está siendo o será objeto de una infracción.

f) Caducidad de las medidas

Una vez ejecutadas las medidas cautelares en contra del supuesto infractor, el solicitante deberá interponer la respectiva demanda

sobre el fondo de la violación en un plazo de veinte días desde que aquellas comenzaren a surtir efectos. Vencido ese plazo sin que se haya ejercitado la correspondiente acción judicial las medidas acordadas caducarán de pleno derecho.

g) Tramitación en juicio sumario

Siempre que en la realización de las diligencias practicadas en las medidas hubiere quedado demostrado *prima facie* (a primera vista) la violación actual o potencial de los derechos, el afectado podrá pedir al Juez que dictó las medidas la tramitación del procedimiento de fondo en la vía civil sumaria dentro del plazo de los veinte días antes señalado.

II. Violaciones y sanciones penales

1. Disposiciones de carácter internacional

En la Sección 5: Procedimientos penales del Acuerdo sobre los ADPIC, el Artículo 61 señala:

"Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial".

Se entiende por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría

constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Asimismo, el inciso 2° del artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996, impone la obligación para los Miembros de establecer *"...procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones"*. De igual manera los establece el inciso 2° del artículo 23 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, (WPPT) 1996.

2. Premisas para la represión de delitos contra el derecho de autor y derechos conexos

José E. Ayú Prado Canals, Fiscal especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de la República de Panamá, señala algunas premisas para la represión de delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, a saber:

- a) El autor es la víctima directa (sujeto pasivo) y la sociedad en general es la perjudicada indirecta. Ello no excluye de ninguna manera al derechohabiente o a un titular derivado.
- b) Pueden afectarse los intereses de orden personal del autor y de la obra (como expresión de la personalidad del creador). Es decir, los derechos morales: integridad, paternidad, divulgación, retracto o arrepentimiento y acceso al último ejemplar de la obra.
- c) Siempre que expresamente no se disponga lo contrario, es ilícito todo ejercicio de un derecho patrimonial (comunicación pública, modificación, reproducción y distribución), ya sea en forma parcial o total, sin el consentimiento previo y escrito del autor o derechohabiente.
- d) El objeto del delito es la obra, interpretación o ejecución, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, que esté protegida de acuerdo a la Ley.
- e) Hay que prestar suma atención a que el uso no esté previsto como un límite o excepción al Derecho de Autor o a los Derechos Conexos, sin soslayar que los límites o excepciones deben cumplir la regla de los 3 pasos del Convenio de Berna de 1886.

- f) No hay que dejar de lado la vigencia del plazo de protección de los derechos patrimoniales y la entrada al dominio público de la obra protegida.
- g) La conducta del Sujeto Activo (Imputado, Acusado, Sumariado, Denunciado, etc.) se debe adecuar a la figura típicamente incriminada. Debe existir una vinculación criminal clara entre el sujeto activo y la conducta típica, antijurídica y culpable.
- h) Debe existir dolo por parte del sujeto activo del delito, aunque sea en la forma de dolo eventual.
- i) El ánimo de lucro no es un elemento constitutivo del delito, salvo que la Ley lo exija expresamente¹⁶.

3. Disposiciones de la ley N° 312

En el Título II, Capítulo II de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se aborda el tema de las conductas tipificadas como delitos en contra de los derechos mencionados y, por supuesto, las penas y demás sanciones con que se castigan estos ilícitos.

a) Conductas típicas

El artículo 106 enumera las conductas que se consideran tipificadas como delitos en contra de los derechos de autor y derechos conexos. El Sujeto activo es, obviamente, el violador de estos derechos; los sujetos pasivos o víctimas pueden ser el autor, el artista intérprete o ejecutante, el productor de fonograma o el organismo de radiodifusión. La violación puede producirse en los casos siguientes:

- i. Empleando sin el consentimiento escrito del titular del derecho, el título de una obra que la individualice efectivamente de otras del mismo género, cuando exista peligro de confusión entre ambas.
- ii. Realizando cualquier traducción, arreglo u otras transformaciones de la obra sin autorización escrita de su autor o del titular de los derechos.
- iii. Comunicando públicamente una obra o fonograma sin autorización por escrito del autor o del titular de los derechos por cualquier forma o procedimiento en forma original o modificada íntegra o parcialmente.

¹⁶ Prado Canals, José E. Ayú, Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, La experiencia en la República de Panamá, *Décimo Curso Académico Regional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos* para países de América Latina, Lima, Perú, Octubre de 2003.

- iv. Distribuyendo ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, arrendamiento, importación o cualquier otra modalidad de distribución sin la autorización del titular del derecho.
- v. Retransmitiendo o distribuyendo por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, una emisión de radiodifusión o televisión, sin autorización del titular de la emisión.
- vi. Cuando el cesionario o licenciatario autorizado por el titular del respectivo derecho, reproduzca o distribuya un mayor número de ejemplares que el permitido por el contrato, comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido.
- vii. Cuando una persona se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado algunos de los derechos de autor o conexos y con esa indebida atribución obtenga que la autoridad judicial o administrativa competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción; y
- viii. Cuando la persona autorizada para usar o explotar una o más obras, presente declaraciones falsas en cuanto a: certificación de ingreso, repertorio utilizado, identificación de los autores, autorización obtenida, número de ejemplares o de cualquier otra alteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos de autor o conexos.

b) Pena

La pena para los infractores de este tipo de ilícitos será de uno a dos años de prisión.

c) Conductas típicas de mayor gravedad

Por su parte, el artículo 107 establece sanciones más graves, que van de dos a tres años de prisión, para quienes:

- i. Sin autorización por escrito del titular del derecho, reproduzca u obtenga copias de obras o fonogramas por cualquier medio o procedimiento en forma original o modificada, íntegra o parcialmente.
- ii. Importe, almacene, distribuya, exporte, venda, ofrezca a la venta, tenga en su poder, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de obras o fonogramas.

- iii. Deposite en el Registro de Derecho de Autor una obra, interpretación o producción ajena como si fuera propia o de personas distintas del verdadero autor o titular del derecho; y
- iv. Sin autorización por escrito del titular, total o parcialmente, reproduzca, fije o copie por cualquier medio una obra, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión o televisión o importe almacene, tenga en depósito, distribuya, exporte venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.
- v. Infrinja dolosamente el Derecho de Autor o Derechos Conexos con el fin de obtener una ventaja para sí y/o a favor de tercero, o ganancia económica privada, así como quien infrinja dolosamente aunque no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a uno de poco valor.

d) Casos de aumento de la sanción

La ley prevé que cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, interpretación, producción, no destinadas a la divulgación, o con atribución falsa de su paternidad, con deformación, mutilación u otras modificaciones que pongan en peligro el decoro o la reputación o una de las personas protegidas por la Ley, las sanciones señaladas para los casos anteriores se podrán aumentar en una tercera parte.

e) Multas

Además de las sanciones referidas, el Juez deberá imponer al culpable de los delitos descritos, una multa que puede ir de tres mil a veinticinco mil córdobas teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. En el caso que el responsable sea comerciante se ordenará la suspensión de las actividades comerciales mientras dure la sanción, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles.

Los adicionados artículos 108 bis 1 y 108 bis 2 facultan a los jueces penales a ordenar el decomiso de:

- i.- Las mercancías objeto de la presunta infracción.
- ii.- Cualquier material o implementos utilizados para la comisión del delito.

- iii.- Los activos relacionados con la actividad infractora.
- iv.- Toda evidencia relativa al delito, incluyendo la documental.

Asimismo, en cualquier acción penal bajo la Ley No. 312, los jueces podrán ordenar el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora; El decomiso y destrucción de toda mercancía objeto de la infracción, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso al comercio; y el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía objeto de la infracción.

f) Prohibición para imprentas y similares

La Ley N° 312 impone a las imprentas y otros tipo de empresa que realice trabajos similares la prohibición de no poder realizar trabajos de impresión, reproducción de etiquetas portadas y material necesario para difusión de obras y fonogramas si no es con la autorización del titular del derecho.

g) Forma de calcular la indemnización

Para determinar el monto de la indemnización pecuniaria que el culpable de estos delitos deberá pagar al ofendido, se partirá de un mínimo equivalente al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren sido incautadas. Sin embargo, el monto a indemnizar nunca podrá ser menor que el valor de 100 ejemplares.

h) Delito de evasión de medidas tecnológicas.

El artículo 111 bis creó un nuevo tipo penal al señalar que incurrirán en delito de evasión de medidas tecnológicas y será sancionado con prisión de dos a tres años y multa no superior a veinticinco mil córdobas (C\$25,000.00), la persona que:

“1.- Evada sin autorización del titular del derecho, cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido u otra material objeto de protección;

2.- Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporciones o de otra manera trafique dispositivos, productos o componentes; u ofrezca al público o proporcione servicios al público, los cuales:

2.1) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva.

2.2)Únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva.

2.3)Son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva

La parte perjudicada tendrá derecho a las acciones penales establecidas en el título IV de la presente ley. Sin embargo, los ilícitos referidos en este artículo constituyen un delito separado e independiente del que pudiera ocurrir por violación al derecho de autor y derechos conexos, contenidos en la presente Ley.

Lo dispuesto en el numeral dos del presente artículo no aplicará a una actividad si la misma está relacionada con las medidas tecnológicas efectiva que controlen el acceso a las obras, interpretaciones, ejecuciones, o fonogramas protegidos; y que la actividad esté comprendida en una o más de las siguientes categorías:

a) Actividades no infractoras de ingeniería inversa, respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;

b) Actividades de buena fe, no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o fonograma y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;

c) La inclusión de un componente o parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiados en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas que implementen el numeral dos del presente artículo.

d) Las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.

Las actividades descritas en el numeral dos no serán considerados ilícitos si: i) está relacionada con una medida tecnológica efectiva que proteja cualquiera de los derechos de autor o conexos exclusivos en un obra, interpretación o ejecución o fonograma; y ii) la acción está comprendida en la siguiente categoría: actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.

Lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo no aplicará a las actividades comprendidas en las categorías arriba descritas; o una o más de las siguientes categorías:

Primero: Acceso por parte de una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisición.

Segundo: Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgadas que reflejen las actividades en líneas de una persona natural de manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de cualquier persona de tener acceso a cualquier obra.

Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo no aplicarán en las actividades relacionadas con un más de las siguientes actividades: actividades legalmente autorizadas realizadas

por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

A los fines del presente artículo medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología , dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución , fonograma u otra materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.

Las disposiciones penales en este artículo no aplicaran a las actividades propias de las bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comercial sin fines de lucro.”

i) Delito de violación de la protección de la información sobre gestión de derechos.

El adicionado artículo 111 bis introduce la figura del delito de violación de la información sobre gestión de derecho, el cual será sancionado con prisión de dos a tres años y multa no superior a veinticinco mil córdobas (C\$25,000.00) para toda persona que:

- 1.-A sabiendas suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos.
- 2.-Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión ha sido suprimida o alterada sin autoridad.
- 3.-distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras, interpretaciones, o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derecho ha sido suprimida o alterada sin autoridad.

La parte perjudicada tendrá derecho a las acciones penales establecidas en el título IV de la presente Ley. Sin embargo, los ilícitos referidos en este artículo constituyen un delito separado e independiente del que pudiera ocurrir por violación al derecho de autor o derecho conexo, contenidos en la presente Ley. Así mismo, quedarán exceptuadas de la aplicación de este artículo las actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

Para fines del presente artículo Información sobre la Gestión de Derechos significa.

1) Información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma al autor de la obra, al artista, intérprete o ejecutante de la interpretación o al productor del fonograma o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación, o ejecución o fonograma.

2) Información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación, o ejecución o fonograma.

3) Cualquier número o código que represente dicha información.

Cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto aun ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

Las disposiciones penales en este artículo no aplicarán a las actividades propias de las bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comercial sin fines de lucro”.

j) Persecución de oficio de los delitos y Prescripción de la acción penal.

En base al reformado artículo 112 de la Ley, los delitos previstos en la misma son perseguibles de oficio por el ministerio Público, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años contados desde que se cometió por última vez el delito.

CAPITULO VII

EL DERECHO DE AUTOR Y LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

I. Introducción

Los avances tecnológicos y su consolidación en áreas tales como las telecomunicaciones, la información y los medios de comunicación han representado un enorme y constante reto no solo para la legislación en materia de derecho de autor sino que también para la comunidad e industria cultural vinculadas a ésta.

La esfera del derecho de autor y los derechos conexos se ha expandido enormemente dados los espectaculares progresos tecnológicos de los últimos decenios, que a su vez han acarreado nuevas maneras de divulgar las creaciones mediante formas de comunicación mundial tales como la radiodifusión por satélite, los discos compactos y el DVD. La divulgación de obras por Internet es el avance más reciente en ese sentido, y plantea nuevas cuestiones en relación con el derecho de autor y los derechos conexos¹⁷.

En sus inicios, el disco compacto o CD constituyó un gran repunte para la industria musical dado que ofrecía mejor calidad de sonido, mayor durabilidad y comodidad por su pequeño tamaño. Lo mismo ocurrió años después con las producciones audiovisuales, ya que el paso del videocasete al DVD favoreció a los consumidores por las mismas razones. Sin embargo, poco tiempo después la industria musical y audiovisual enfrentaron un gran problema: el contenido de un CD o DVD resultó ser fácil de copiar o “bajar” en Internet, lo que permitió la piratería en descomunales proporciones. No podemos olvidar el caso de la tecnología MP3, la cual ha permitido que de manera sencilla se compriman los archivos musicales. En la actualidad estos archivos ocupan muy poco espacio y tanto su carga como descarga en Internet y su almacenamiento en aparatos móviles resulta sumamente sencillo.

Con todas estas nuevas tecnologías de copiado de obras musicales y audiovisuales sin el consentimiento de sus titulares, las infracciones al derecho de autor de éstos se han elevado a niveles inimaginables, provocando daños a los derechos morales y patrimoniales de los autores y multimillonarias pérdidas a la industria cultural.

El 12 de febrero de 2001, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos pronunció una resolución que sentaría jurisprudencia; se trataba del caso *A&M Records, Inc, et al. Vs.*

¹⁷ ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación de la OMPI No. 450(s), Pág. 20.

Napster, Inc., en el que se señaló que la defensa ejercida por Napster, basada en el “uso justo” ¹⁸, carecía de base jurídica. Napster era un sitio Web y programa extremadamente popular de distribución de archivos musicales (hasta 10,000 ficheros descargados por segundo) en el que utilizaban obras musicales protegidas por derecho de autor sin la autorización del titular de los derechos. Se trataba de un negocio basado en transacciones ilegales que, a pesar de ello, ha contribuido al desarrollo de nuevos modelos empresariales de la industria de la grabación¹⁹.

Para tener una idea clara de la magnitud del desafío que representa la Internet para el derecho de autor y conexos, se presentan a continuación dos cuadros estadísticos del número de usuarios en el mundo, y particularmente en Centroamérica y México, y su proporción respecto a la cantidad de habitantes.

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE USUARIOS DE INTERNET Y POBLACIÓN (Nov. 2005)						
Regiones	Población Aprox. (2005)	% Población Mundial	Usuarios de Internet	Crecimiento de Usuarios 2000-2005	Acceso (% Población)	Usuarios a nivel Mundial %
Africa	896,721,874	14.0 %	23,917,500	429.8 %	2.7 %	2.5 %
Asia	3,622,994,130	56.4 %	332,590,713	191.0 %	9.2 %	34.2 %
Europa	804,574,696	12.5 %	285,408,118	171.6 %	35.5 %	29.3 %
Medio Oriente	187,258,006	2.9 %	16,163,500	392.1 %	8.6 %	1.7 %
América del Norte	328,387,059	5.1 %	224,103,811	107.3 %	68.2 %	23.0 %
América Latina y el Caribe	546,723,509	8.5 %	72,953,597	303.8 %	13.3 %	7.5 %
Oceania / Australia	33,443,448	0.5 %	17,690,762	132.2 %	52.9 %	1.8 %
TOTAL MUNDIAL	6,420,102,722	100.0 %	817,447,147	169.5 %	15.2 %	100.0 %

Fuente: Sitio Web Internet World Stats. Usage and Population Statistics.

¹⁸ La doctrina del “uso justo o legítimo” o “fair use” deviene del copyright anglosajón y autoriza a los usuarios a utilizar obras con *copyright* siempre que no ocasionen perjuicio a la explotación económica de las mismas por parte de los autores. Entran dentro del “uso legítimo”, por ejemplo, las copias realizadas para uso privado y no comercial. La doctrina del “uso legítimo” toma en consideración cuatro factores: la finalidad y la naturaleza del uso (comercial o no lucrativo), la naturaleza de la obra, la calidad y sustancia de la parte utilizada en relación al conjunto de la obra y el efecto de su uso en el mercado potencial.

¹⁹ ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación de la OMPI No. 450(s), Pág. 26.

ESTADÍSTICAS DE USUARIOS DE INTERNET Y POBLACIÓN EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO (Nov. 2005)					
CENTROAMÉRICA	Población Aprox. (2005)	Usuarios de Internet	Crecimiento de Usuarios 2000-2005	Acceso (% Población)	(%) Usuarios C. A.
Belice	291,904	35,000	133.3 %	12.0 %	0.2 %
Costa Rica	4,301,172	1,000,000	300.0 %	23.2 %	5.0 %
El Salvador	6,467,548	587,500	1,368.8 %	9.1 %	2.9 %
Guatemala	12,328,453	756,000	1,063.1 %	6.1 %	3.8 %
Honduras	6,569,026	223,000	457.5 %	3.4 %	1.1 %
México	103,872,328	16,995,400	526.6 %	16.4 %	84.9 %
Nicaragua	5,766,497	125,000	150.0 %	2.2 %	0.6 %
Panamá	3,074,146	300,000	566.7 %	9.8 %	1.5 %
TOTAL	142,671,074	20,021,900	522.3 %	14.0 %	100.0 %

Fuente: Sitio Web Internet World Stats. Usage and Population Statistics.

II. Derecho de autor y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

La tradición jurídica ha insistido en la necesidad de otorgarle prerrogativas al autor que redunden en una compensación económica por el uso de sus creaciones por parte de terceros, con el fin de propiciar que el autor pueda seguir aportando su talento en beneficio de la cultura. Esto, sin embargo, ha supuesto un enfrentamiento con el usuario que persiste en la idea de recibir la cultura que produce la sociedad de forma gratuita (sobretudo con el auge de los medios de comunicación y la informática), incluyendo con ello los objetos de arte y por ende los que legalmente se encuentran al amparo de los derechos de autor. Ante esta situación, la legislación ha tratado infructuosamente de imponer equilibrios tales como el uso de copia privada, la excepción a favor de bibliotecas y otras limitaciones que han resultado aún insuficientes para el usuario y sobre todo para el autor, ante las facilidades que otorgan las TIC en torno al uso de copias de la obra²⁰.

La histórica disputa entre los titulares del derecho de autor, por un lado, y los usuarios de las obras protegidas por otro, se resolvió de forma justa y balanceada con la autorización de la copia privada y otras excepciones y limitaciones que al derecho de autor le impusieron la Convención de Berna y que luego recogieron en sus legislaciones nacionales gran parte de los Estados Miembros. Asimismo, sucedió en el sistema del copyright anglosajón desde la entrada en vigencia de la doctrina del "*uso justo o legítimo*" o "*fair use*".

²⁰ Castro Bonilla, Alejandra, El Derecho de Autor ante las TIC en la Economía del Conocimiento.

No obstante, desde la entrada a escena de la Internet y el desarrollo tecnológico que crea el entorno digital, surge una nueva controversia que tiene como protagonistas a los titulares del derecho de autor y a los prestadores de servicios en la red. Esta nueva disputa no es de fácil solución ya que el entorno digital no es posible invocar la doctrina del "*uso justo o legítimo*" ni muchas de las excepciones y limitaciones que fuera del ámbito digital se aplican al derecho de autor. Por un lado, los primeros acusan a los segundos de lesionar el derecho de autor, dado que por medio de los servicios que éstos prestan se reproducen sus obras sin autorización. En la otra acera, los prestadores de servicios en la red se defienden argumentando su única función es ser un mero portador de datos y por lo tanto no le es posible fiscalizar el material entrante o saliente.

Ante el conflicto de intereses surgido entre los titulares de derecho de autor y los usuarios de las nuevas tecnologías en el entorno digital y el repunte que tuvo el fenómeno de la piratería desde mediados de los años 80, algunos países de la Comunidad Europea iniciaron un planteamiento serio del problema, buscando mejores enfoques y estrategias para poder enfrentarlo.

En 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas redactó el llamado "*Libro Verde sobre derechos de autor y el reto de la tecnología*" en el cual se hacían ciertas reflexiones sobre cómo en esos países un elevado porcentaje del PIB venía representado por ingresos generados por los derechos de autor. Entre los factores que incidían en la progresiva importancia de los derechos de autor se señalaron: el aumento del tiempo de ocio dedicado a la denominada industria de la cultura; el incremento del nivel de vida; la expansión de las industrias del entretenimiento; el desarrollo de la información, el papel emergente del derecho de autor dentro de las economías nacionales; los gastos por persona en artículos protegidos por la propiedad intelectual, los ingresos cada vez mayores de los autores; el acceso generalizado al mercado de las obras, etc. En definitiva, y así se deduce de la combinación de todos los indicadores, es la importancia de lo que se viene denominando en términos generales como negocio de la cultura.

Ocho años después de la publicación del "*Libro Verde*", el 20 de noviembre de 1996, salió a la luz otro documento de la Comunidad Europea llamado "*Seguimiento del libro verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*". En el mismo se alerta sobre la necesidad y urgencia de adaptar el derecho

de autor y armonizarlo en todos los países de la región debido al impulso de las nuevas tecnologías que colocaban en una peligrosa indefensión al derecho de autor.

Debido a las razones anteriormente apuntadas y, principalmente a la relevancia económica que los bienes objeto de la propiedad intelectual han adquirido producto de la facilidad con que éstos son objeto de tráfico a través de la Internet, lo cual ayuda también a facilitar su duplicación en serie, los Estados se han visto en la necesidad apremiante de introducir nuevas disposiciones legales que coloquen al derecho de autor y conexos a la par de los últimos avances de la tecnología de la información y la comunicación.

III. Los tratados internet

Como ya hemos mencionado anteriormente, ante la urgente necesidad de adaptar el derecho de autor y derechos conexos a la era y entorno digital, algunos Estados Miembros de la OMPI suscribieron en 1996 dos importantes tratados: El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, conocido como WCT (siglas en inglés) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, conocido como WPPT. Ambos están vigentes desde el año 2002.

1. Reseña del WCT

Este tratado incluye dos objetos de protección por derecho de autor, a saber:

- a) Los programas de ordenador, independientemente de su modo o forma de expresión.
- b) Las compilaciones de datos u otros materiales (bases de datos), en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual (en caso contrario el WCT no lo protege).

En relación a los derechos de los autores, el WCT incluye tres:

- a) El derecho de distribución

Es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y los ejemplares de una obra mediante venta u otra transacción de propiedad.

b) El derecho de alquiler

Es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y las copias de tres tipos de obras:

- i. Los programas de ordenador (excepto cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler).
- ii. Las obras cinematográficas (pero únicamente cuando el alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción) y,
- iii. Las obras incorporadas en fonogramas, tal como lo establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes (excepto para los países que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa respecto de ese alquiler).

c) El derecho de comunicación al público

Es el derecho a autorizar cualquier comunicación al público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida "la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esta obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija", lo cual incluye, especialmente, la comunicación interactiva y previa solicitud por Internet.

El WCT obliga a los Contratantes a prever recursos jurídicos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas (por ejemplo, la codificación) utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y contra la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos que identifican las obras o sus autores, indispensables para la gestión de sus derechos (concesión de licencias, recaudación y distribución de regalías). Asimismo, el WCT obliga a las Partes Contratantes a implementar medidas de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos que garanticen la aplicación del mismo, estableciendo procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier violación de los derechos establecidos en el Tratado.

2. Reseña del WPPT

El WPPT regula los derechos de propiedad intelectual de dos tipos de titulares:

- a) Los artistas intérpretes o ejecutantes y,
- b) Los productores de fonogramas

a) Respecto a los primeros, el WPPT les concede cuatro tipos de derechos patrimoniales respecto de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas y tres respecto de las no fijadas en ese tipo de soporte (en directo).

Para las fijadas son:

- i) Derecho de reproducción o derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta del fonograma por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.
- ii) Derecho de distribución o derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y los ejemplares del fonograma mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- iii) Derecho de alquiler o derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares del fonograma, tal y como lo establezca la legislación de las Partes Contratantes (excepto para los países que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa respecto de ese alquiler).
- iv) Derecho de puesta a disposición o derecho a autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, abarcando la puesta a disposición interactiva y previa solicitud por Internet.

Para las no fijadas (en directo) son:

- i) Derecho de radiodifusión (excepto cuando se trate de una retransmisión).
- ii) Derecho de comunicación al público (excepto cuanto la interpretación o ejecución sea radiodifundida) y,
- iii) Derecho de Fijación.

En relación a los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes, el WPPT les confiere los siguientes:

- i) Derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante y,
- ii) Derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación que cause perjuicio a su reputación.

b) Respecto a los productores de fonogramas, el WPPT les otorga cuatro tipos de derechos patrimoniales respecto de sus fonogramas:

- i) Derecho de reproducción o derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta del fonograma por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.
- ii) Derecho de distribución o derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares del fonograma mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- iii) Derecho de alquiler o derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y de las copias del fonograma, tal como se establezca en la legislación nacional de las Partes Contratantes (excepto para los países que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa respecto de ese alquiler).
- iv) Derecho de puesta a disposición o derecho a autorizar la puesta a disposición del público del fonograma, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, abarcando la puesta a disposición interactiva y previa solicitud por Internet.

De la misma manera que el WCT, el WPPT obliga a los Contratantes a prever recursos jurídicos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas (por ejemplo, la codificación) utilizadas por los artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos y contra la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos que identifican al artista intérprete o ejecutante, la interpretación o ejecución, el productor del fonograma y el fonograma, indispensables para la gestión de sus derechos (concesión de licencias, recaudación y distribución de regalías). También obliga a las Partes Contratantes a implementar

medidas de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos que garanticen la aplicación del mismo, estableciendo procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier violación de los derechos establecidos en el Tratado.

CAPITULO VIII

GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

CAPITULO VIII

GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

I. Origen de la gestión colectiva

El Doctor Mihály Ficsor, abogado y Director General de ARTISJUS, sociedad húngara de gestión colectiva, en su obra titulada "*La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos*" explica el origen de este tipo de organizaciones.

Las primeras sociedades de autores se fundaron en Francia. Al principio, las funciones de las asociaciones profesionales – luchar, entre otras cosas, por el pleno reconocimiento y el respeto de los derechos de los autores – se combinaron con elementos, entonces en surgimiento, de la gestión colectiva de derechos.

La fundación de la primera sociedad de este tipo estuvo íntimamente relacionada con el nombre de Beaumarchais. Ésta libró las batallas jurídicas contra los teatros que se resistían a reconocer y respetar los derechos patrimoniales y morales de los autores. Esas batallas victoriosas dieron origen, por iniciativa de Beaumarchais, a la fundación, en 1777, del Bureau de législation dramatique, transformado más tarde en la *Société des auteurs et compositeurs dramatiques* (SACD), la primera asociación que se ocupó de la gestión colectiva de los derechos de los autores (y que sigue trabajando exitosamente, para satisfacción de todos sus miembros y de la comunidad cultural).

Honoré de Balzac, Alejandro Dumas, Víctor Hugo y otros escritores franceses tomaron el relevo más de medio siglo después, en la esfera literaria, al fundar la *Société des gens de lettres* (SGDL), cuya asamblea general se reunió por primera vez a fines de 1837 (otra sociedad que sigue existiendo y floreciendo).

Estas sociedades no eran, sin embargo, organizaciones de gestión colectiva en el sentido que tiene actualmente el concepto de dichas organizaciones. Los hechos que condujeron a una gestión colectiva plenamente desarrollada comenzaron en 1847, cuando dos compositores, Paul Henrion y Víctor Parizot, y un escritor, Ernest Bourget, apoyados por su editor, presentaron una demanda contra el "*Ambassadeurs*", un "*café-concert*" de la Avenida de los Campos Elíseos de París. Consideraban – cosa fácil de comprender – que existía una contradicción flagrante en que ellos tuvieran que pagar por los asientos y la comida en el "*Ambassadeurs*", mientras que nadie manifestaba intención alguna de pagarles por sus obras, que

interpretaba la orquesta. Tomaron la valiente – y lógica – decisión de no pagar hasta que también a ellos se les pagase. Los autores ganaron el pleito; el propietario del “*Ambassadeurs*” fue obligado a pagar una importante suma como remuneración. Con aquella decisión judicial se abrían grandes y nuevas posibilidades para los compositores y letristas de obras musicales no dramáticas. No obstante, era evidente que no les sería posible controlar y asegurarse individualmente de que se respetaban los nuevos derechos que se les reconocían. La comprensión de este hecho dio origen en 1850 a la fundación de una agencia colectiva, poco después sustituida por la *Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique* (SACEM) que funciona – con gran éxito – hasta hoy día.

Hacia fines del siglo XIX y durante los primeros decenios del siglo XX se crearon, en casi todos los países europeos y también en algunos otros, organizaciones de autores similares (llamadas en inglés *performing rights societies* – sociedades de derechos de interpretación o ejecución). Pronto surgió la cooperación entre estos organismos por medio de contratos bilaterales de representación mutua de los repertorios de cada uno, y se manifestó la necesidad de un órgano internacional que coordinase sus actividades y contribuyera a una protección más eficaz de los derechos de los autores en todo el mundo. En junio de 1926, los delegados de 18 sociedades fundaron la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Las afiliaciones a la CISAC han crecido en forma constante e incluyen en la actualidad, además de las sociedades de derechos de interpretación y ejecución (que siguen siendo el núcleo de la confederación), sociedades que se ocupan de la gestión de otros derechos sobre distintas categorías de obras”.

En Nicaragua, recién en el año 2003 se constituyó la primera Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que lleva el nombre de NICAUTOR, la cual como lo establece la ley, fue autorizada para funcionar por la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos (ONDADX) el día 4 de marzo de 2005. NICAUTOR fue fundada por algunos de los autores musicales más representativos de nuestro país, entre los que se destacan: Camilo Zapata, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Otto de la Rocha, entre otros.

II. Concepto y finalidad

Podemos definir a la gestión colectiva como el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos a través de organizaciones que actúan en nombre y representación de los autores o sus titulares a fin de defender sus intereses patrimoniales y morales.

Como es sabido, la ley le concede al creador de una obra el derecho a autorizar o prohibir el uso de ésta. Lo mismo es aplicable para los beneficiarios de los derechos conexos. Como ejemplo, podemos mencionar el caso del autor de un libro que suscribe un contrato con un editor para su publicación o bien podría tratarse del compositor musical que autoriza a una compañía disquera a grabar sus canciones. En ambas situaciones los autores ejercen su derecho de forma individual y directa, conservando el control de la explotación de sus obras por terceros y del respeto a sus derechos morales y patrimoniales.

Sin embargo, en determinados tipos de utilización de la obras resulta imposible que el autor haga valer sus derechos de forma individual, sobre todo en el mundo moderno que con las nuevas tecnologías ha venido ampliando cada vez más el ámbito en que el ejercicio individual del derecho del autor resulta imposible y poco práctico. Y es que hoy en día, con la inmensa cantidad de usuarios que en todo el planeta y en diferentes momentos utilizan una misma obra, se vuelve una empresa irrealizable el ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos de forma individual.

Los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras. Por ejemplo, imaginémonos a los actualmente populares Juanes, Alejandro Sanz o Diego Torres queriendo controlar el uso de sus canciones en todas las emisoras de radio de sus respectivos países, del resto de América Latina y el mundo entero. Para ellos es materialmente imposible, actuando de forma individual ponerse en contacto con todas y cada una de la emisoras para negociar las autorizaciones necesarias para la utilización de sus obras y la remuneración que le corresponde. De igual manera, para las emisoras radiales es poco factible pedir permisos específicos de cada autor en el momento de programar y sacar al aire una

canción. Para muestra un botón: Según estadísticas del gremio, al año una cadena televisiva transmite un promedio de 60,000 obras musicales.

Ante la imposibilidad material de gestionar los derechos de autor y derechos conexos de forma individual, tanto para el titular como para el usuario, se hace imprescindible contar con organizaciones de gestión colectiva cuya principal función es la de resolver los problemas que surgen entre titulares y usuarios de derechos.

En el marco de un sistema de gestión colectiva, los titulares de derechos autorizan a las organizaciones de gestión colectiva a controlar el uso de sus obras, negociar con los posibles usuarios (emisoras de radio o televisión, discotecas, bares, cines, restaurantes, hoteles, etc), concederles licencias a cambio de una remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas y, dadas las condiciones adecuadas, recaudar dicha remuneración y distribuirla entre los titulares de derechos²¹.

Las principales finalidades de las sociedades de gestión colectiva son:

1. Recaudo de los derechos de autor de sus miembros.
2. Asistencia social del miembro.
3. Desarrollo y promoción cultural.
4. Servir de árbitro o mediador de conflictos.

III. Clases de sociedades de gestión colectiva

Las sociedades de autores y compositores dedicadas a la administración de los derechos de ejecución pública de las obras musicales son las que históricamente han tenido mayor relevancia. No obstante, desde hace algún tiempo se han venido desarrollando sociedades dedicadas a otras facetas de la administración del derecho de autor.

En el ámbito de las obras impresas (libros, diarios, informes, revistas, etc.) existen las sociedades recaudadoras de derechos reprográficos. Estas sociedades centran su actividad en la concesión

²¹ Mihály Ficsor, La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, OMPI, 2002.

de derecho de reproducción reprográfica, o sea, la autorización para que dichas obras puedan ser fotocopiadas por entidades tales como universidades, escuelas, bibliotecas, organismo públicos.

Existen también sociedades dedicadas al recaudo de las remuneraciones compensatorias por copia privada, sociedades que administran los derechos conexos, los derechos de editores de libros, etc.

IV. De los miembros de las sociedades de gestión y los derechos gestionados

Pueden pertenecer en calidad de socios de una sociedad de gestión todos los titulares de derecho de autor y derechos conexos, sean estos autores, compositores, editores, escritores, músicos, artistas intérpretes o ejecutantes y fotógrafos. Tratándose de los organismos de radiodifusión, se les ubica como usuarios pero también son titulares de algunos derechos sobre sus obras radiodifundidas.

Una vez que entran a la sociedad, los miembros deben facilitar a ésta la información personal y de su repertorio de obras creadas que pasa a formar parte de la base de datos de aquella y permitirá determinar el uso de que son objeto y su consecuente retribución.

Normalmente, las sociedades de gestión se encargan de la administración de los siguientes derechos:

1. El derecho de representación y ejecución pública (la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes y otros lugares públicos).
2. El derecho de radiodifusión (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas por radio y televisión).
3. Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación).
4. Los derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas (obras de teatro).
5. El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado).
6. Los derechos conexos²².

²² Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Publicación OMPI N° L450CM/S.

V. Otras funciones de las sociedades de gestión colectiva

Además de las funciones de recaudar, administrar y repartir los derechos de autor y derechos conexos de sus socios y de servir de intermediario entre los titulares de los derechos y los usuarios, las sociedades de gestión se ocupan de otro tipo de actividades. Algunas de ellas incluyen en sus objetivos y funciones la asistencia social para sus miembros, traducida en prestaciones en el pago y la atención por seguro médico, pensiones vitalicias para los jubilados u otro tipo de prestación, cuyos montos se calculan tomando en cuenta las regalías recaudadas con anterioridad a nombre del autor.

Asimismo, ciertas sociedades establecen como parte de sus funciones la de promover actividades culturales tales como festivales de teatros, conciertos, concursos musicales, grabaciones de obras musicales, etc., que posibiliten la promoción de las obras administradas tanto dentro como fuera del país.

Cabe destacar, que las funciones secundarias antes señaladas no son de carácter obligatorio para las sociedades de gestión colectiva y para la ejecución de las mismas se suele destinar un porcentaje de lo recaudado en concepto de regalías que por recomendaciones de la CISAC no debe sobrepasar el 10 por ciento de las recaudaciones netas.

VI. Las sociedades de gestión colectiva en la Ley N° 312

1. Definición

El Art. 113 de la Ley 312 define a las Sociedades de Gestión como las organizaciones de base asociativa sin fines de lucro, legalmente constituidas al tenor de la Ley 147 "*Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro*", que se dedican en nombre propio o ajeno, a la gestión de Derecho de Autor o Derechos Conexos de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios de sus titulares o concesionarios en exclusiva. Dichas sociedades gozarán de los derechos y deberán cumplir las obligaciones señaladas por la Ley, se inscribirán en el Libro de Control que lleva la Oficina Nacional

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, quedando sometidas al control y vigilancia de la citada oficina.

Es importante destacar lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento de la Ley N° 312, que dispone que los autores y los titulares de derechos conexos y sus causahabientes podrán formar parte en una o varias sociedades de gestión, de acuerdo con la diversidad de la titularidad de los derechos patrimoniales que ostentan. Las sociedades no podrán restringir la libre contratación de sus socios.

2. Contrato de adhesión

El contrato de adhesión es el instrumento mediante el cual el autor se convierte en socio y miembro de la sociedad. Éste podrá adoptar diversas modalidades tales como el de mandato, de cesión o de concesión en exclusiva, según lo permita la naturaleza de los derechos que constituyan su objeto y las disposiciones de la Ley 312. Se deja claro en la letra de la Ley que el contrato de adhesión no podrá imponer en ninguna circunstancia como obligatoria la administración de más derechos ni modalidades de explotación que los estrictamente necesarios para la gestión desarrollada por la sociedad. Respecto a su duración, se establece un plazo de dos años, renovables de forma indefinida.

3. Requisitos de registro

La sociedad será registrada si cumple con los siguientes requisitos:

- a) Si ha sido constituida conforme a la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
- b) Si sus estatutos cumplen las disposiciones legales.
- c) Si de los datos aportados y de la información practicada se desprende que la organización solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar una gestión sana, económica y eficaz.

Para la concesión del registro se deberá tener en cuenta también los siguientes aspectos:

- a) La amplitud del repertorio de la solicitante, que se apreciará atendiendo al número de titulares de derechos que se hayan comprometido, directa o indirectamente, a confiarle la

gestión de los mismos, en caso de que sea autorizada, y poniendo en relación esos titulares con los de las obras o prestaciones, según proceda efectivamente explotadas por los usuarios nacionales del correspondiente sector durante el último año.

- b) El volumen de usuarios potenciales de ese repertorio.
- c) La idoneidad de los medios personales, técnicos, financieros y materiales para el cumplimiento de sus fines y la posible efectividad de su gestión en el extranjero.
- d) Si existiere otra sociedad autorizada para la gestión de los mismos derechos de autor o conexos que pretenda gestionar la solicitante, su nivel retroactivo, si hubiere efectos concurrenciales que distorsionen o limiten la protección de los derechos concernidos, o pongan en trance de disminuir injustificadamente su nivel retributivo, cuando estos derechos sean de autorizar o prohibir, deberá denegarse la autorización, salvo si en la petición se dieran circunstancias excepcionales que hicieren necesario otorgarla en consideración a dicha protección y a la vista del informe que, en todo caso, se recabará por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos de las sociedades ya autorizadas.

4. Contenido de los estatutos

Como toda asociación sin fines de lucro, las sociedades de gestión deberán cumplir con las exigencias de la Ley 147 "*Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro*" en lo concerniente a sus estatutos. La Ley 312 añade a lo anterior, los siguientes requisitos:

- a) La denominación no podrá ser idéntica a la de otras sociedades de gestión ni semejante que pueda inducir a confusión.
- b) En su objeto o fines, se especificarán los derechos administrados, no pudiendo incluir actividades distintas de la protección de los derechos de autor o conexos²³.

²³ Con relación al objeto y fines de la sociedad de gestión, es necesario tener en cuenta la exigencia del Art. 30 del reglamento el cual señala que para efectos de registro, deberá precisarse con claridad su objeto o fines, de acuerdo a lo siguiente: a) por rama o categoría de creación de obras; b) por categoría de titulares de derechos conexos; c) por modalidad de explotación, cuando concurren en su titularidad varias categorías de creación de obras o de titulares de derechos conexos, y siempre que la naturaleza de los derechos encomendados a su gestión así lo justifique.

- c) Mencionarán las clases de titulares y concesionarios exclusivos de derechos comprendidos en la gestión y las distintas categorías de aquellos a efectos de su participación en el gobierno y administración de la sociedad.
- d) Expresarán las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de socio y las reglas generales a las que se ajustará el contrato de adhesión a la sociedad, que obligatoriamente habrán de suscribir los que le confíen la gestión de sus derechos, tengan o no dicha calidad. Sólo podrán ser socios los titulares o concesionarios exclusivos de los derechos administrados. Las reglas del contrato de adhesión no serán aplicables a los contratos de representación que puedan celebrar las sociedades de gestión con otras organizaciones extranjeras análogas.
- e) Harán constar los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como sus derechos y, en particular, el de votación, cuya regulación tendrá en cuenta criterios que limiten razonablemente el voto plural, si éste se hubiera establecido. En materia de sanciones de exclusión el régimen de voto será siempre igualitario.
- f) Los órganos, rectores de la Sociedad como mínimo serán la Asamblea General, la Junta Directiva y el de Vigilancia.
- g) Determinarán el destino del patrimonio o activo neto resultante de la liquidación de la sociedad en caso de disolución, cuyo patrimonio no podrá ser objeto de reparto entre los socios.

5. Plazo del registro

Según el reglamento, una vez presentada la solicitud, el Registro dispone de un plazo de 45 días para analizar la documentación presentada por el solicitante y verificar que sea conforme a las disposiciones de la Ley y del reglamento.

En caso de omisión de algún requisito subsanable, el Registro prevendrá por escrito al solicitante para que en el plazo de 30 días subsane las omisiones.

6. Publicación en la Gaceta, Diario Oficial

Una vez concedido el registro de la sociedad de gestión colectiva por parte de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se mandará a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, según las exigencias del Art. 117.

Anualmente, el Registro publicará en La Gaceta, Diario Oficial, una relación de las sociedades de gestión autorizadas.

7. Efectos del registro

Desde el momento en que la sociedad de gestión es autorizada por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, está facultada para ejercitar los derechos objeto de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. La legitimación procesal activa se comprueba con la sola presentación de los estatutos de la sociedad. La Ley 312 establece la presunción que tales derechos les han sido confiados por sus respectivos titulares o concesionarios en exclusiva, salvo prueba en contrario (Art. 118).

La reciente reforma a la Ley N° 312 adicionó al mencionado artículo 118 dos párrafos muy significativos y trascendentales para la operatividad de las Sociedades de Gestión, los que señalan que "Los documentos que emite la Sociedad de Gestión para efectos de cobro por la utilización de obras artísticas y/o musicales, literarias, científicas; efectuado a personas naturales o jurídicas constituye título ejecutivo y se sustentarán por la vía ejecutiva. Caben únicamente las excepciones de pago y la no utilización de obras protegidas. La Sociedad de Gestión está facultada para solicitar a la autoridad judicial competente, la suspensión de comunicación pública o presentaciones de obras artísticas y/o musicales protegidas conforme esta Ley, mientras esté pendiente el pago de aranceles correspondientes."

8. Obligaciones de las sociedades de gestión colectiva

a) Obligación de aceptar la administración de los derechos de sus socios

Las sociedades de gestión están obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y derechos conexos que le sean encomendados directamente de acuerdo con su objeto o fines. Dicho encargo lo realizarán con sujeción a las reglas del contrato de adhesión establecidas en los estatutos y a las demás normas aplicables al efecto (Art. 119).

b) Gestión libre de influencias

Las sociedades de gestión deberán establecer en sus estatutos las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio, y para evitar una injusta utilización preferencial de las obras o prestaciones comprendidas en éste (Art. 120).

c) Principios de las sociedades de gestión

En el ejercicio de su actividad, las sociedades de gestión se atenderán a los siguientes principios:

- i) Su administración se ajustará a las reglas de una gestión sana y económica.
- ii) En sus operaciones de otorgamiento de licencias y fijación, percepción y reparto de remuneraciones procederán según reglas determinadas, que se aplicarán de forma igualitaria, y, en relación con los administrados extranjeros, con observancia de la norma de trato nacional establecida en los correspondientes tratados internacionales (Art. 121).

d) Reparto de remuneraciones

De conformidad con los principios enunciados anteriormente, el reparto de las remuneraciones recaudadas se efectuará equitativamente entre los titulares y cesionarios en exclusiva de las obras o prestaciones utilizadas, con arreglo a un plan predeterminado en los estatutos que excluya la arbitrariedad. Con tal finalidad, las

sociedades deberán llevar a cabo todo cuanto sea razonable para identificar los mencionados derechohabientes. El plan de reparto atribuirá a cada obra, o a cada prestación o producción fonográfica una participación en las remuneraciones recaudadas proporcional al rendimiento de cada una de ellas derivado de su utilización. Si la determinación de ese rendimiento fuere imposible o gravemente dificultosa, o entrañase gastos excesivos, las sociedades podrán evaluarlo mediante una estimación que descansa en criterios controlables y adecuados (Art. 122)²⁴.

e) Asistencia social y cultural

Las sociedades de gestión deberán realizar, en la medida en que les sea económicamente factible, actividades o servicios asistenciales en beneficio de sus socios, así como promover otras de carácter cultural. La afectación a dichos fines de una parte de las remuneraciones recaudadas requerirá la aprobación del órgano supremo de la sociedad y, en lo que respecta a las remuneraciones que correspondan a los repertorios administrados en virtud de contratos de representación concluidos con organizaciones de gestión extranjeras, se estará a lo pactado expresamente en los mismos (Art. 123).

f) Balance y memoria

Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la sociedad confeccionará el balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable al tipo societario de que se trate, el balance y la documentación contable serán sometidos a verificación por expertos, personas físicas o jurídica, legalmente competentes, nombrados anualmente por el órgano supremo del gobierno de la sociedad. Los estatutos establecerán las normas con arreglo a las cuales la minoría podrá designar otro auditor. Dicha minoría deberá estar constituida por una agrupación de socios que representen al menos el diez por ciento del número total. El balance, con nota de

²⁴ Atendiendo a lo establecido en los Arts. 121 y 122 de la Ley, se distribuirán las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para cubrir los gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en los estatutos, que no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de lo recaudado anualmente, y de una erogación adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, que en ningún caso debe ser superior al diez por ciento (10%).

haber obtenido o no el informe favorable del auditor o auditores, en su caso, se pondrá a disposición de los socios en el domicilio legal de la sociedad, con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la reunión del órgano que ha de aprobarlo. La sociedad estará obligada a entregar a cualquier miembro de ella que la solicite, tenga o no la cualidad de asociado, una copia del balance, de la memoria y del informe del auditor (Art. 124).

g) Secreto de negocios

Las sociedades de gestión están obligadas a salvaguardar el secreto de los negocios de sus usuarios (Art. 126).

h) Otras obligaciones

Las sociedades de gestión están obligadas:

- i. A contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión sin exclusividad de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración.
- ii. A establecer aranceles generales que determinen las remuneraciones exigibles y que deberán prever reducciones para las utilidades de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativas realizadas por personas jurídicas que carezcan de esa finalidad.
- iii. A negociar dichos aranceles con las asociaciones de usuarios que sean representativas del sector correspondiente y que lo soliciten.

Los aranceles serán comunicados al Registro, que ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial (Art. 125).

9. Cancelación de la personalidad jurídica de la sociedad de gestión colectiva

La Asamblea Nacional está facultada por la Ley 312 a cancelar la personalidad jurídica de la sociedad de gestión en caso de grave incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo II de dicha Ley y en la Ley N° 147, Ley General sobre Personas jurídicas sin Fines de Lucro.

Previo a la cancelación se apercibirá a la sociedad para enmendar la situación de incumplimiento en un plazo no menor de 3 meses. La revocación producirá efectos a los tres meses de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial (Art. 127).

10. Control y vigilancia

Las actividades de las sociedades de gestión colectiva son controladas y vigiladas por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la Ley, sin perjuicio de las otras facultades que la ley le confiere.

En virtud de estas facultades, la oficina puede exigir a las sociedades toda clase de información, realizar inspecciones y auditorías. También la ley la faculta a nombrar un representante que asista con voz y sin voto a las reuniones de los órganos colectivos de la sociedad.

Las sociedades de gestión están obligadas a notificar al Registro los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados generales, los aranceles que establezcan y los acuerdos que celebren con asociaciones de usuarios, y los contratos de representación que suscriban con organizaciones extranjeras de su clase.

Por lo que respecta a la aprobación de las modificaciones de estatutos, ésta se entenderá concedida por el Registro si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su presentación (Art. 128).

CAPITULO IX

PIRATERÍA INTELECTUAL

1. Origen

El fenómeno de la piratería relacionada a las obras objeto del Derecho de Autor no es para nada reciente. Lo que sin duda podemos afirmar es que la piratería está íntimamente ligada a los avances tecnológicos que en las últimas décadas han permitido que este flagelo se multiplique a niveles ciertamente alarmantes y jamás imaginados hace 50 años.

Indudablemente, las obras musicales y audiovisuales son las más afectadas hoy en día por la piratería. En el caso de las primeras, el disco de vinilo o acetato, presente desde inicios del siglo XX representaba un soporte de este tipo de obra muy seguro para la época ya que no existía un método sencillo ni asequible para copiar dichas obras.

A partir de la entrada al mercado de la cinta magnetofónica se comienza a facilitar el copiado de los discos, primero con la cinta de carrete y luego, a finales de los años 60 con los casetes, que fueron tan populares durante mucho tiempo.

En décadas posteriores, los mismos fabricantes de aparatos electrodomésticos facilitaron al público el copiado de las obras musicales y audiovisuales: baste recordar el aparato reproductor de doble casetera y la aparición del Betamax y posteriormente del VHS. Podemos afirmar entonces que a partir de los años 70 inicia vertiginosamente a crecer el mercado ilegal de obras musicales primero, y de obras audiovisuales después.

Pero el verdadero y más duro impacto provocado en este ámbito lo representó efectivamente la aparición de la tecnología digital (CD's y DVD's), la televisión por cable, la masificación del uso de computadoras y la Internet. Fue entonces que surgió el verdadero reto para el Derecho de Autor.

En la década del 70 se introduce el concepto "*mass media*". La radio y televisión transmiten información y entretenimiento a audiencias cada vez más grandes, tanto a nivel local como internacional. Asimismo,

la tipografía representó un gran avance al posibilitar que la cultura y la información abarcara cada vez más gente. Evidentemente que estas condiciones facilitan que las obras de derecho de autor se encuentren a disposición de mucho más usuarios, lo que representa una ventaja pero lógicamente también grandes riesgos, sobretodo por la tremenda facilidad con que hoy se pueden reproducir las imágenes, los sonidos y textos.

La tecnología digital como veníamos afirmando, ha significado un agravamiento de los índices de venta ilegal de obras de derecho de autor ya que permite copiar mayor volumen de obras, conservando la calidad de las originales. Esta situación afecta grandemente a las disqueras, que son las que normalmente ostentan el derecho de reproducción. Sin embargo, los más afectados son los propios autores cuyos ingresos son cada vez menores por causa de la piratería.

Ante este panorama, han surgido diversas maneras de contrarrestar el impacto de la actividad ilegal respecto de las obras a través de tres vías, que son:

1. La noción de copia privada.
2. La imposición de un canon a la venta de aparatos copiadore (fotocopiadoras, grabadoras de casetes, quemadores de CD, etc.)
3. El establecimiento de un gravamen a los fabricantes de soportes copiables (cintas de casetes, CD´s en blanco, etc.)

De todos estos factores que hemos mencionado como potenciadores de los niveles de piratería, la masificación del uso de computadoras y la Internet son los que han incidido de forma más directa en este mercado ilegal de obras y por lo tanto los que han obligado a adaptar la legislación de la materia para tratar de minimizar los daños sufridos por los titulares del derecho de autor.

Hoy en día, la venta ilegal de obras musicales y audiovisuales y el "*downloading*" o bajado de música y películas de la red de forma ilegal constituyen las formas de piratería que más daño ocasionan a todos los titulares en los países desarrollados. Por citar ejemplos, se considera que el 99 % de las canciones bajadas de la Internet son

ilegales. Esto obviamente afecta a la Industria Discográfica que en el año 2001 tuvo un descenso en ventas de álbumes en un 5 % y en algunos países como España, significó un 11.2 % para el primer semestre del 2002. Según la SGAE, en España, las ventas de música ilegal pasaron de un 3% en 1999 a un 30% en 2002, con pérdidas que ascendieron a los 200 millones de euros.

2. Piratería discográfica en el mundo

La piratería es un mal que está presente en todos los países del mundo con distintos niveles de afectación:

- a) Países con menor nivel de piratería en el mundo (menos del 10 % del mercado): Alemania, Francia y el Reino Unido.
- b) Países con un fuerte incremento de la piratería en los últimos años (aproximadamente 25 %) : Grecia, Italia y España.
- c) Países con niveles crónicos de piratería (entre el 65 y el 95 %): Brasil, México, Paraguay, China y Rusia

3. Efectos de la piratería musical

La piratería musical afecta de diversas maneras y a diferentes grupos de individuos. Lesiona los intereses privados de los autores y artistas, ya que éstos no reciben ningún tipo de remuneración por la venta de sus discos. Asimismo, los productores de fonogramas miran afectadas sus ventas, con la consecuente pérdida de lo invertido en la grabación de los discos, su promoción, etc. Las tiendas de discos también resultan afectadas ya que entre mas discos piratas se vendan en el mercado ilegal, menos comercialización tendrán los productos originales. Todo esto tiene como consecuencia el descenso en la inversión, el cierre de empresas y la pérdida de cientos de empleos. Pero las afectaciones no se dan únicamente en el campo económico. La piratería degrada también la cultura porque desincentiva la creatividad de los autores y la promoción de nuevos artistas y creadores.

El Estado también se mira afectado por la piratería y por consiguiente, la sociedad en general, ya que la piratería es sinónimo de defraudación al verse disminuida la recaudación fiscal.

Por último, el incremento de la piratería implica el aumento de la inseguridad ciudadana ya que se ha comprobado que detrás de los piratas están verdaderas redes del crimen organizado que en muchos países se encuentran ligadas a otros delitos como el narcotráfico y la venta de armas.

En Nicaragua no existen estudios que nos muestren el porcentaje de CD's y DVD's pirateados que se venden en el mercado local y su impacto negativo en la economía nicaragüense, aunque algunos afirman que la cifra ronda el 50 por ciento. Ciertamente o no, con solo observar en las calles la gran cantidad de vendedores ambulantes de este tipo de productos y los puestos fijos que cada día surgen en diversos puntos de la capital y resto del país, podemos imaginar con facilidad que dicho porcentaje es muy alto y que el estado debe comenzar a aplicar la ley antes que la comisión de este tipo de delitos se vuelva incontrolable.

CAPITULO X

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la organización de tipo internacional encargada de velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual en todo el mundo. También tiene como objetivo contribuir al reconocimiento y recompensa del ingenio de los inventores, autores y artistas, estimulando la creatividad humana en el mundo de la ciencia, tecnología, la literatura y las artes, facilitando de ese modo el comercio internacional.

El origen de la OMPI se remonta al año 1883, cuando se adopta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual constituye el primer tratado internacional de gran alcance. Este convenio, que entró en vigor al año siguiente y fue suscrito por 14 Estados, creó una Oficina Internacional que se encargaría de administrar el tratado y organizar las reuniones de los países miembros.

En 1886, como ya sabemos, se suscribe el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual también creó una Oficina Internacional con los mismos propósitos que la anterior.

En 1893 estas dos oficinas se fusionan, convirtiéndose en las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocidas por sus siglas en francés como BIRPI. Su sede fue en Berna, Suiza. En 1960 se trasladan a Ginebra. Diez años después se suscribe el convenio que establece la OMPI, que absorbe a las Oficinas Internacionales.

En 1974, la OMPI se convierte en un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con la tarea específica de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1996, la OMPI amplió sus funciones y suscribe un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fin de reglamentar el comercio mundial, demostrando aún más la importancia de los derechos de propiedad intelectual.

Hoy en día, la OMPI cuenta con 179 Estados miembros que representan más del 90 % de los países del mundo. Los principales órganos decisorios de los Estados miembros son la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación.

Los miembros del personal de la Secretaría ascienden a 917, procedentes de 92 países. Su presupuesto para el año 2002-2003 fué de 867 millones de francos suizos.

La OMPI administra 23 Tratados Internacionales, de los cuales 16 son sobre propiedad industrial y 6 sobre derecho de autor.

**LEGISLACIÓN NACIONAL Y
CONVENIOS DE BERNA Y ROMA**

LEY No. 312

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley regula los derechos de Autor sobre las obras literarias, artesanales, artísticas o científicas y los Derechos Conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:

- 2.1. Autor: Es la persona natural que crea alguna obra, sea literaria, artística o científica.
- 2.2. Autor Anónimo: Es el Autor que escribe una obra, sin identificar quien la escribe.
- 2.3. Artista Intérprete o Ejecutante: Es todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de folklore.
- 2.4. Cable-Distribución: Es la operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes o imágenes y sonidos producidos electrónicamente son transmitidas a cierta distancia por hilo u otro dispositivo conductor a los fines de su recepción por el público.

- 2.5. **Comunicación Pública:** Es todo acto por el cual una pluralidad de personas puedan tener acceso a la obra, interpretación, fonograma, o emisión de radiodifusión sin previa distribución de ejemplares, incluyendo la puesta a disposición del público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. No se considerará pública la comunicación cuando se lleve a efecto dentro del círculo familiar ordinario de una persona natural y sin fines lucrativos.
- 2.6. **Distribución:** Es la puesta a disposición del público del original o copias de la obra o fonograma, mediante su venta, alquiler, importación, préstamo o cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión. El término distribución comprende la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada y a solicitud de cualquier miembro del público, siempre que la copia así obtenida no tenga carácter transitorio o incidental.
- 2.7. **Divulgación:** Es todo acto por el cual, con el consentimiento del titular del derecho, la obra, interpretación o fonograma, se hace accesible por primera vez al público en cualquier forma o por cualquier procedimiento.
- 2.8. **Empresa u Organismo de Cable-Distribución:** Es toda persona natural o jurídica que decide la distribución por cable y que determina el programa, así como el día y la hora de esta distribución.
- 2.9. **Emisión:** Es la difusión a distancia, directa o indirecta, de sonidos, imágenes o de sonidos e imágenes para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento, ya sea inalámbrico o por cable, fibra óptica o procedimiento análogo. Se considera también como tal la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite.
- 2.10. **Expresiones de Folklore:** Son las producciones de elementos característicos el patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado en la comunidad nicaragüense o por individuos que reconocidamente respondan a las expectativas de dicha comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural, comprendiendo los cuentos, la poesía, las canciones y la música instrumental popular, las danzas y espectáculos populares, las artesanías, así como las expresiones artísticas de ritos y producciones de arte igualmente popular.
- 2.11. **Fijación:** Es la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.

- 2.12. Fonograma: Es toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación de sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual.
- 2.13. Obra Anónima: Es aquella obra que no se conoce la identidad de su Autor.
- 2.14. Obra Audiovisual: Es la expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que den sensación de movimientos y cuya percepción solo sea posible con la intervención de un procedimiento técnico de comunicación de la imagen, tales como la cinematografía o la televisión, independientemente de las características del soporte material.
- 2.15. Obra Individual: Es la creada por una sola persona física.
- 2.16. Obra en Colaboración: Es la creada conjuntamente por dos o más personas naturales.
- 2.17. Obra Colectiva: Es la creada por varios autores por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y en la que, o no es posible identificar a sus autores en razón de su número, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vista al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado.
- 2.18. Obra Derivada: Es la creación que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria.
- 2.19. Obra Originaria: Es la primigéneamente creada con respecto de otras.
- 2.20. Obra Seudónima: Es la que se divulga bajo un nombre supuesto.
- 2.21. Obra Póstuma: Es la divulgada con posterioridad a la muerte del autor.
- 2.22. Organismo de Radiodifusión: Es la persona natural o jurídica que decide las emisiones de radiodifusión y el contenido de la misma, y que determina el programa así como el día y la hora de la emisión.
- 2.23. Productor Fonográfico: Es la persona natural o jurídica que fija, toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de los sonidos.

- 2.24. Productor Obra Original:** La persona natural o jurídica que asume la iniciativa y que encarga la responsabilidad de la realización a los autores de la obra audiovisual, es decir la fijación por primera vez de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimientos, de una obra de la representación o ejecución de una expresión de folklore, o de otras imágenes, con o sin sonido, cuya percepción solo sea posible con la intervención de un procedimiento técnico de comunicación de la imagen tales como la cinematografía o la televisión, independientemente de las características del soporte material.
- 2.25. Productor Videográfico:** Es la persona natural o jurídica que fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, de una obra de la representación o ejecución de una expresión de folklore, o de otras imágenes, con o sin sonido.
- 2.26. Programa de Cómputo:** Es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseños o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura autorizada, es capaz de hacer que ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejercite determinada tarea u obtenga determinado resultado. También forma parte del programa su documentación técnica y sus manuales de uso.
- 2.27. Publicación:** Es todo acto por el que, una obra o un fonograma cuyos ejemplares se han puesto a disposición del público, con el consentimiento del autor cuando se trata de una obra, con el consentimiento del productor en el caso de un fonograma, para su venta, alquiler, préstamo público o para cualquier otra transferencia de propiedad o de posesión, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales del público.
- 2.28. Radiodifusión:** Es la transmisión al público por medio inalámbrico, incluye la transmisión por satélite.
- 2.29. Reproducción:** Es la incorporación de una obra, o producción intelectual en un medio, que permita su comunicación incluyendo su almacenamiento electrónico y la obtención de copias de ellas por cualquier medio o procedimiento.
- 2.30. Retransmisión:** Es la reemisión de una emisión de otro organismo de radiodifusión o de cable distribución.

2.31. Videograma: Es la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimientos, de una obra o de la representación o ejecución de una obra o de una expresión de folklore, así como de otras imágenes, con o sin sonidos, en video cassettes o soporte similar.

Artículo 3. El goce y el ejercicio de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos reconocidos en esta Ley no están supeditados a la formalidad de registro o cualquier otra, o ambas y son independientes y compatibles entre si, así como en relación con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada o plasmada la obra o la prestación protegida, la producción fonográfica o con los derechos de propiedad industrial.

TÍTULO I

DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. El Derecho de Autor de una obra literaria, artesanal, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

Artículo 5. El Derecho de Autor comprende facultades de carácter moral y patrimonial que confieren al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley.

CAPÍTULO II

DEL AUTOR

Artículo 6. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma, seudónimo, iniciales o signo que lo identifique.

Artículo 7. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o seudónima el ejercicio de los Derechos de Autor corresponderá a la persona natural o jurídica que la haga accesible al público en cualquier forma o procedimiento con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.

Artículo 8. El Derecho de Autor de la obra colectiva, salvo pacto en contrario, corresponderá a la persona que la edite o la divulgue.

Se requiere el consentimiento de todos los autores para divulgar y modificar la obra de colaboración.

Artículo 9. Los coautores, una vez divulgada la obra, ejercerán sus derechos de común acuerdo, sin que ninguno de ellos pueda rehusar injustificadamente su consentimiento para la explotación de la obra en la forma en que se divulgó.

Artículo 10. Cuando varios autores hayan creado una obra en colaboración, que pertenezca a géneros diferentes, cada cual podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución, siempre que no cause perjuicio a la explotación común.

Artículo 11. Son coautores de la obra audiovisual en los términos de los Artículos que anteceden:

- 1) El Director-realizador.
- 2) Los autores del argumento, el guión y los diálogos.
- 3) Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.

Artículo 12. Los autores de las obras preexistentes en un obra audiovisual serán considerados también como coautores de la misma.

CAPÍTULO III DE LA OBRA

Artículo 13. Están protegidas por esta Ley todas las creaciones originales y derivadas, literarias, artísticas o científicas, independientemente de su género, mérito o forma actual o futura, tales como:

- 1) Las obras artísticas artesanales producto del arte popular en sus diversas expresiones y formas.
- 2) Las obras literarias, ya sean orales como los discursos, alocuciones, sermones, conferencias, alegatos de estrado y las explicaciones de cátedra; ya escritas como las novelas, cuentos, poemas, comprendiendo también los programas de cómputo, sean estos programas fuente o programa objeto y cualquiera que sea su modo o formas de expresión.
- 3) Las composiciones musicales, con o sin letra.
- 4) Las obras dramáticas, las dramático-musicales, las coreográficas, las pantomimas y en general, las obras teatrales.
- 5) Las obras audiovisuales dentro de las cuales se comprende los videogramas.
- 6) Las esculturas, pinturas, grabados, fotograbados, litografías, dibujos, las historietas gráficas o cómicas y las obras plásticas en general.

- 7) Las fotográficas y las producidas por un procedimiento análogo.
- 8) Las obras de arquitectura y sus proyectos, ensayos, bosquejos, planos, maquetas, bosquejos y diseños de obras de arquitectura.
- 9) Los gráficos, mapas, diseños y figuras tridimensionales referidos a la geografía y topografía, y en general, a la ciencia.

No son objeto de protección las ideas, procedimientos, métodos o conceptos matemáticos.

Artículo 14. Son consideradas como obras independientes, sin perjuicio del Derecho de Autor, que en su caso, correspondan a las partes que las integren, las colecciones de obras literarias, artísticas o científicas, tales como las antologías, compilaciones de textos, resoluciones administrativas o judiciales y de otros elementos, comprendidas las bases de datos que, por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales.

Artículo 15. Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de protección:

- 1) Las traducciones, adaptaciones y doblajes.
- 2) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
- 3) Los arreglos musicales.
- 4) Los compendios, resúmenes y extractos.
- 5) Cualquier otra creación que resulte de la transformación de una obra original.

Artículo 16. No son objeto de protección las leyes, las disposiciones gubernativas, proyectos de ley, actas, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los órganos y organismos públicos y traducciones oficiales de los textos anteriores. Las sentencias de los tribunales pueden ser reproducidas por cualquiera, luego que lo hayan sido oficialmente sujetándose el editor al texto auténtico.

Artículo 17. El título de un obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella, aún en el caso de que la obra se encuentre en dominio público.

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS

Artículo 18. El Derecho de Autor comprende Derechos Morales y Patrimoniales.

Sección Primera Derechos Morales

Artículo 19. Corresponde al autor los siguientes derechos morales:

- 1) Derecho a la paternidad, en virtud del cual debe ser reconocido como tal, en particular el derecho a que se indique su nombre en los ejemplares de su obra, y en la medida de lo posible, de forma habitual en relación con cualquier uso público de su obra.
- 2) Derecho a la integridad que le faculta para exigir que se respete la integridad de la obra, por lo que podrá oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando pueda causar o cause perjuicio a su honor, legítimo interés o reputación.
- 3) Derecho de divulgación, el autor es quien decide si su obra es divulgada, en que forma y momento.
- 4) Derecho de retiro o arrepentimiento, que le permite retirar la obra de circulación, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación de la obra.
- 5) Derecho de modificarla respetando los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 20. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables.

Artículo 21. Al fallecer el autor se transmite a sus herederos el ejercicio de los derechos contenidos en el Artículo 19 de la presente Ley, sin limite de tiempo.

No obstante, el autor mediante testamento, podrá confiar el ejercicio de los derechos mencionados en el párrafo anterior a cualquier persona natural o jurídica.

A falta de herederos o de las personas designadas por el autor conforme se mencionan en el párrafo precedente, se procederá según lo dispuesto en el Título VIII, Artículos 1008 y siguientes del Código Civil "De la Distribución de la Herencia", en cuanto a los derechos mencionados en los numerales 1 y 2 del Artículo 19 de la presente Ley.

Sección Segunda

Derechos Patrimoniales

Artículo 22. Corresponde al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma.

Artículo 23. El derecho patrimonial es alienable, temporal y, sin perjuicio de otras modalidades, comprende las siguientes:

- 1) Derechos de reproducción de la obra total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte.
- 2) Derecho de transformación.
- 3) Derecho de traducción
- 4) Derecho de adaptación.
- 5) Derecho de comunicación al público, como:
 - a) La declamación.
 - b) La representación, ejecución, en forma directa o indirecta.
 - c) La proyección y exhibición o exposición pública.
 - d) La transmisión digital o analógica, o por cualquier medio, por hilo o sin hilo, de sonidos, imágenes, palabras, a distancia, lo que comprende la captación en sitio público de obras y producciones protegidas, comprendida la puesta a disposición del público de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que ellos elijan.
 - e) El acceso público a base de datos informáticos por medio de la telecomunicación.
 - f) Derecho de distribución al público.
 - g) Derecho de alquiler.
 - h) Derecho de importación.

Artículo 24. Las clases de derechos patrimoniales señaladas en el Artículo precedente, serán debidamente desarrollados en el Reglamento de la presente Ley.

Sección Tercera

Otros Derechos

Artículo 25. El autor tendrá el derecho de acceder al ejemplar único o raro de su obra, cuando se halle en poder de otro, garantizando a su dueño la devolución, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios.

Este derecho será irrenunciable y transmisible únicamente por sucesión a título de herencia.

Artículo 26. En el caso de reventa de ejemplares originales de obras de artes plásticas, así como manuscritos de escritores y compositores, efectuadas en pública subasta, en establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente comercial, el autor tendrá derecho a percibir un cinco (5%) por ciento del precio de la reventa.

Este derecho no comprende a las obras de arquitectura y las de artes aplicadas.

Tratándose de ejemplares originales de las citadas obras de arte, este derecho podrá ser ejercitado por una sociedad de gestión colectiva en los términos previstos en la presente Ley.

CAPÍTULO V

DURACIÓN Y LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Sección Primera

Duración

Artículo 27. Los derechos patrimoniales durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o de la declaración de su fallecimiento o de la respectiva declaración de ausencia.

Artículo 28. En las obras seudónimas o anónimas y colectivas los derechos patrimoniales durarán setenta años desde su divulgación, a menos que antes de cumplirse este plazo fuere conocido el autor. En tal caso se aplicará lo previsto en el Artículo anterior.

Artículo 29. En el caso de una obra en colaboración, el plazo de duración de los derechos previstos en el Artículo 27 de la presente Ley se computará desde la muerte del último coautor sobreviviente.

Artículo 30. Los plazos establecidos en esta sección se computarán desde el primer día de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra.

Sección Segunda

Limitaciones

Artículo 31. Está permitida sin autorización del autor exclusivamente para uso personal la reproducción en una copia de una obra divulgada.

La disposición anterior no se aplica a:

- 1) La reproducción de obras de arquitectura que revista la forma de edificios o de otras construcciones similares.
- 2) La reproducción reprográfica de un libro íntegro o de una obra musical en forma gráfica (partituras).
- 3) La reproducción de la totalidad o de partes importantes de bases de datos en forma numérica.
- 4) La reproducción de programas de ordenador, salvo en los casos previstos en el Artículo 39 de la presente Ley.

- 5) Ni, a ninguna otra reproducción de una obra que pudiera afectar a la explotación normal de la obra o que pudiera perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor.

Artículo 32. Es lícita, sin autorización del autor, la reproducción de un fragmento de obras ajenas, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, siempre que se trate de obras ya divulgadas y esa reproducción se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, en la medida justificada por el fin que se persiga, conforme a los usos honrados e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Artículo 33. Está permitida, sin autorización del autor, la reproducción, por medio de la reprografía y para fines de enseñanza, de Artículos aislados publicados en la prensa de extractos cortos de una obra, siempre que una y otra hayan sido publicadas, a condición de que esa reproducción se efectúe en establecimientos de enseñanza y no se persiga un fin directo o indirectamente comercial y se realice en la medida justificada para el objetivo que se pretenda alcanzar, conforme a los usos honrados y citando la fuente y el nombre del autor, si figura en la misma.

Artículo 34. Está permitida sin autorización del autor, la reproducción de la obra para uso privado de los no videntes, siempre que la reproducción o copia se efectúe mediante el Sistema Braille u otro procedimiento específico y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa.

Artículo 35. Las bibliotecas y servicios de archivo, cuyas actividades no persigan directa ni indirectamente un provecho comercial, pueden reproducir, sin autorización del autor, ejemplares aislados de una obra que forme parte de su colección permanente a fin de conservarlos o de reemplazarlos, si el ejemplar en cuestión ha sido perdido, destruido o se ha hecho inutilizable, a condición de que no sea posible adquirir tal ejemplar en un tiempo y bajo condiciones razonables.

Artículo 36. Las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de enseñanza pueden ser anotadas y recogidas libremente pero

está prohibida su publicación o reproducción integral o parcial, sin la autorización de su autor.

Artículo 37. No será considerada transformación que exija la autorización del autor, la parodia de una obra divulgada.

Artículo 38. La comunicación pública efectuada en establecimientos dedicados a la comercialización de fonogramas, videogramas y materiales y aparatos de reproducción, sonora o audiovisual, o de recepción de emisiones de radio o televisión, cuando la comunicación se realice con el fin de demostrar a la clientela el contenido o funcionamiento de tales soportes, materiales o aparatos, en la medida estrictamente necesaria para dicho fin y no como reclamo o publicidad de los mismos.

Artículo 39. El propietario legítimo de un ejemplar de un programa de ordenador podrá, sin la autorización del autor, hacer una copia o la adaptación de ese programa, a condición de que dicha copia o dicha adaptación sea:

- 1) Necesaria para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se obtuvo el programa; o
- 2) Necesaria para archivar o para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que éste se haya perdido, destruido o sea inutilizable.

Artículo 40. Los trabajos y Artículos sobre temas de actualidad económica política o religiosa y de otra índole difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otro de la misma clase sin autorización del autor, salvo que la reproducción, distribución o comunicación se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente y el nombre del autor, si figura en ella.

Artículo 41. Las conferencias, discursos, alocuciones, informes ante los tribunales o autoridad administrativa y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente sin autorización del autor por los medios de comunicación social,

siempre que esos actos se realicen con el exclusivo fin de informar de la actualidad y citando el nombre del autor. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho de publicar en colección tales obras.

Artículo 42. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad, puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente sin la autorización del autor, en la medida justificada por dicha finalidad informativa y de acuerdo con la naturaleza de la obra solo en casos excepcionales la reproducción podría ser total.

Artículo 43. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, sin autorización del autor, por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía y las grabaciones audiovisuales. En cuanto a las obras de arquitectura, el Artículo anterior solo se aplicará su aspecto exterior.

CAPÍTULO VI DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 44. Al extinguirse el período de protección la obra pasará al dominio público.

Las obras en dominio público podrán ser utilizadas libremente respetando la autoría y la integridad de la misma.

CAPÍTULO VII

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Sección Primera

Transmisión

Artículo 45. Los derechos patrimoniales se transmiten por causa de muerte o por cualquiera de los modos admitidos en la Ley.

Sección Segunda

Disposiciones Generales

Artículo 46. Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de cesión por actos entre vivos en exclusividad o sin ella, quedando limitada al derecho o derechos concedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial. A efectos de su cesión, los derechos se consideran independientes entre sí.

Artículo 47. Cuando en el contrato no se indicara la duración, quedará limitado a cinco años. Si no se hubiere expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no especificaren de modo concreto las modalidades de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato.

Artículo 48. Será nula la cesión de derechos por un período mayor de cinco años, respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor; así como el convenio en que el autor se comprometa a no crear ninguna obra.

Artículo 49. Toda transferencia debe formalizarse por escrito.

Artículo 50. Si en la cesión en exclusividad se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato ante la autoridad judicial para que se fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercerse dentro de los cinco años siguientes al de celebración del contrato.

Artículo 51. La cesión en exclusividad deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquella, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el cedente, y, salvo pacto en contrario, la de conferir autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, el cesionario podrá conjunta o separadamente, con el cedente perseguir las violaciones que afecten a los derechos concedidos.

El cesionario en exclusividad tendrá la obligación de poner todos los medios necesarios que aseguren una continua efectividad de la explotación otorgada, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

Artículo 52. Cuando se trate de una obra realizada por un actor por cuenta de una persona natural o jurídica (en adelante denominada "empleador") en el marco de un contrato de trabajo y de su empleo, salvo disposiciones en contrario del contrato, el primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor, pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de la creación de la obra.

El autor de una obra podrá conceder licencias a otras personas para realizar actos derivados de sus derechos patrimoniales. Dichas licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

Una licencia no exclusiva autorizará a su titular a realizar, de la forma que le esté permitido, los actos a los que ésta hace referencia, al mismo tiempo que el autor y demás titulares de licencias no exclusivas.

Una licencia exclusiva autorizará a su titular, con exclusión de todas las demás personas, incluido el autor, a realizar, de la forma que le esté permitido, los actos a que hace referencia dicha licencia.

Se considerará que una licencia es exclusiva únicamente si está expresamente estipulado en el contrato concertado entre el autor y el titular de la licencia.

En las obras por encargo los derechos corresponderán al empleador, salvo pacto en contrario.

Artículo 53. Los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas, salvo estipulación en contrario, conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la forma de la publicación en la que se haya insertado.

Artículo 54. Los derechos patrimoniales del autor no son embargables. Las obligaciones a favor del autor tienen el mismo privilegio que los créditos a favor de los trabajadores en los procedimientos concursales.

Subsección Segunda

Contrato de Edición

Artículo 55. Se entiende por contrato de edición el celebrado entre el autor o sus derechohabientes y el editor, en virtud del cual los primeros, mediante remuneración, conceden al editor los derechos de reproducción y distribución de la obra, y el editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo, en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 56. En aquellas obras que sean objeto de un contrato de encargo, la remuneración que se convenga por la creación de la obra podrá considerarse como anticipo de la que corresponda al autor si el comitente celebra con este un contrato de edición, una vez que le sea entregada la obra y la acepte.

Las disposiciones de esta Subsección no se aplicarán a las obras cuya reproducción y distribución tengan por destino una publicación periódica.

Artículo 57. El contrato de edición deberá formalizarse por escrito y expresar o siguiente:

- 1) Si los derechos se conceden en exclusiva.
- 2) Su ámbito territorial.
- 3) El número de ejemplares que tendrá la edición o cada una de las que se convengan. Para la segunda y sucesivas ediciones bastará con que se determine el número máximo o el mínimo de esos ejemplares.

- 4) La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra.
- 5) La remuneración del autor.
- 6) El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor.
- 7) El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición convenida, que no podrá exceder de dos años, contados desde la entrega del original por el autor.
- 8) Deberá comprometer al Editor a emitir certificado notariado de los ejemplares de que consta la edición en cuestión. Asimismo deberá imprimirse en números, en cada ejemplar, la cantidad de unidades de que consta la edición respectiva.

Artículo 58. Será nulo el contrato que no se haya formalizado por escrito o que no exprese lo previsto en los numerales 3) y 5) del Artículo anterior.

Si no se hiciere constar el carácter exclusivo de la cesión de derechos, se entenderá que han sido otorgados sin exclusividad.

La omisión de lo previsto en los numerales 4), 6) y 7) del Artículo anterior, dará acción a los contratantes para compelerse recíprocamente a subsanar la falta. En defecto de acuerdo, lo determinara el Juez, atendiendo a las circunstancias del caso, a los usos y, en su caso, a los actos de las partes en la ejecución del contrato.

Artículo 59. Cuando se trate de la edición de una obra en forma de libro, el contrato deberá expresar el idioma en que ha de editarse la obra, a cuyo efecto, en este último caso, se entenderá cedido al editor el correspondiente derecho de traducción. Si no se indicase nada al respecto, el editor solo podrá editarla en el idioma original

Artículo 60. Obligaciones del Editor:

- 1) Someter las pruebas al autor.
- 2) Reproducir la obra en la forma convenida, respetando el derecho moral del autor.
- 3) Proceder a la puesta en circulación de los ejemplares de la obra en el plazo y condiciones estipulados.
- 4) Asegurar a la obra una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición.

- 5) Satisfacer al autor la remuneración estipulada, presentándole, al menos cada seis meses, como mínimo, un informe del estado de cuentas referente al número de ejemplares impresos, vendidos, en depósito, así como los derechos de autor que le corresponden.
- 6) Restituir al autor el original de la obra una vez finalizada la impresión de la misma.

Artículo 61. Obligaciones del Autor:

- 1) Entregar al editor los originales de la obra en forma debida y dentro del plazo fijado.
- 2) Garantizar al editor la autoría y originalidad de la obra.
- 3) Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

Artículo 62. Durante el período de corrección de pruebas, el autor podrá introducir en la obra modificaciones, siempre que no altere su carácter o finalidad ni se eleve sustancialmente el costo de la edición, sin perjuicio de lo que se establezca en el contrato.

Artículo 63. El autor podrá resolver el contrato de edición en los casos siguientes:

- 1) Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidas.
- 2) Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero.
- 3) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, el editor no efectúa la siguiente en el plazo de un año desde que fuese requerido para ello por el autor. Una edición se considera agotada a los efectos de este Artículo cuando el número de ejemplares en existencia sea inferior a cien.
- 4) En los supuestos de cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas por el autor en concepto de anticipo sobre las que le correspondan en el futuro como remuneración.
- 5) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en el Artículo 60 de la presente Ley, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.
- 6) Cuando, a consecuencia de quiebra del editor o de otro procedimiento concursal planteado contra el mismo, se suspenda la explotación de la obra, si dicha explotación no se reanuda

dentro del plazo fijado al efecto por el Juez a instancia del autor.

- 7) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los ejemplares que le resten de la edición sin cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 64 de la presente Ley.

Artículo 64. El editor no podrá vender como saldo la edición antes de los dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares sin consentimiento del autor.

Después de dicho plazo, si el editor decide vender como saldo los que le resten, lo notificará fehacientemente al autor, quien podrá optar por adquirirlo, ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo o, en caso de remuneración proporcional, percibir el diez por ciento de lo facturado por el editor. Esta opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación por el editor en la que le comunique su decisión de realizar dicha venta.

Si transcurrido el mismo plazo, el editor decide destruir el resto de los ejemplares de una edición, deberá notificarlo fehacientemente al autor, y este tendrá derecho a exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación.

Artículo 65. El contrato de edición de obras musicales, dramático-musicales y coreográficas que incorporen composiciones de esta clase, por virtud del cual se cedan al editor, además de los derechos de reproducción y distribución, los de comunicación pública, se regirá por las disposiciones de esta subsección, sin perjuicio de las estipulaciones siguientes:

- 1) Será válido el contrato en que se exprese el número estimado de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades de las explotaciones concedidas, estimadas de acuerdo con el uso en el sector profesional de la edición musical.
- 2) Para las obras dramático-musicales, las conocidas como de música seria y las coreográficas que incorporen composiciones de este género, el plazo previsto en el numeral 7) del Artículo 57 de la presente Ley, será de cinco años.

Subsección Tercera

Contrato de Representación

Artículo 66. Se entiende por contrato de representación aquel en virtud del cual el autor o sus derechohabientes autorizan a un empresario el derecho de representación pública de una obra dramática, dramático-musical, coreográfica o pantomímica mediante remuneración, y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 67. Las partes podrán concertar el contrato por un plazo cierto o por un número determinado de representaciones.

En el primer caso, el contrato deberá determinar el plazo dentro del cual se llevará a efecto la misma. En el segundo, el contrato deberá determinar las modalidades de representaciones convenidas.

En ambas situaciones, el plazo no podrá ser superior a dos años contados desde que el autor puso al empresario en condiciones de realizar la representación.

Artículo 68. El contrato de representación en un teatro o local estable, será por el tiempo convenido.

El contrato de representación que no exprese la modalidad de ésta solo se entenderá celebrado para la representación en teatro, salas o recintos a los que el acceso solo se realice mediante el pago de un precio de entrada.

Artículo 69. El autor está obligado a entregar al empresario el texto de la obra, con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma impresa, y responderá frente al mismo de su autoría, de la originalidad de la obra y del ejercicio pacífico del derecho que le cede.

Artículo 70. El empresario está obligado a:

- 1) Llevar a cabo la representación pública de la obra en la modalidad o modalidades convenidas y dentro del plazo pactado o determinado en los Artículos anteriores.

- 2) Efectuar dicha representación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes y supresiones no consentidas por el autor y en condiciones técnicas y artísticas que no perjudiquen el derecho moral de éste.
- 3) Facilitar al autor o a sus representantes la inspección de la representación y la asistencia a la misma gratuitamente.
- 4) Satisfacer puntualmente al autor la remuneración convenida, que se determinará conforme a lo dispuesto en esta Ley, si bien, cuando la asistencia del público sea gratuita, la participación proporcional del autor se calculará sobre el total importe de los gastos realizados por el empresario para la celebración del acto o actos.
- 5) Presentar al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos y una declaración de los ingresos, entre lo que se comprenderá cualquier subvención o ayuda, y en defecto de ellos, los gastos.

El empresario tendrá el carácter de depositario de la remuneración correspondiente al autor y deberá tenerla diariamente a disposición de éste o de sus representantes.

Artículo 71. El contrato de representación se regirá por las siguientes disposiciones especiales:

- 1) Será de cargo del empresario la obtención de las copias necesarias para la representación de la obra, cuyas copias serán firmadas por el autor.
- 2) El autor y el empresario elegirán de mutuo acuerdo los intérpretes principales; si participaren orquestas, coros o grupos artísticos análogos, también lo hará el director del grupo.
- 3) La redacción de la publicidad de la representación o representaciones será convenida entre el autor y el empresario.

En caso de desacuerdo podrán las partes acudir al Juez Civil de Distrito o Local, dependiendo de la cuantía, para que resuelva lo que tenga a bien en forma sumarísima, según los usos profesionales y comerciales.

Artículo 72. El contrato podrá ser revocado por voluntad del autor en los siguientes casos:

- 1) Si el empresario al que se le hubiese concedido el derecho en exclusividad, una iniciadas las representaciones, las interrumpiere durante seis meses.

- 2) Si el empresario incumpliere sus obligaciones legales, siempre que, en cuanto a estas últimas, el empresario haya dejado transcurrir el plazo de quince días desde el recibo del requerimiento que al efecto le haya dirigido el autor persistiendo en el incumplimiento.

Artículo 73. Salvo estipulación expresa en contrario, el empresario podrá poner fin al contrato de representación cuando, tratándose de una obra de estreno y estipuladas varias representaciones, ésta hubiera sido rechazada claramente por el público en la primera.

Artículo 74. Las disposiciones establecidas en esta subsección se aplicarán en lo pertinente y en la medida en que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de los correspondientes contratos, el género de las obras objeto de los mismos y la modalidad de comunicación pública estipulada en ellos, a las concesiones exclusivas o no exclusivas de recitación pública de obras literarias, de ejecución pública de obras musicales, de exhibición pública de obras audiovisuales y de emisión, retransmisión y distribución por cable de cualquier clase de obras.

Subsección Cuarta

Contrato de Producción Audiovisual

Artículo 75. Se entiende por contrato de producción audiovisual aquel en virtud del cual los autores de una obra de ese género se obligan frente al productor a aportar a la creación de la obra sus respectivas contribuciones intelectuales mediante la cesión de los derechos de explotación que se estipulen.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores mencionados en el Artículo 11 de esta Ley, o sus derechohabientes, en su caso, han cedido en exclusividad al productor los derechos patrimoniales.

Esta presunción no alcanza a los autores y derechohabientes de las composiciones musicales incorporadas a la obra.

Artículo 76. Los autores, salvo estipulación en contrario, en el contrato de producción, podrán disponer de sus aportaciones a la

obra audiovisual para utilizarlas en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra.

Podrán en todo caso, disponer de esas aportaciones para otra obra audiovisual, una vez que haya transcurrido el plazo de quince años de haberlas puesto a disposición del productor o antes del mismo según lo hubieren convenido con éste, si ello no causare perjuicio al productor.

Cuando se trate de obras preexistentes utilizadas en la obra audiovisual, sus autores y los derechohabientes conservarán siempre los derechos de explotación en forma de edición gráfica y de representación teatral.

Artículo 77. Corresponderá en todo caso a los autores de la obra audiovisual y a sus derechohabientes, un derecho de remuneración, irrenunciable e intransmisible por actos entre vivos, por cada una de las modalidades de explotación que hayan cedido al productor en el contrato.

Artículo 78. El productor está obligado a presentar a los autores, como mínimo una vez cada seis meses, la relación de los ingresos procedentes de la explotación de la obra, asimismo, pondrá a disposición todos los documentos que permitan establecer la exactitud de las cuentas y, en particular, los contratos por los que haya cedido a terceros la totalidad o parte de los derechos de que disponga.

Artículo 79. Los autores responden de la originalidad de su aportación a la obra y del ejercicio por parte del productor de los derechos cedidos.

Artículo 80. Los derechos cedidos en el contrato de producción caducarán, si la obra audiovisual no se inicia en el plazo de dos años o en el estipulado por las partes, contados desde que el autor puso a disposición del productor o de su derechohabiente, en su caso, su aportación literaria musical.

Artículo 81. Cualquiera de los autores podrá resolver el contrato de producción por las causas de resolución de los contratos y en

especial cuando la actividad de la empresa del productor haya cesado por más de tres meses o en los casos de quiebra o declaración de insolvencia.

Artículo 82. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 81 de la presente Ley, en caso de cesión de la totalidad o parte de la empresa del productor o de sus cesionarios, o de liquidación de la misma por causa de quiebra u otro procedimiento concursal, se establecerá un lote distinto para cada obra audiovisual cuyos derechos de explotación sean objeto de cesión o subasta.

So pena de nulidad, se notificará de forma fehaciente a cada uno de los autores o de sus derechohabientes, así como a los coproductores de la obra, cualquier decisión que se haya tomado sobre la cesión o venta en pública subasta, con una antelación mínima de un mes al día en que una u otra hayan de efectuarse.

Cualquiera de los autores, o sus derechohabientes gozarán de un derecho de adquisición preferente sobre los derechos que se pretenden ceder o subastar, salvo si uno de los coproductores declara su voluntad de adquirirlo. A falta de acuerdo sobre el precio, éste será fijado por el Juez, oído el dictamen de peritos, adoptando el procedimiento sumarísimo para la resolución de este punto.

En todo caso, el adquirente quedará sujeto a las obligaciones del contrato de producción.

Artículo 83. Cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquel sobre la misma, incluso el de la indemnización que proceda.

Artículo 84 Se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida su versión definitiva de acuerdo con lo pactado en el contrato celebrado entre el productor y los autores y, en todo caso, entre el productor y el director-realizador.

Artículo 85. El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual.

TÍTULO II DERECHOS CONEXOS

CAPÍTULO I DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

Artículo 86. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que esa interpretación o ejecución sea para la radiodifusión; así como el derecho a la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones.

Artículo 87. Los artistas intérpretes o ejecutantes, en cuanto a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, tendrán el derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, el derecho sobre esas mismas fijaciones de distribución mediante la puesta a disposición al público, de ejemplares de las mismas; el derecho de alquiler, el derecho de comunicación al público, lo que incluye el derecho de autorizar la puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones ya sea por hilo o por medio inalámbrico, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Artículo 88. Sin perjuicio y con independencia de lo dispuesto en los Artículos 101 y 102 de la presente Ley el artista tendrá siempre un derecho irrenunciable e intransmisible por acto entre vivos y deberá obtener una remuneración equitativa de los que exploten directamente cualquiera de los derechos establecidos en el Artículo 87 de la presente Ley, sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas.

En caso de inobservancia del párrafo anterior, el artista intérprete o ejecutante, acudirá al Juez Civil correspondiente, para que resuelva lo que tenga a bien en forma sumarísima.

El artista podrá ejercer este derecho a través de una persona jurídica, a la que podrá transmitirlo a efectos de administración.

Artículo 89. Los artistas intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, tales como integrantes de un grupo musical, coro, ballet, etc., deberán designar en el contrato la persona que los represente para la cesión de sus derechos. Esta obligación no alcanza a los solistas ni directores de orquestas o de escena.

Artículo 90. Los derechos comprendidos en el presente Capítulo tendrán una duración de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de publicación de su presentación fijada, o, en su defecto, al de la interpretación o ejecución.

Artículo 91. El artista goza además del derecho al crédito de su nombre en sus interpretaciones o ejecuciones, y al de oponerse a toda deformación o mutilación de su actuación que lesione su prestigio o reputación. Estos derechos son irrenunciables e intransmisibles. A su fallecimiento, el ejercicio de estos derechos pasará a sus herederos por un plazo de 70 años desde la muerte del artista.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LOS PRODUCTOS DE FONOGRAMAS

Artículo 92. El productor tiene respecto de sus fonogramas los derechos exclusivos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución en forma de venta o alquiler, importación, adaptación, comunicación al público y el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

El productor de fonogramas tiene respecto de sus fonogramas los derechos exclusivos de autorizar, realizar o prohibir:

- 1) La reproducción directa o indirecta, total o parcial, de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación de cualquier forma que sea.
- 2) La distribución de sus fonogramas sea del original o de sus copias mediante venta u otra forma de transmisión de propiedad, incluyendo su distribución a través de señales o emisiones.
- 3) La comunicación pública de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico.

- 4) La importación de sus fonogramas o de sus copias o reproducciones.
- 5) La sincronización de sus fonogramas.
- 6) El alquiler y préstamo público de sus fonogramas, o la transmisión de posesión por cualquier forma permitida por la ley.
- 7) La puesta a disposición del público de los fonogramas, ya sea con hilo o sin hilo, de tal manera que el público pueda tener acceso a los fonogramas desde el lugar o al momento en que cada uno de sus miembros elija.
- 8) La adaptación o transformación de sus fonogramas.

Artículo 93. La duración de los derechos mencionados en el Artículo anterior será de setenta años, contados desde el primero de enero del siguiente año al de la publicación del fonograma o, en su defecto al de su fijación.

CAPÍTULO III DERECHOS DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Artículo 94. Los organismos de radiodifusión gozan de los derechos de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de radiodifusión, la reproducción de una fijación de sus emisiones, así como la comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder solo mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

Artículo 95. Los derechos conferidos en el Artículo anterior tendrán una duración de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la emisión.

TÍTULO III DE LA PROTECCIÓN DEL FOLKLORE

Artículo 96. Cuando la expresión del folklore sirva como base de una obra, deberá indicarse por el autor y por quien lo divulgue o lo difunda por cualquier medio o procedimiento esta circunstancia, así como el departamento o región de donde proviniera esa expresión y su título, si lo tuviere.

TÍTULO IV DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 97. Los titulares, originarios o derivados, de los derechos regulados en esta Ley, y los cesionarios en exclusividad de los derechos de autor y derechos conexos, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrán instar, en caso de violación de su derecho, el cese de la actividad ilícita y exigir la indemnización de los daños morales y patrimoniales causados, en los términos previstos en el presente Capítulo. También podrán solicitar la adopción de las medidas de protección provisional que se regulan en el mismo.

Artículo 98. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

- 1) La prohibición de realizar los actos en que consista.
- 2) La retirada de la circulación de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
- 3) El decomiso de los equipos utilizados y entregarlos a Asociaciones de autores y artistas.

Artículo 99. El derecho moral de autor se entenderá lesionado a los efectos indicados en el Artículo anterior, además de por las violaciones de algunas de sus facultades, por la infracción de cualquier derecho de explotación en exclusiva de las obras.

En ambos casos y sin perjuicio de la que proceda por daños patrimoniales, procederá la indemnización de los daños morales, aún no probada la existencia de perjuicio económico derivados de ellos. Para su valorización se atenderá a las circunstancias de la violación, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

Artículo 100. En la determinación de los daños patrimoniales se atenderá, en particular:

- 1) Al beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado de no mediar la violación.
- 2) A la remuneración que éste hubiera percibido de haber autorizado la explotación; y

- 3) En el caso de dolo de parte del infractor, a la totalidad de los beneficios que se hayan derivados para éste de la actividad infractora.

El perjudicado podrá optar como indemnización, por los perjuicios calculados conforme a cualesquiera de las reglas antes mencionadas. Su aplicación, cuando se hubiera optado por varias, será graduada equitativamente por el Juez.

Artículo 101. Cualquiera que sea la naturaleza de los daños resarcibles, se comprenderán en la indemnización las costas del procedimiento y los honorarios del Abogado que haya intervenido por el perjudicado, de conformidad con la tarifa de aranceles judiciales.

Artículo 102. En caso de violación de un derecho de autor o conexos, podrá solicitarse del Juez la adopción de las medidas de protección profesional que según las circunstancias, fuesen necesarias para la tutela urgente de los derechos, y en especial la prohibición o suspensión de la actividad infractora, el secuestro de los ejemplares reproducidos o utilizados en ella y el de sus instrumentos, así como los depósitos de los ingresos obtenidos por la misma.

Artículo 103. Las medidas reguladas en el Artículo anterior se adoptarán conforme a las siguientes reglas:

- 1) Serán competentes los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción haya tenido o tenga efecto la violación en que hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos a elección del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda sobre el fondo, será único Juez competente, para cuanto se relacione con las medidas adoptadas, el que conozca de aquellas.
Cuando las medidas se soliciten al tiempo de proponer la demanda sobre el fondo, o durante la sustanciación del pleito correspondiente, será competente el Juez o Tribunal que conozca de éste.
- 2) Dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito solicitando la adopción de las medidas, el Juez oír a las partes que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso al día siguiente de la finalización del mencionado plazo. No obstante

lo anterior, el Juez concederá las medidas solicitadas sin dar audiencia a la otra parte, cuando cualquier retraso pueda causar un daño irreparable al solicitante o exista un riesgo demostrable de que se destruyan o se hagan desaparecer las pruebas de la violación o los ingresos de la actividad infractora cuyo depósito se haya pedido.

- 3) Cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial, y si ésta fuera admitida, se llevará a efecto de inmediato, tomando las precauciones oportunas en los casos mencionados en el párrafo segundo de la regla anterior.
- 4) Antes de la resolución, o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza para responder de los perjuicios y costas que pueda ocasionar.
- 5) La resolución adoptará la forma de sentencia interlocutoria y será recurrible ante el superior respectivo, en el plazo de tres días después de notificado, sin que la interposición del recurso suspenda la ejecución de las medidas adoptadas.
- 6) El solicitante podrá reiterar la petición de las medidas, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la violación u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.
- 7) Cuando la circunstancia lo amerite, el Juez prescindirá de la previa notificación a la parte que será objeto de la medida judicial.

Artículo 104. Los efectos de las medidas acordadas caducarán de pleno derecho, cuando transcurrido el plazo de veinte días desde su adopción, el solicitante no inicie un procedimiento sobre el fondo.

Artículo 105. Si de las diligencias practicadas en las medidas hubiere resultado suficientemente acreditada “prima facie” la violación actual o potencial de los derechos, el solicitante, dentro del plazo previsto en el Artículo anterior, podrá pedir al Juez la tramitación del procedimiento de fondo de conformidad con el juicio civil sumario.

CAPÍTULO II

VIOLACIONES Y SANCIONES PENALES

Artículo 106. Será sancionado con prisión de uno a dos años el que violare los derechos de autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonograma u organismos de radiodifusión, en los casos siguientes:

- 1) Empleando sin el consentimiento escrito del titular del derecho, el título de una obra que la individualice efectivamente de otras del mismo género, cuando exista peligro de confusión entre ambas.
- 2) Realizando cualquier traducción, arreglo u otras transformaciones de la obra sin autorización escrita de su autor o del titular de los derechos.
- 3) Comunicando públicamente una obra o fonograma sin autorización por escrito del autor o del titular de los derechos por cualquier forma o procedimiento en forma original o modificada íntegra o parcialmente.
- 4) Distribuyendo ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, arrendamiento, importación o cualquier otra modalidad de distribución sin la autorización del titular del derecho.
- 5) Retransmitiendo o distribuyendo por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, una emisión de radiodifusión o televisión, sin autorización del titular de la emisión.
- 6) Cuando el cesionario o licenciatario autorizado por el titular del respectivo derecho, reproduzca o distribuya un mayor número de ejemplares que el permitido por el contrato, comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido.
- 7) Cuando una persona se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado algunos de los derechos de autor o conexos y con esa indebida atribución obtenga que la autoridad judicial o administrativa competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción; y
- 8) Cuando la persona autorizada para usar o explotar una o más obras, presente declaraciones falsas en cuanto a: certificación de ingreso, repertorio utilizado, identificación de los autores, autorización obtenida, número de ejemplares o de cualquier otra alteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos de autor o conexos.

Artículo 107. La sanción de dos a tres años de prisión, para quien:

- 1) Sin autorización por escrito del titular del derecho, reproduzca u obtenga copias de obras o fonogramas por cualquier medio

o procedimiento en forma original o modificada, íntegra o parcialmente.

- 2) Importe, almacene, distribuya, exporte, venda, ofrezca a la venta, tenga en su poder, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de obras o fonogramas.
- 3) Deposite en el Registro de Derecho de Autor una obra, interpretación o producción ajena como si fuera propia o de personas distintas del verdadero autor o titular del derecho; y
- 4) Sin autorización por escrito del titular, total o parcialmente, reproduzca, fije o copie por cualquier medio una obra, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión o televisión o importe almacene, tenga en depósito, distribuya, exporte venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.

Artículo 108. Las sanciones previstas en los Artículos anteriores, podrán aumentarse en una tercera parte, cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, interpretación, producción, no destinadas a la divulgación, o con atribución falsa de su paternidad, con deformación, mutilación u otras modificaciones que pongan en peligro el decoro o la reputación o una de las personas protegidas por la Ley.

Además de las sanciones indicadas, el Juez impondrá al responsable, una multa de tres mil córdobas a veinticinco mil córdobas de acuerdo a la gravedad de la infracción y si éste fuese comerciante ordenará la suspensión, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles.

Artículo 109. Las imprentas y demás empresas que se dediquen a actividades similares no podrán realizar trabajos de impresión, reproducción de etiquetas portadas y material necesario para difusión de obras y fonogramas sin la autorización del titular del derecho.

Artículo 110. La indemnización pecuniaria que el infractor deberá de pagarle al ofendido por la violación de los derechos de autor o conexos, será como mínimo igual al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren

sido incautadas. El monto de la indemnización, en todo caso, no será inferior al valor de 100 ejemplares.

Artículo 111. Los siguientes actos serán considerados ilícitos y se asimilarán a una infracción de los derechos de los autores y de los demás titulares del derecho de autor:

- 1) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio especialmente concebido o adaptada para volver inoperante todo dispositivo o medio encaminado a impedir o a limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad de los ejemplares realizados.
- 2) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio que permita o facilite la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en cualquier otra forma al público, por personas que no están habilitadas a recibirlo.
- 3) La supresión o modificación, sin estar habilitado para ello, de cualquier información relativa a la gestión de derechos que se presente en forma electrónica.
- 4) La distribución o la importación con fines de distribución, la radiodifusión, la comunicación al público, o la puesta a disposición del público sin estar habilitado para ello, de obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de radiodifusión, a sabiendas de que se han suprimido o modificado sin autorización informaciones relativas a la gestión de derechos que se presentan en forma electrónica.
- 5) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos", la información que permita identificar al autor, a la obra, al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución, al productor de fonogramas, al fonograma, al organismo de radiodifusión, a la emisión de radiodifusión, y a todo titular de derechos en virtud de esta Ley, o toda información relativa a las condiciones y modalidades de utilización de la obra y de otras producciones contempladas por la presente Ley, y de todo número o código que represente dicha información, cuando se hayan adjuntado cualesquiera de esos elementos de información al ejemplar de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, al ejemplar de un fonograma o a una emisión de radiodifusión fijada, o que figuren en relación

con la radiodifusión, la comunicación al público o la puesta a disposición del público de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión.

Artículo 112. La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años.

CAPÍTULO III DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN

Artículo 113. Son Sociedades de Gestión las organizaciones de base asociativa sin fines de lucro, legalmente constituidas al tenor de la Ley 147 "Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro", para dedicarse en nombre propio o ajeno, a la gestión de Derecho de Autor o Derechos Conexos de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios de sus titulares o concesionarios en exclusiva.

Estas sociedades gozarán de los derechos y deberán cumplir las obligaciones que se expresan en este Capítulo e inscribirse en el Libro de Control que lleva la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y en los términos previstos en él y a la vez quedarán sometidas al control y vigilancia de la citada oficina.

Artículo 114. El registro se concederá a quienes lo soliciten:

- 1) Si han sido constituidas conforme a la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
- 2) Si sus estatutos cumplen las disposiciones legales.
- 3) Si de los datos aportados y de la información practicada se desprende que la organización solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar una gestión sana, económica y eficaz.

Artículo 115. Para valorar la concurrencia en la solicitante de las condiciones establecidas en los apartados del Artículo anterior se tendrán particularmente en cuenta:

- 1) La amplitud del repertorio de la solicitante, que se apreciará atendiendo al número de titulares de derechos que se hayan comprometido, directa o indirectamente, a confiarle la gestión

de los mismos, en caso de que sea autorizada, y poniendo en relación esos titulares con los de las obras o prestaciones, según proceda efectivamente explotadas por los usuarios nacionales del correspondiente sector durante el último año.

- 2) El volumen de usuarios potenciales de ese repertorio.
- 3) La idoneidad de los medios personales, técnicos, financieros y materiales para el cumplimiento de sus fines y la posible efectividad de su gestión en el extranjero.
- 4) Si existiere otra sociedad autorizada para la gestión de los mismos derechos de autor o conexos que pretenda gestionar la solicitante, su nivel retroactivo, si hubiere efectos concurrenciales que distorsionen o limiten la protección de los derechos concernidos, o pongan en trance de disminuir injustificadamente su nivel retributivo, cuando estos derechos sean de autorizar o prohibir, deberá denegarse la autorización, salvo si en la petición se dieran circunstancias excepcionales que hicieren necesario otorgarla en consideración a dicha protección y a la vista del informe que, en todo caso, se recabará por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos de las sociedades ya autorizadas.

Artículo 116. Los estatutos de la solicitante deberán cumplir, además de las disposiciones que le sean de aplicación conforme a su naturaleza y forma, los siguientes requisitos, con derogación, en su caso, de tales disposiciones si fuesen incompatibles con ellos:

- 1) La denominación no podrá ser idéntica a la de otras sociedades de gestión ni semejante que pueda inducir a confusión.
- 2) En su objeto o fines, se especificarán los derechos administrados, no pudiendo incluir actividades distintas de la protección de los derechos de autor o conexos.
- 3) Mencionarán las clases de titulares y concesionarios exclusivos de derechos comprendidos en la gestión y las distintas categorías de aquellos a efectos de su participación en el gobierno y administración de la sociedad.
- 4) Expresarán las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de socio y las reglas generales a las que se ajustará el contrato de adhesión a la sociedad, que obligatoriamente habrán de suscribir los que le confíen la gestión de sus derechos, tengan o no dicha calidad. Sólo podrán ser socios los titulares

o concesionarios exclusivos de los derechos administrados. Las reglas del contrato de adhesión no serán aplicables a los contratos de representación que puedan celebrar las sociedades de gestión con otras organizaciones extranjeras análogas.

- 5) Harán constar los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como sus derechos y, en particular, el de votación, cuya regulación tendrá en cuenta criterios que limiten razonablemente el voto plural, si éste se hubiera establecido. En materia de sanciones de exclusión el régimen de voto será siempre igualitario.
- 6) Los órganos, rectores de la Sociedad como mínimo serán la Asamblea General, la Junta Directiva y el de Vigilancia.
- 7) Determinarán el destino del patrimonio o activo neto resultante de la liquidación de la sociedad en caso de disolución, cuyo patrimonio no podrá ser objeto de reparto entre los socios.

Artículo 117. El registro relacionado en el Artículo 114 de la presente Ley, se publicará en La Gaceta, Diario Oficial.

Anualmente, el Registro publicará en La Gaceta, Diario Oficial, una relación de las sociedades de gestión autorizadas.

Artículo 118. Una vez autorizadas, las sociedades de gestión estarán legitimadas para ejercitar los derechos objetos de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales sin aportar más título que sus propios estatutos, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que tales derechos les han sido confiados por sus respectivos titulares o concesionarios en exclusiva.

Artículo 119. Las sociedades de gestión están obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y derechos conexos que le sean encomendados directamente de acuerdo con su objeto o fines. Dicho encargo lo realizarán con sujeción a las reglas del contrato de adhesión establecidas en los estatutos y a las demás normas aplicables al efecto.

El contrato de adhesión a la sociedad podrá ser de mandato, de cesión o de concesión en exclusiva, según lo permita la naturaleza de los derechos que constituyan su objeto las disposiciones de la

presente Ley. En cualquier caso, no podrá imponer como obligatoria la administración de más derechos ni modalidades de explotación que los estrictamente necesarios para la gestión desarrollada por la sociedad y su duración no será superior a dos años, indefinidamente renovables.

Artículo 120. Las sociedades de gestión deberán establecer en sus estatutos las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio, y para evitar una injusta utilización preferencial de las obras o prestaciones comprendidas en este.

Artículo 121. En el ejercicio de su actividad, las sociedades de gestión se atenderán a los siguientes principios:

- 1) Su administración se ajustará a las reglas de una gestión sana y económica.
- 2) En sus operaciones de otorgamiento de licencias y fijación, percepción y reparto de remuneraciones procederán según reglas determinadas, que se aplicarán de forma igualitaria, y, en relación con los administrados extranjeros, con observancia de la norma de trato nacional establecida en los correspondientes tratados internacionales.

Artículo 122. De conformidad con los principios enunciados en el Artículo anterior, el reparto de las remuneraciones recaudadas se efectuará equitativamente entre los titulares y cesionarios en exclusiva de las obras o prestaciones utilizadas, con arreglo a un plan predeterminado en los estatutos que excluya la arbitrariedad. Con tal finalidad, las sociedades deberá llevar a cabo todo cuanto sea razonable para identificar los mencionados derechohabientes.

El plan de reparto atribuirá a cada obra, o a cada prestación o producción fonográfica una participación en las remuneraciones recaudadas proporcional al rendimiento de cada una de ellas derivado de su utilización. Si la determinación de ese rendimiento fuere imposible o gravemente dificultosa, o entrañase gastos excesivos, las sociedades podrán evaluarlo mediante una estimación que descansa en criterios controlables y adecuados.

Artículo 123. Las sociedades de gestión deberán realizar, en la medida en que les sea económicamente factible, actividades o

servicios asistenciales en beneficio de sus socios, así como promover otras de carácter cultural.

La afectación a dichos fines de una parte de las remuneraciones recaudadas requerirá la aprobación del órgano supremo de la sociedad y, en lo que respecta a las remuneraciones que correspondan a los repertorios administrados en virtud de contratos de representación concluidos con organizaciones de gestión extranjeras, se estará a lo pactado expresamente en los mismos.

Artículo 124. Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la sociedad confeccionará el balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable al tipo societario de que se trate, el balance y la documentación contable serán sometidos a verificación por expertos, personas físicas o jurídica, legalmente competentes, nombrados anualmente por el órgano supremo del gobierno de la sociedad. Los estatutos establecerán las normas con arreglo a las cuales la minoría podrá designar otro auditor. Dicha minoría deberá estar constituida por una agrupación de socios que representen al menos el diez por ciento del número total.

El balance, con nota de haber obtenido o no el informe favorable del auditor o auditores, en su caso, se pondrá a disposición de los socios en el domicilio legal de la sociedad, con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la reunión del órgano que ha de aprobarlo.

La sociedad estará obligada a entregar a cualquier miembro de ella que la solicite, tenga o no la cualidad de asociado, una copia del balance, de la memoria y del informe del auditor.

Artículo 125. Las sociedades de gestión están obligadas:

- 1) A contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión sin exclusividad de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración.
- 2) A establecer aranceles generales que determinen las remuneraciones exigibles y que deberán prever reducciones para las utilidades de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativas realizadas por personas jurídicas que carezcan de esa finalidad.

- 3) A negociar dichos aranceles con las asociaciones de usuarios que sean representativas del sector correspondiente y que lo soliciten.

Los aranceles serán comunicados al Registro, que ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

En cualquier caso de controversia sobre los aranceles establecidos por la sociedad de gestión, y mientras se resuelve la misma, los usuarios deberán pagar bajo reserva o depositar judicialmente la correspondiente remuneración calculada conforme a los mismos. Efectuado dicho pago o depósito, el solicitante de la concesión quedará autorizado para realizar la correspondiente utilización en los términos previstos en los aranceles.

Lo dispuesto en el presente Artículo no será de aplicación a la gestión de los derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, ni respecto de solicitudes de concesión de derechos de utilizations singulares de una o varias obras determinadas, cualquiera que sea su clase o género.

Artículo 126. Las sociedades de gestión podrán solicitar de los usuarios, y estos estarán obligados a facilitar, información para fijar y aplicar los aranceles, así como para realizar el reparto de las remuneraciones recaudadas.

Las sociedades de gestión están obligadas a salvaguardar el secreto de los negocios de sus usuarios.

Artículo 127. La Personalidad Jurídica podrá ser cancelada por la Asamblea Nacional de acuerdo a la Ley, si la Sociedad de Gestión incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este Capítulo y en la Ley General sobre Personas jurídicas sin Fines de Lucro. En los supuestos mencionados, deberá mediar un previo apercibimiento de ley, que fijará un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los hechos señalados. La revocación producirá efectos a los tres meses de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Artículo 128. Corresponde a la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, además de las facultades establecidas en este Capítulo, el control y vigilancia de sus actividades en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en este Capítulo.

A estos efectos la oficina podrá exigir de estas sociedades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz y sin voto a las reuniones de los órganos colectivos de la sociedad.

Con igual finalidad, las sociedades de gestión notificarán al Registro los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados generales, los aranceles que establezcan y los acuerdos que celebren con asociaciones de usuarios, y los contratos de representación que suscriban con organizaciones extranjeras de su clase.

Por lo que respecta a la aprobación de las modificaciones de estatutos, ésta se entenderá concedida por el Registro si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su presentación.

CAPÍTULO ÚNICO

OFICINA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 129. Se crea en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, específicamente en el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual, la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la que tendrá las siguientes funciones:

- 1) Promover la creación intelectual nacional.
- 2) Estimular, fomentar y difundir el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.
- 3) Fortalecer la protección a las manifestaciones culturales.
- 4) Tener a su cargo el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- 5) Actuar como árbitro en las controversias cuando así lo soliciten las partes involucradas.
- 6) Promover la cooperación internacional en la materia.

- 7) Velar y tener a su cargo el control de las sociedades de gestión colectiva.

Artículo 130. En cuanto al registro se aplicará lo siguiente:

- 1) En la inscripción se expresará, según los casos, el nombre del autor, del artista, del productor, la fecha de la divulgación o publicación y las demás indicaciones que establezca el Reglamento.
- 2) Se presume, salvo prueba en contrario que las personas indicadas en el registro son las titulares de los derechos que se les atribuye en tal carácter.
- 3) Pueden registrarse también, con las formalidades establecidas en la Ley y el Reglamento, los actos entre vivos que transfiere total o parcialmente los derechos reconocidos por esta Ley, o constituyan sobre ellos derechos de goce.
- 4) Los derechos por registro de inscripción de las obras, o producciones y las correspondientes a la cesión u otra formas de constitución de derechos y demás documentos a que se refiere, se establecerán en el Reglamento.
- 5) Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y de las producciones protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, depositarán en el Registro dos ejemplares o reproducciones de la obra, del producto o producción, en los términos y formas establecidos por el Reglamento.

El Registro de Derecho de Autor remitirá uno de los ejemplares a la Biblioteca Nacional. Esa remisión no afecta la obligación de depósito prevista en la Ley que dispone el envío de obras a la Biblioteca Nacional²⁵.

Artículo 131. La falta del registro o depósito no perjudica la adquisición y el ejercicio de los Derechos Autor y Derechos Conexos establecidos en esta Ley.

²⁵ Reformado por Art. 21, Ley 394 Ley de Depósito Legal de la República de Nicaragua, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 136, del 18 de Julio 2001.

“Art. 130 En cuanto al Registro se aplicará lo siguiente:

5) Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y las producciones protegidas por esta Ley o sus derechos habientes, depositarán en el Registro un ejemplar o reproducción de la obra, del producto o producción en los términos y formas establecidas por el Reglamento, para su archivo”.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 132. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán asimismo a las obras que hayan sido creadas, a las interpretaciones o ejecuciones que hayan tenido lugar o que hayan sido fijadas, a los fonogramas que hayan sido fijados y a las emisiones que hayan tenido lugar, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, a condición de que esas obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión no sean todavía del dominio público debido a la expiración de la duración de la protección a la que éstos estaban sometidos en la legislación precedente o en la legislación de su país de origen.

Los efectos legales de los actos y contratos concertados o estipulados antes de la entrada en vigor de la presente Ley permanecerán intactos.

Artículo 133. Los Artículos 725 y 726 del Código Civil quedan modificados en la forma siguiente:

“Artículo 725. La propiedad de los productos del trabajo y de la industria se rige por las leyes relativas a la propiedad común, a excepción de los casos para los que éste Código establezcan reglas especiales y sin perjuicio de lo dispuesto en leyes de este carácter.”

“Artículo 726. Todo autor, artista, productor fonográfico o inventor goza de la propiedad de su obra, prestación, fonograma o de su invención por el tiempo que determine la legislación especial y, en su defecto, este Código.”

Artículo 134. La aplicación de las penas establecidas en la presente Ley será efectiva a partir de seis meses posterior a su entrada en vigencia. En el caso de los vendedores de videos y cassettes, así como de las empresas de cables con menos de quinientos abonados y que operen en municipios fuera de Managua, la aplicación de las penas establecidas en esta Ley será efectiva a partir de un año de su entrada en vigencia.

Artículo 135. Los inventarios de videos de negocios de alquiler de los mismos, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, y que sean debidamente certificados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en el plazo de 60 días posteriores a la publicación de la Ley, serán inventariados y respetados para proteger estos negocios y darles oportunidad de renovar sus inventarios gradualmente.

Artículo 136. La presente Ley es de interés social y de orden público, y deroga los Artículos 729 al 867 del Código Civil y cualquier otra disposición que se oponga a lo establecido en la misma.

Artículo 137. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los seis días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve. **IVAN ESCOBAR FORNOS**, Presidente de la Asamblea Nacional. **VÍCTOR MANUEL TALAVERA HUETE**, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve. **ARNOLDO ALEMÁN LACAYO**, Presidente de la República de Nicaragua.

**PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA**

Decreto No. 22-2000

El Presidente de la República de Nicaragua.
En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política.

HA DICTADO

El siguiente:

**REGLAMENTO DE LA LEY DE DERECHOS DE
AUTOR Y CONEXOS**

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley No.312, publicada en las Gacetas Número 166 y 167 del 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 1999 respectivamente, la que en adelante se denominará la ley.

Artículo 2. Derechos de Autor. El goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos no están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad y, en consecuencia, el registro y depósito del Derecho de Autor y Derechos Conexos es meramente facultativo y declarativo, no constitutivo de derechos. Las obras no registradas, ni publicadas quedan protegidas desde su creación.

Artículo 3. Eficacia de la Inscripción. Las inscripciones efectuadas en la oficina surtirán eficacia desde la fecha de presentación de la solicitud. Tal fecha deberá constar en la inscripción. Los datos consignados en la Oficina se presumirán ciertos, mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo 4. Enmiendas. El Jefe de la Oficina, de oficio o a solicitud de parte, podrá enmendar los simples errores mecanográficos o numéricos cometidos al efectuar la inscripción.

Artículo 5. Excención de Responsabilidad. El propietario del soporte material de una obra literaria y artística no será responsable, en ningún caso, por el deterioro o destrucción de la obra o de su soporte material causado por el simple transcurso del tiempo o por defecto de su uso habitual.

Artículo 6. Convenio. La preservación, restauración o conservación de obras literarias y artísticas podrá realizarse mediante acuerdo entre el autor y el propietario del soporte material o del ejemplar único, según el caso.

Artículo 7. Beneficios. Al autor corresponde el derecho de percibir beneficios económicos provenientes de la utilización de la obra por cualquier medio, forma o proceso, tal como lo establece el Art. 23 de la Ley. Igualmente se le reconocen derechos morales los que son irrenunciables e inalienables.

Artículo 8. Integridad de la Obra. Finalizado el período de duración del derecho de autor conforme a la Ley, el Estado, a través del Registro de la Propiedad Intelectual, y las demás instituciones públicas encargadas de la defensa del patrimonio cultural, asumirán la salvaguarda de la paternidad del creador y de la integridad de su obra.

Artículo 9. Naturaleza Enunciativa. Las disposiciones establecidas en la Ley, en relación a la protección de la obra, en sus Arts. 13, 14 y 15 son de carácter meramente enunciativas, así como las modalidades de explotación indicadas en la sección segunda capítulo IV, título I de la misma.

Artículo 10. Interpretación Restrictiva. Los límites al derecho patrimonial a que se alude en la sección II, Capítulo V de la Ley, por su excepcionalidad, son de interpretación restrictiva.

Artículo 11. Invulnerabilidad de los Derechos de Autor. De conformidad con lo establecido en la Ley en el Título II, Derechos Conexos, la protección reconocida a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, no podrá vulnerar de modo alguno la protección

otorgada a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras interpretadas o ejecutadas, fijadas o emitidas, según los casos.

En caso de conflicto entre titulares de derechos de autor y titulares de derechos conexos, se adoptará siempre la solución que más favorezca al titular del derecho de autor.

Artículo 12. Cesión de Derechos Patrimoniales y Límites.

Salvo pacto en contrario, los efectos de la cesión de derechos patrimoniales, conforme el Art.46 de la Ley, se limitan a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato y al plazo y ámbito territorial pactados.

De no indicarse explícitamente y de modo concreto la modalidad de utilización objeto de la cesión, ésta quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la modalidad del mismo.

Artículo 13. Efectos de la Cesión. Los efectos de un contrato de cesión de derechos patrimoniales, por aplicación de los Arts.46 y 47 de la Ley, no alcanzan las modalidades de utilización inexistentes o desconocidas en la época de la transferencia, ni pueden comprometer al autor a no crear alguna obra en el futuro.

Artículo 14. Participación o Remuneración. En los actos, convenios y contratos por los que se transmitan derechos patrimoniales de autor se deberá hacer constar en forma clara y precisa la participación proporcional que corresponderá al autor o la remuneración fija y determinada, según el caso. Este derecho es irrenunciable. La misma regla regirá para todas las transmisiones de derechos posteriores celebradas sobre la misma obra.

Artículo 15. Inscripción de Cesión. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales, deberán inscribirse en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Artículo 16. Contenido del Derecho Patrimonial. A los efectos del Art.23 de la Ley, el derecho patrimonial comprende especialmente, el

de modificación, comunicación pública, reproducción y distribución. Cada uno de ellos, así como sus respectivas modalidades, son independientes entre sí.

Artículo 17. Exclusividad. Conforme los Arts.22 y 23 de la Ley, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra.

Artículo 18. Actos de Comunicación Pública. De conformidad al Art.23 de la Ley, son actos de comunicación pública, especialmente los siguientes:

- 1) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramáticos-musicales, literarias y artísticas de cualquier forma o procedimiento.
- 2) La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales: la emisión de una obra por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
- 3) La transmisión de cualquier obra al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
- 4) La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los numerales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o televisada.
- 5) La captación, en lugar accesible al público, mediante cualquier procedimiento idóneo, de la obra radiodifundida por radio o televisión.
- 6) La presentación y exposición públicas de obras de arte o de sus reproducciones.
- 7) El acceso público a bases de datos informáticos por medio de telecomunicación, cuando éstas se incorporan o constituyen obras protegidas.
- 8) La difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

Artículo 19. Reproducción. En base a lo establecido en el Art.23, numeral 1) de la Ley, la reproducción comprende todo acto dirigido a la fijación material de la obra por cualquier forma o procedimiento

o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, electrónico u otro similar.

Artículo 20. Divulgación. De conformidad con el Art.23, numerales 3) y 4) de la Ley, también se considera como divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones.

Artículo 21. Distribución. La distribución comprende el derecho del autor de autorizar o no la puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra, por medio de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler o cualquier modalidad de uso a título oneroso.

Artículo 22. Arrendamiento. En cuanto al derecho de alquiler, los autores de programas informáticos, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

Artículo 23. Edición Agotada. Para dar cumplimiento al Art.60, numeral 4) de la Ley, se presumirá que el editor carece de ejemplares de una obra para atender la demanda del público, cuando durante un lapso de seis meses no haya puesto a disposición de las librerías tales ejemplares.

Artículo 24. Traducciones. Cuando la traducción se haga a su vez sobre otra, el traductor deberá mencionar el nombre del autor y el idioma de la obra original, así como el nombre del primer traductor y el idioma en que se base.

Artículo 25. Descuento. Conforme el Art.64 de la Ley, el autor podrá adquirir la edición con un descuento del 50% sobre el precio del saldo.

Artículo 26. Otras Invulnerabilidades. Las interpretaciones y ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros y emisiones, están protegidas en los términos previstos por la Ley, independientemente de que se incorporen o no obras literarias o artísticas.

Artículo 27. Derechos Agotados. El agotamiento del derecho a que se refieren los Arts.86 y 87 de la Ley, se circunscribirá únicamente a las modalidades de explotación expresamente autorizadas por el artista o ejecutante.

Artículo 28. Participación. Corresponde a los artistas intérpretes o ejecutantes una participación en las cantidades que se generen por la ejecución pública de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas. Lo anterior se hará constar en los contratos correspondientes.

Artículo 29. Sociedades. Los autores y los titulares de derechos conexos y sus causahabientes podrán formar parte en una o varias sociedades de gestión, de acuerdo con la diversidad de la titularidad de los derechos patrimoniales que ostentan. Las sociedades no podrán restringir la libre contratación de sus socios.

Artículo 30. Registro de la Sociedad. Para efectos de registro, deberá precisarse con claridad su objeto o fines, de acuerdo a lo siguiente:

- a) por rama o categoría de creación de obras;
- b) por categoría de titulares de derechos conexos;
- c) por modalidad de explotación, cuando concurren en su titularidad varias categorías de creación de obras o de titulares de derechos conexos, y siempre que la naturaleza de los derechos encomendados a su gestión así lo justifique.

Artículo 31. Plazo del Registro. Presentada la solicitud, el Registro contará con cuarenta y cinco días para analizar la documentación exhibida y verificar que sea conforme a las disposiciones de la Ley y de este Reglamento.

Si en el estudio de los estatutos y demás documentos acompañados se advierte la omisión de requisitos subsanables, el Registro prevendrá por escrito al solicitante para que en el plazo de 30 días subsane las omisiones.

Artículo 32. Distribución y Deducción. Atendiendo a lo establecido en los Arts.121 y 122 de la Ley, se distribuirán las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción

del porcentaje necesario para cubrir los gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en los estatutos, que no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de lo recaudado anualmente, y de una erogación adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, que en ningún caso debe ser superior al diez por ciento (10%).

Artículo 33. Libros del Registro. El registro se llevará en libros, para cuyo efecto habrá en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos los siguientes:

- 1) Control de las sociedades de gestión.
- 2) Obras literarias.
- 3) Obras artísticas y musicales.
- 4) Obras audiovisuales.
- 5) Programas de cómputo.
- 6) Fonogramas.
- 7) Interpretaciones o ejecuciones artísticas.
- 8) Contratos y demás actos conexos.

Artículo 34. Formatos y Calidad de las Solicitudes. Para efectos de inscripción de obras, producciones artísticas, contratos y actos, se hará uso de los formatos de solicitud establecidos por el Registro, en donde serán adquiridos. Las solicitudes no contendrán tachaduras o enmendaduras, cada solicitud corresponderá a un sólo asunto.

Artículo 35. Caducidad. El Registro decretará de oficio la caducidad de los trámites y solicitudes en las que el interesado no haya realizado gestión o trámite alguno, en un lapso de tres meses.

Artículo 36. Depósito Legal. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley, se deberán depositar dos (2) ejemplares o reproducciones de las obras, productos o producciones protegidos, los cuales constituirán el sustento probatorio del registro que de ellos se efectúe.

En caso de obras inéditas y programas de cómputo, el depósito será de un solo ejemplar, el cual se conservará en el registro²⁶.

²⁶ Reformado por Art. 21, Ley 394 – Ley de Depósito Legal de la República de Nicaragua, publicada en la Gaceta, D.O. No. 136, del 18 de Julio 2001.

“Art. 36. Depósito Legal. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130 de la

Artículo 37. Publicidad. Las inscripciones realizadas en el registro son de carácter público, y en consecuencia pueden ser consultadas.

Tratándose de obras inéditas y de programas de cómputo solo se podrán realizar por sus respectivos autores, por los titulares o derechohabientes que acrediten tal condición.

Artículo 38. Formularios. Para efectuar la inscripción en el registro el interesado deberá presentar la solicitud pertinente mediante los formularios elaborados por la Oficina, en los cuales se consignará la siguiente información:

- 1) El nombre, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad ó comprobante de haberla solicitado, así como la fecha de fallecimiento del autor o del titular de los derechos. Tratándose de obras seudónimas o anónimas, deberá indicarse el nombre del divulgador, conforme el Art.7 de la Ley, hasta que se revele su identidad.
- 2) El título de la obra en su idioma original y de los anteriores si los hubiese tenido y cuando corresponda, de su traducción al español.
- 3) Indicar si la obra es inédita o ha sido publicada, si es originaria o derivada, si es individual, en colaboración o colectiva, así como cualquier otra información que facilite su identificación.
- 4) El país de origen de la obra, si se trata de una obra extranjera.
- 5) Año de creación o realización y de ser el caso, de su primera publicación.
- 6) Nombre, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad ó comprobante de haberla solicitado, y de ser el caso razón o denominación social del solicitante, si éste actúa en nombre del titular de los derechos o en virtud de un contrato de cesión, así como la prueba de la representación o de la transferencia de derechos, según corresponda.
- 7) Cuando se trate de un titular de derechos patrimoniales diferente del autor deberá mencionarse su nombre, razón o denominación social, según el caso, acompañado del documento mediante el cual adquirió tales derechos.

Ley, se deberá depositar un ejemplar o reproducción de las obras, productos o producciones protegidas, los cuales constituirán el sustento probatorio del registro que de ello se efectúe. En caso de obras inéditas y programas de computo, el depósito será de un solo ejemplar, el cual se conservará en el Registro”.

- 8) Lugar para notificaciones.
- 9) Petición del solicitante redactada en términos claros y precisos.
- 10) Acompañar el comprobante de pago de derechos.

Artículo 39. Información Adicional. En el caso que la solicitud de inscripción sea relativa a una obra literaria, además de la información general solicitada en el Artículo anterior, se requiere lo siguiente:

- 1) Nombre, razón o denominación social del editor y del impresor, así como su dirección.
- 2) Número de edición y tiraje.
- 3) Tamaño, número de páginas, edición rústica o de lujo y demás características que faciliten su identificación.

Artículo 40. Obra Musical. Si se tratase de una obra musical, con letra o sin ella, deberá mencionarse también, además de lo señalado en el Art.38 del presente Decreto, el género y ritmo, si ha sido grabada con fines de distribución comercial, los datos relativos al año y al productor fonográfico de, por lo menos una de esas fijaciones sonoras.

Si el propósito del solicitante es la inscripción de la letra por sí sola sin aportar la partitura, se tramitará la solicitud de registro en el formulario de inscripción de obras literarias.

Artículo 41. Obra Audiovisual y Radiofónica. En el caso de obras audiovisuales y radiofónicas, deberá también indicarse, además de los datos requeridos en el Art.38 del presente Reglamento, lo siguiente:

- 1) El nombre y demás datos de los coautores, de acuerdo con el Art.9 de la Ley, o de aquellos que se indiquen en el contrato de producción de la obra.
- 2) El nombre, razón o denominación social y demás datos relativos al productor.
- 3) El nombre de los artistas principales y otros elementos que configuren la ficha técnica.
- 4) El país de origen si se trata de obra extranjera, año de la realización, género, clasificación, metraje, duración y, en su caso, de la primera publicación.
- 5) Una breve descripción del argumento.

Artículo 42. Artes Plásticas.- Si se trata de obras de artes plásticas, tales como cuadros, esculturas, pinturas, dibujos grabados, obras fotográficas y las producciones por procedimiento análogo a la fotografía, además de lo establecido en el Art.38 del presente Decreto los datos descriptivos que faciliten su identificación, de tal manera que pueda diferenciarse de obras de su mismo género, y de encontrarse exhibida permanentemente, publicada o edificada, según corresponda, el lugar de su ubicación o los datos atinentes a la publicación.

Artículo 43. Otras Obras. Para la inscripción de obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, ingeniería, topografía, arquitectura o a las ciencias en general, deberá mencionarse, además de la información requerida en el Art.38 de este Reglamento, la clase de obra de que se trate y una descripción de las características identificativas de la misma.

Artículo 44. Obras Dramáticas y Similares. Para la inscripción de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficos, u otras de similar naturaleza, además de la información solicitada en el Art.38 de este Decreto, la clase de obra de que se trata; su duración, una breve referencia del argumento, de la música o de los movimientos, según el caso, y de estar fijada en un soporte material con miras a su distribución con fines comerciales, los datos relativos a la fijación y su ficha técnica.

Artículo 45. Programas de Cómputos. En la inscripción de un programa de cómputo se indicará, además de lo señalado en el Art.38 del presente Reglamento, lo siguiente:

- 1) El nombre, razón o denominación social y demás datos que identifiquen al productor.
- 2) La identificación de los autores, a menos que se trate de una obra anónima o colectiva.
- 3) Año de la creación o realización del programa, y en su caso, de la primera publicación y de las sucesivas versiones autorizadas por el titular, con las indicaciones que permitan identificarlas.
- 4) Una breve descripción de las herramientas técnicas utilizadas para su creación, de las funciones y tareas del programa, el tipo de equipos donde puede operar y cualquier característica que permita diferenciarlo de otro del mismo género.

Artículo 46. Interpretaciones o Ejecuciones. En la inscripción de las interpretaciones o ejecuciones artísticas, se indicará:

- 1) El nombre y demás datos que identifiquen a los intérpretes o ejecutantes, o de tratarse de orquestas, grupos musicales o sociales, el nombre de la agrupación y la identificación del director.
- 2) Las obras interpretadas o ejecutadas y el nombre de sus respectivos autores.
- 3) Año de realización de la interpretación o ejecución, y si ha sido fijada en un soporte sonoro o audiovisual, año y demás datos de la fijación o primera publicación, según corresponda.

Artículo 47. Producciones Fonográficas. Para la inscripción de producciones fonográficas se exigirán las indicaciones siguientes:

- 1) Título del fonograma en su idioma original y si hubiere, de su traducción al español.
- 2) Nombre, razón o denominación social, y demás datos que identifiquen al producto fonográfico.
- 3) Año de fijación y, cuando corresponda, de su primera publicación.
- 4) Título de las obras fijadas en el fonograma y de sus respectivos autores.
- 5) Nombre de los principales artistas intérpretes o ejecutantes.
- 6) Indicación si el fonograma es inédito o publicado.
- 7) Nombre y demás datos de identificación del solicitante, y cuando no lo sea el productor, la acreditación de su representación.

Artículo 48. Emisiones de Radiodifusión. Cuando se trate de emisiones de radiodifusión, se indicarán:

- 1) Los datos completos de identificación del organismo de radiodifusión.
- 2) Obras, programas o producciones en la emisión.
- 3) Lugar y fecha de la transmisión, y de estar fijada en un soporte sonoro o audiovisual con fines de distribución comercial, año de la primera publicación y los elementos que conforman su ficha técnica.

Artículo 49. Registro de Transferencias. Para el registro de actos y contratos que transfieran total o parcialmente los derechos

reconocidos en la Ley, que constituyan sobre ellos derechos de goce, o en los actos de partición o de sociedades relativas a aquellos derechos, se indicará, de acuerdo con la naturaleza y características del contrato o acto que se inscribe, lo siguiente:

- 1) Partes intervinientes.
- 2) Naturaleza del acto o contrato.
- 3) Objeto.
- 4) Derechos o modalidades de explotación que conforman la transferencia, constitución de derechos de goce o la partición, según el caso.
- 5) Indicación de si el contrato es oneroso o gratuito.
- 6) Determinación de la cuantía.
- 7) Plazo y duración del contrato.
- 8) Lugar y fecha de la firma.
- 9) Nombre y demás datos de identificación del solicitante de la inscripción. Cuando el contrato haya sido reconocido, autenticado ante notario.
- 10) Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.
- 11) Si el acto o contrato se otorga en idioma extranjero, deberá acompañarse su correspondiente traducción legalizada.

Artículo 50. Inscripción de Convenios. Para la inscripción de los convenios o contratos que celebren las sociedades con sus similares extranjeras, se acreditará una copia auténtica del respectivo documento. Si el contrato o convenio ha sido suscrito en el extranjero o idioma distinto del español, deberá acompañarse una traducción legalizada del mismo.

Artículo 51. Otras Inscripciones. Para la inscripción de decisiones judiciales, arbitrales o administrativas que impliquen declaración, constitución, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, transmisión de derechos, medidas cautelares o cualquier otra disposición o decisión que afecte una declaración o inscripción ante el registro, deberá acompañarse el documento debidamente certificado, legalizado o traducido, según corresponda, indicando la información siguiente:

- 1) Nombre y cargo de la autoridad que emitió la decisión.
- 2) Parte o partes intervinientes.
- 3) Clase de decisión.
- 4) Objeto y efectos del acto.
- 5) Lugar y fecha del pronunciamiento.

- 6) Nombre y demás datos que permitan la identificación del solicitante de la inscripción.
- 7) Cualquier otra información que el solicitante considere oportuna.

Artículo 52. Confidencialidad de los Programas de Cómputos.

En el depósito de los programas de cómputo, el registro mantendrá la confidencialidad de los mismos, sin embargo podrá requerir a los autores o titulares la información necesaria que permita el acceso a la secuencia de instrucciones del programa de informática contenida en el soporte magnético, en los casos de arbitraje o por mandato judicial.

Artículo 53. Confiabilidad y Garantía de la Inscripción.

Efectuada la inscripción, se dejará constancia de ella por orden numérico y cronológico en cuerpos o soportes de información de cualquier naturaleza, apropiados para recoger de modo indubitado y con adecuada garantía de seguridad jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el Registro.

Artículo 54. Simbología. El autor, titular o cesionario de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por la Ley, podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquellas.

Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (P), indicando el año de la publicación.

Los símbolos y referencias mencionadas deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.

Artículo 55. Derecho por Inscripción y Servicios: La inscripción y servicios estarán sujetos a los siguientes derechos:

1.- Servicios de información	\$CA 10.00
2.- Registros de obras literarias	\$CA 40.00
3.- Registro de fonogramas	\$CA 70.00

4.- Registro de programas de cómputo	\$CA100.00
5.- Registro de contrato y actos modificativos	\$CA 20.00
6.- Formato de solicitud	\$CA 2.00
7.- Registro de obra audiovisual o radiofónica	\$CA 70.00
8.- Registro de Fotografías	\$CA 20.00
9.- Otras obras artísticas o científicas	\$CA 20.00

El monto determinado en Pesos Centroamericanos, se cancelará en moneda nacional aplicando como factor la tasa de cambio que el Banco Central de Nicaragua fije a la fecha de la cancelación, debiendo enterarse a través de boletas fiscales que ingresarán a la caja única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dichos montos serán reintegrados mensualmente al Registro de la Propiedad Intelectual para utilizarse en la infraestructura, mobiliarios, equipos, útiles de oficina, capacitación y divulgación.

Artículo 56. Manual de Procedimientos. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a través de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos elaborará el manual de procedimientos respectivos en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de la vigencia del presente Decreto.

Artículo 57. Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en LA GACETA, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el tres de Marzo del año dos mil.- **Arnoldo Alemán Lacayo**, Presidente de la República de Nicaragua.- **Norman Caldera Cardenal**, Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

**LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

CONSIDERANDO

I

Que la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 125 a 128 promueve y protege la propiedad intelectual; y establece la obligación del Estado de Nicaragua de apoyar la cultura nacional en todas sus expresiones sean de carácter colectivo o individual; además, el Estado de Nicaragua debe facilitar los medios necesarios para crear, difundir las obras y proteger el Derecho de Autor.

II

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las facultades establecidas en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política, aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto A.N. No.4371, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 14 de octubre de 2005.

III

Que el Presidente de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto Ejecutivo No. 77-2005, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 20 de noviembre de 2005, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 150 de la Constitución Política.

IV

Que la Asamblea Nacional aprobó mediante Decreto A. N No. 3288, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 92 del 20 de mayo de 2002, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), sobre Derecho de Autor (WCT) 1996 y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), conocidos como Tratados de Internet, en vigencia desde el 6 de marzo del año 2003.

V

Que es necesario en los aspectos de Propiedad Intelectual garantizar la implementación de aquellos compromisos inmediatos establecidos en el Capítulo Quince, Derechos de Propiedad Intelectual derivados del CAFTA-DR y de los Tratados WCT, WPPT.

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Arto. 1 Se reforman los numerales 2.5, 2.12, 2.27, 2.28 y 2.29 del artículo 2, los que se leerán así:

"2.5. Comunicación al Público: Es todo acto incluyendo la transmisión o radiodifusión por el cual una pluralidad de personas puedan tener acceso a la obra, interpretación, fonograma, o emisión de radiodifusión, incluyendo la puesta a disposición del público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. No se considerará pública la comunicación cuando se lleve a efecto dentro del círculo familiar ordinario de una persona natural y sin fines lucrativos".

"2.12. Fonograma: Es toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación de sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Los derechos de un fonograma no se verán afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual".

"2.27. Publicación: Es todo acto por el que, una obra o un fonograma cuyos ejemplares se han puesto a disposición del público, con el consentimiento del autor cuando se trata de una obra, con el consentimiento del productor en el caso de un fonograma, para su venta, alquiler, préstamo público o para cualquier otra transferencia de propiedad o de posesión, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales del público. En el caso de una interpretación o ejecución significa la oferta al público de copias de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente".

"2.28. Radiodifusión: Es la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o sonidos e imágenes, o de las representaciones de estos, para su recepción por el público, incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento. Las transmisiones en las que el tiempo y lugar de la recepción puedan ser individualmente escogidas por el público no serán consideradas radiodifusión".

"2.29. Reproducción: Es hacer una o más copias de una obra, ejecución, fonograma o radiodifusión de manera directa o indirecta por cualquier medio o forma incluyendo la impresión, fotocopia, grabación o el almacenamiento permanente o temporal en forma electrónica".

Arto. 2 Se reforma el artículo 23, el que se leerá así:

"Artículo 23. El derecho patrimonial es alienable, temporal y, sin perjuicio de otras modalidades, comprende las siguientes:

- 1)** Derecho de reproducción de la obra total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte.
- 2)** Derecho de transformación.
- 3)** Derecho de traducción.
- 4)** Derecho de adaptación.
- 5)** Derecho de comunicación al público, como:

- a) La declamación.
- b) La representación, ejecución, en forma directa o indirecta.
- c) La proyección y exhibición o exposición pública.
- d) La transmisión digital o analógica, o por cualquier medio, por hilo o sin hilo, de sonidos, imágenes, palabras, a distancia, lo que comprende la captación en sitio público de obras y producciones protegidas, comprendida la puesta a disposición del público de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que ellos elijan.
- e) El acceso público a base de datos informáticos por medio de la telecomunicación.
- f) Radiodifusión.

6) Derecho de distribución al público.

7) Derecho de alquiler.

8) Derecho de importación”.

Arto. 3 Se reforma el numeral 1 del artículo 39, el que se leerá así:

“1. Necesaria para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se diseñó el programa; o”

Arto 4. Se reforma el artículo 40, el que se leerá así:

“Artículo 40. Porciones de artículos sobre temas de actualidad económica, política o religiosa difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otro de la misma clase sin autorización del autor, salvo que la reproducción, distribución o comunicación se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente y el nombre del autor, si son parte de las obras o artículos”.

Arto. 5 Se reforma el artículo 43, el que se leerá así:

“Artículo 43. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, sin autorización del autor, por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía

y las grabaciones audiovisuales para uso personal. En cuanto a las obras de arquitectura, el artículo anterior sólo se aplicará a su aspecto exterior”.

Arto. 6 Se reforma el primer párrafo del artículo 52, el que se leerá así:

“Artículo 52. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49, cuando se trate de una obra realizada por un autor por cuenta de una persona natural o jurídica (en adelante denominada “empleador”) en el marco de un contrato de trabajo y de su empleo, salvo disposiciones en contrario del contrato, el primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor, pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de la creación de la obra. El empleador podrá demandar por infracciones a los derechos transferidos”.

Arto. 7 Adiciónese el artículo 54 bis, el que se leerá así:

“Artículo 54 bis. Los artículos 55 a 85 de la presente Ley aplicarán únicamente a los contrarios firmados en Nicaragua, a menos que las Partes estipules lo contrario”.

Arto. 8 Se reforma el artículo 86, el que se leerá así:

“Artículo 86. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que esa interpretación o ejecución ya haya sido radiodifundida; así como el derecho a la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones”.

Arto. 9 Se reforma el artículo 87, el que se leerá así:

“Artículo 87. Los artistas intérpretes o ejecutantes, en cuanto a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, tendrán el derecho exclusivo de autorizar, llevar a cabo o prohibir:

1. La reproducción directa o indirecta, total o parcial, temporal o permanente, incluyendo el almacenamiento temporal de forma electrónica de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación en cualquier forma que sea.

2. La distribución de esas mismas interpretaciones o ejecuciones fijadas, ya sea en originales o copias, mediante venta u otra forma de transmisión de propiedad, incluyendo su distribución a través de señales o radiodifusión; o el alquiler.

3. La comunicación al público, de las interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico, incluyendo por radiodifusión.

4. El alquiler y préstamo público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas, o la transmisión de posesión en cualquier forma permitida por la Ley.

5. La puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones fijadas ya sea alámbrico o inalámbrico, de tal manera que el público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y al momento en que cada uno de sus miembros elija.

6. La adaptación o transformación de las interpretaciones o ejecuciones fijadas”.

Arto. 10 Se reforma el artículo 90, el que se leerá así:

“Artículo 90. Los derechos comprendidos en el presente Capítulo tendrán una duración de setenta años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la primera publicación de la interpretación o ejecución fijada, o, en su defecto, al de su creación”.

Arto. 11 Se reforma el artículo 92, el que se leerá así:

“Artículo 92. El productor tiene respecto de sus fonogramas los derechos exclusivos de autorizar, llevar a cabo o prohibir:

1. La reproducción directa o indirecta, total o parcial, temporal o permanente, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación de cualquier forma que sea.
2. La distribución de sus fonogramas sea del original o de sus copias mediante venta u otra forma de transmisión de propiedad, incluyendo su distribución a través de señales o radiodifusión; o el alquiler.
3. La comunicación al público de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico, incluyendo por radiodifusión.
4. La importación de sus fonogramas o de sus copias o reproducciones.
5. La sincronización de sus fonogramas.
6. El alquiler y préstamo público de sus fonogramas, o la transmisión de posesión por cualquier forma permitida por la Ley.
7. La puesta a disposición del público de los fonogramas, ya sea alámbrico o inalámbrico, de tal manera que el público pueda tener acceso a los fonogramas desde el lugar o al momento en que cada uno de sus miembros elija.
8. La adaptación o transformación de sus fonogramas”.

Arto. 12 Se reforma el artículo 93, el que se leerá así:

“Artículo 93. La duración de los derechos mencionados en el artículo anterior será de setenta años, contados desde el primero de enero del siguiente año al de la primera publicación del fonograma o, en su defecto al de su fijación o creación. Los derechos patrimoniales se transmiten por cualquiera de los modos admitidos en la legislación”.

Arto. 13 Adiciónese el artículo 97 bis 1, el que se leerá así:

"Artículo 97 bis 1. Se presumirá, en ausencia de prueba en contrario que la persona cuyo nombre es indicado como el autor, productor, intérprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma.

Se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el Derecho de Autor o Derechos Conexos subsisten en dicha materia".

Arto. 14 Adiciónese el artículo 97 bis 2, el que se leerá así:

"Artículo 97 bis 2. Las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las sentencias, decisiones o resoluciones de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Dichas sentencias, decisiones o resoluciones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera".

Arto. 15 Se reforma el artículo 98, el que se leerá así:

"Artículo 98. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

1. La prohibición de realizar los actos en que consista, incluyendo entre otros, prohibir la entrada a los canales de comercio de los bienes ilícitos importados, inmediatamente después de la liberación aduanera de dichos bienes o para prevenir su exportación.
2. La retirada de la circulación de los ejemplares ilícitos y su destrucción, o con la autorización del titular del derecho, la donación con fines de caridad.
3. El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la producción o creación o comercialización de los bienes ilícitos, excepto en casos de donación con fines de caridad y con autorización del titular del derecho. La destrucción o donación

con fines de caridad de los materiales y equipos se hará sin compensación alguna. Las autoridades judiciales, al considerar las solicitudes de destrucción de los equipos, podrán tomar en cuenta, entre otros, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado:

4. El decomiso de la evidencia documental relevante a la infracción.

La autoridad judicial civil, para mejor proveer, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho”

Arto. 16 Se reforma el artículo 100, el que se leerá así:

“Artículo 100. Los infractores de Derecho de Autor o Derechos Conexos estarán obligados a indemnizar al titular del derecho por daños patrimoniales de la siguiente manera:

1. Indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
2. Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el numeral (1) de este artículo.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, los jueces deberán considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

En los casos en que el juez nombre expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de

los derechos establecidos en la presente Ley y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, tales costos estarán estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurrir a dichos procedimientos”.

Arto. 17 Se reforma el artículo 101, el que se leerá así:

“Artículo 101. Cualquiera que sea la naturaleza de los daños resarcibles, el juez podrá ordenar, salvo en circunstancias excepcionales, que las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados que hayan intervenido por el perjudicado sean pagadas por el infractor”.

Arto. 18 Adiciónese el numeral 8 al artículo 103, el que se leerá así:

“8. El Juez estará facultado para exigir al demandante que presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción”.

Arto. 19 Adiciónese el numeral 5 al artículo 107, el que se leerá así:

“5. Infrinja dolosamente el Derecho de Autor o Derechos Conexos con el fin de obtener una ventaja para si y/o a favor de tercero, o ganancia económica privada, así como quien infrinja dolosamente aunque no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a uno de poco valor”.

Arto. 20 Se reforma el segundo párrafo del artículo 108, el que se leerá así:

“Además de las sanciones indicadas en el artículo 107, el Juez impondrá al responsable, una multa de tres mil córdobas a veinticinco mil córdobas de acuerdo a la gravedad de la infracción y si éste fuese

comerciante ordenará la suspensión de las actividades comerciales, mientras dure la sanción, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles”.

Arto. 21 Adiciónese los artículos 108 bis 1 y 108 bis 2, los que se leerán así:

“Artículo 108 bis 1. La autoridad judicial penal estará facultada para ordenar el decomiso de:

- 1) Las mercancías objeto de la presunta infracción.
- 2) Cualquier material o implementos utilizados para la comisión del delito.
- 3) Los activos relacionados con la actividad infractora.
- 4) Toda evidencia relativa al delito, incluyendo la evidencia documental.

Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden”.

“Artículo 108 bis 2. En cualquier acción penal bajo esta Ley, las autoridades judiciales penales también estarán facultadas para ordenar:

- 1) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.
- 2) El decomiso y destrucción de toda mercancía objeto de la infracción, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías.
- 3) El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía objeto de la infracción”.

Arto. 22 Se reforma el artículo 111, el que se leerá así:

“Artículo 111. Incurrirá en el delito de evasión de medidas tecnológicas y será sancionado con prisión de dos a tres años y multa no superior a veinticinco mil córdobas (C\$ 25,000.00) la persona que:

1) Evada sin autorización del titular del derecho, cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido u otra materia objeto de protección.

2) Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios al público, los cuales:

2.1 Sean promocionados, publicitados, o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva.

2.2 Únicamente tienen un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente al de evadir una medida tecnológica efectiva.

2.3 Son diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de cualquier medida tecnológica efectiva.

La parte perjudicada tendrá el derecho a las acciones penales establecidas en el Título IV de la presente Ley. Sin embargo, los ilícitos referidos en este Artículo constituyen un delito separado e independiente del que pudiera ocurrir por violación al derecho de autor y derechos conexos, contenidos en la presente Ley.

Lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo no aplicará a una actividad si la misma está relacionada con las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas protegidos; y que la actividad esté comprendida en una o más de las siguientes categorías:

a) Actividad no infractora de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.

b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o fonograma y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información.

c) La inclusión de un componente o parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido impropio en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido bajo las medidas que implementen el numeral 2 del presente artículo.

d) Las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.

Las actividades descritas en el numeral 2 no serán considerados ilícitos si:

i) Están relacionadas con una medida tecnológica efectiva que proteja cualquiera de los derechos de autor o conexos exclusivos en una obra, interpretación o ejecución, o fonograma;

ii) La acción está comprendida en la siguiente categoría: Actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.

Lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo no aplicará a las actividades comprendidas en las categorías arriba descritas; o a una más de las siguientes categorías:

Primero: Acceso por parte de una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisición.

Segundo: Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona natural de manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.

Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo no aplicarán a las actividades relacionadas con una o más de las siguientes actividades: actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la Ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

A los fines del presente artículo medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.

Las disposiciones penales en este artículo no aplicarán a las actividades propias de las bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comercial sin fines de lucro”.

Arto. 23 Adiciónese el artículo 111 bis, el que se leerá así:

“Artículo 111 bis. Incurrirá en el delito de violación de la protección de la información sobre gestión de derechos, y será sancionado con prisión de dos a tres años y multa no superior a veinticinco mil córdobas (C\$ 25,000.00), la persona que:

1. A sabiendas suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos.

2. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad.

3. Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad.

La parte perjudicada tendrá derecho a las acciones penales establecidas en el Título IV de la presente Ley, sin embargo, los ilícitos referidos en este artículo constituyen un delito separado e independiente del que pudiera ocurrir por violación al derecho de autor y derechos conexos, contenidos en la presente Ley. Así mismo, quedarán exceptuadas de la aplicación de este artículo las actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la Ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

Para fines del presente artículo Información sobre la Gestión de Derechos significa:

1) Información que identifica a la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, al autor de la obra, al artista, intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución o al productor del fonograma, o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

2) Información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

3) Cualquier número o código que represente dicha información.

Cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.

Las disposiciones penales en este artículo no aplicarán a las actividades propias de las bibliotecas, archivos, instituciones educativas, u organismos públicos de radiodifusión no comercial sin fines de lucro”.

Arto. 24 Se reforma el artículo 112, el que se leerá así:

Artículo 112: Los delitos previstos en esta Ley son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años contados desde que se cometió por última vez el delito”.

Arto. 25 Adiciónese dos párrafos al artículo 118, los que se leerán así:

“Los documentos que emite la Sociedad de Gestión para efectos de cobro por la utilización de obras artísticas y/o musicales, literarias, científicas; efectuado a personas naturales o jurídicas constituye título ejecutivo y se sustentarán por la vía ejecutiva. Caben únicamente las excepciones de pago y la no utilización de obras protegidas.

La Sociedad de Gestión está facultada para solicitar la autoridad judicial competente, la suspensión de comunicación pública o presentaciones de obras artísticas y/o musicales protegidas conforme esta Ley mientras esté pendiente el pago de aranceles correspondientes”.

Arto. 26 Disposición Transitoria. Las acciones que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Arto. 27 Derogación. Deróguese el artículo 110 y refórmese el artículo 50, el que se leerá así:

Si en la cesión en exclusividad se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato ante la autoridad judicial para que se fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercerse dentro de los cinco años siguientes al de celebración del contrato. Dado el carácter patrimonial de este derecho, lo dispuesto en este artículo es negociable y aún renunciable por las partes. Este artículo es aplicable a los contratos celebrados en Nicaragua, salvo pacto en contrario.

Arto. 28 Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil seis.

EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, Presidente de la Asamblea Nacional.

JOSÉ SANTOS FIGUEROA AGUILAR, Secretario en Funciones Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República, Publíquese y Ejecútese. Managua, veintidós de marzo del año dos mil seis. **ENRIQUE BOLAÑOS GEYER**, Presidente de la República de Nicaragua.

CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS

Acta de París de 24 julio de 1971

(Se han incorporado títulos a los Artículos a fin de facilitar su identificación. El texto original del Convenio no contiene tales títulos).

Los países de la Unión, animados por el mutuo deseo de proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas,

Reconociendo la importancia de los trabajos de la Conferencia de Revisión celebrada en Estocolmo en 1967,

Han resuelto revisar el Acta adoptada por la Conferencia de Estocolmo, manteniendo sin modificación los Artículos 1 a 20 y 22 a 26 de esa Acta.

En consecuencia, los Plenipotenciarios que suscriben, luego de haber sido reconocidos y aceptados en debida forma los plenos poderes presentados, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Constitución de una unión. Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Artículo 2. Obras protegidas. 1. «Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias

- 1) Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y

las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

- 2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.
- 3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.
- 5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.
- 6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.
- 7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección

especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

- 8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Artículo 2 bis. Posibilidad de limitar la protección de algunas obras. 1. Determinados discursos; 2. Algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones; 3. Derecho de reunir en colección estas obras.

- 1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en el Artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales.
- 2) Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el Artículo 11bis, 1) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue.
- 3) Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes.

Artículo 3. Criterios para la protección. 1. Nacionalidad del autor; lugar de publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras «publicadas»; 4. Obras «publicadas simultáneamente»

- 1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:
 - a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no;
 - b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.
- 2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.

- 3) Se entiende por «obras publicadas», las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.
- 4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.

Artículo 4. Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas

Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurren las condiciones previstas en el Artículo 3:

- a) los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión;
- b) los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.

Artículo 5. Derechos garantizados. 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de origen; 4. «País de origen»

- 1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.
- 2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales

- acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.
- 3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.
- 4) Se considera país de origen :
- a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto;
 - b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país;
 - c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo,
 - i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y
 - ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

Artículo 6. Posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión. 1. En el país en que la obra se publicó por primera vez y en los demás países; 2. No retroactividad; 3. Notificación

- 1) Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación,

nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país.

- 2) Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra publicada en un país de la Unión antes del establecimiento de aquella restricción.
- 3) Los países de la Unión que, en virtud de este Artículo, restrinjan la protección de los derechos de los autores, lo notificarán al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión «Director General») mediante una declaración escrita en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión.

Artículo 6bis. Derechos morales. 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales

- 1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
- 2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del

párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

- 3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este Artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Artículo 7. Vigencia de la protección. 1. En general; 2. Respecto de las obras cinematográficas; 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas; 4. Respecto de las obras fotográficas y las artes aplicadas; 5. Fecha de partida para calcular los plazos; 6. Plazos superiores; 7. Plazos menos extensos; 8. Legislación aplicable; «cotejo» de plazos

- 1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.
- 2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.
- 3) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.

- 5) El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.
- 6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.
- 7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.
- 8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

Artículo 7 bis. Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración. Las disposiciones del Artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el periodo consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores.

Artículo 8. Derecho de traducción. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original.

Artículo 9. Derecho de reproducción. 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

- 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
- 3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Artículo 10. Libre utilización de obras en algunos casos. 1. Citas; 2. Ilustración de la enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor

- 1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de Artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.
- 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.
- 3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Artículo 10 bis. Otras posibilidades de libre utilización de obras. 1. De algunos Artículos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad

- 1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los Artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado

expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.

- 2) Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.

Artículo 11. Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales.

1. Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una representación o ejecución; 2. En lo que se refiere a las traducciones.

- 1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar :

1º la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;

2º la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

- 2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11 bis. Derechos de radiodifusión y derechos conexos.

1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar :

- 1° la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;
 - 2° toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;
 - 3° la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.
- 2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
- 3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1) del presente Artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

Artículo 11 ter. Algunos derechos correspondientes a las obras literarias. 1. Derecho de recitación pública y de transmisión pública de una recitación; 2. En lo que concierne a las traducciones

- 1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar :
- 1° la recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento;
 - 2° la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.

- 2) Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras.

Artículo 12. Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación . Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

Artículo 13. Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la letra respectiva. Licencias obligatorias; 2. Medidas transitorias; 3. Decomiso de la importación de ejemplares hechos sin la autorización del autor.

- 1) Cada país de la Unión, podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.
- 2) Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión conforme al Artículo 13.3) de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical, hasta la expiración de un período de dos años a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente Acta.
- 3) Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1) y 2) del presente Artículo e importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país.

Artículo 14. Derechos cinematográficos y derechos conexos.

1. Adaptación y reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución pública y transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas; 2. Adaptación de realizaciones cinematográficas; 3. Falta de licencias obligatorias.

1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar :

1º la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas;

2º la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.

2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.

3) Las disposiciones del Artículo 13.1) no son aplicables.

Artículo 14 bis. Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas.

1. Asimilación a las obras «originales»; 2. Titulares del derecho de autor; limitación de algunos derechos de determinados autores de contribuciones; 3. Algunos otros autores de contribuciones

1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el Artículo anterior.

2)

a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.

b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución,

representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica.

- c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.
 - d) Por «estipulación en contrario o particular» se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.
- 3) A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2) b) citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

Artículo 14 ter. «Droit de suite» sobre las obras de arte y los manuscritos. 1. Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. Procedimiento

- 1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor –o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos– gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor.

- 2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada.
- 3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir.

Artículo 15. Derecho de hacer valer los derechos protegidos.

1. Cuando se ha indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo no deje la menor duda sobre la identidad del autor; 2. En el caso de obras cinematográficas; 3. Para las obras anónimas y seudónimas; 4. Para algunas obras no publicadas de autor desconocido
- 1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
- 2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.
- 3) Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.
- 4)
 - a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.
 - b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán

al Director General mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director General comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.

Artículo 16. Ejemplares falsificados. 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. Legislación aplicable

- 1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.
- 2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.
- 3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.

Artículo 17. Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras. Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

Artículo 18. Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del Convenio. 1. Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado aún en el país de origen; 2. No podrán protegerse cuando la protección haya expirado en el país en que se reclame; 3. Aplicación de estos principios; 4. Casos especiales

- 1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.
- 2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.
- 3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes

o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.

- 4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7 o por renuncia a reservas.

Artículo 19. Protección más amplia que la derivada del Convenio. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.

Artículo 20. Arreglos particulares entre países de la Unión. Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables.

Artículo 21. Disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo. 1. Referencia al Anexo; 2. El Anexo es parte del Acta

- 1) En el Anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo.

Con reserva de las disposiciones del Artículo 28.1) b), el Anexo forma parte integrante de la presente Acta.

Artículo 22. Asamblea: 1. Constitución y composición; 2. Labores, 3. Quórum, votación, observadores; 4. Convocatoria; 5. Reglamento

1.

- a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los Artículos 22 a 26.
- b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

- c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

2.

a) La Asamblea :

- i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;
- ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización »), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 22 a 26;
- iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;
- iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;
- v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;
- vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;
- vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;
- viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;
- ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
- x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 22 a 26;
- xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;

xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;

xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.

- b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3.

- a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.
- b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.
- c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, esta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.
- d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
- e) La abstención no se considerará como un voto.
- f) Cada delegado no podrá representar mas que a un solo país y no podrá votar mas que en nombre de él.
- g) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

4.

- a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.
- b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.
- a) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 23. Comité Ejecutivo. 1. Constitución; 2. Composición; 3. Número de miembros; 4. Distribución geográfica; arreglos particulares; 5. Permanencia en funciones, límites de reelegibilidad, modalidades de la elección; 6. Labores; 7. Convocatoria; 8. Quórum, votación; 9. Observadores; 10. Reglamento

- 1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.
 - a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25.7)
 - b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
 - c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.
- 2) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.
- 3) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares que pudieran ser establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

4)

- a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.
- b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.
- c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

5)

- a) El Comité Ejecutivo :
 - i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;
 - ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General;
 - iii) [suprimido]
 - iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;
 - v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;
 - vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.
- b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

6)

- a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.
- b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

- 7)
 - a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.
 - b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.
 - c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.
 - d) La abstención no se considerará como un voto.
 - e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.
- 8) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.
- 9) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 24. Oficina Internacional. 1. Tareas en general, Director General; 2. Informaciones generales; 3. Revista; 4. Información a los países; 5. Estudios y servicios; 6. Participación en reuniones; 7. Conferencias de revisión; 8. Las demás tareas

- 1)
 - a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
 - b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.
 - c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.
- 2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección del derecho de autor. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección del derecho de autor.
- 3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.
- 4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor.
- 5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección del derecho de autor.
- 6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de

la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será, ex officio, secretario de esos órganos.

7)

- a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los Artículos 22 a 26.
- b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.
- c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 25. Finanzas. 1. Presupuesto; 2. Coordinación con las otras Uniones; 3. Recursos; 4. Contribuciones; posible prórroga del presupuesto anterior; 5. Tasas y sumas debidas; 6. Fondo de operaciones; 7. Anticipos del gobierno que acoge; 8. Verificación de cuentas

1)

- a) La Unión tendrá un presupuesto.
- b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.
- c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes :

- i) las contribuciones de los países de la Unión;
 - ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;
 - iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
 - iv) las donaciones, legados y subvenciones;
 - v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
- a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente :
- Clase I → 25
 - Clase II → 20
 - Clase III → 15
 - Clase IV → 10
 - Clase V → 5
 - Clase VI → 3
 - Clase VII → 1
- a) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.
- b) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.
- c) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.
- d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus

atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

- e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.
- 5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.
- 6)
- a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.
 - b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.
 - c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
- 7)
- b) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo.
 - c) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por

escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

- 8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 26. Modificaciones. 1. Disposiciones que la Asamblea podrá modificar; propuestas; 2. Adopción; 3. Entrada en vigor

- 1) Las propuestas de modificación de los Artículos 22, 23, 24, 25 y del presente Artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.
- 2) Toda modificación de los Artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) será adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 22 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.
- 3) Toda modificación de los Artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos Artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 27. Revisión. 1. Objetivo; 2. Conferencias; 3. Adopción

- 1) El presente Convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.
- 2) Para tales efectos, se celebrarán entre los delegados de los países de la Unión conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

- 3) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26 aplicables a la modificación de los Artículos 22 a 26, toda revisión de la presente Acta, incluido el Anexo, requerirá la unanimidad de los votos emitidos.

Artículo 28. Aceptación y entrada en vigor del Acta respecto de los países de la Unión. 1. Ratificación, adhesión; posibilidad de excluir algunas disposiciones; retiro de la exclusión; 2. Entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo; 3. Entrada en vigor de los Artículos 22 a 38

1)

- a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder del Director General.
- b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los Artículos 1 a 21 ni al Anexo; sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración según el Artículo VI.1) del Anexo, sólo podrá declarar en dicho instrumento que su ratificación o su adhesión no se aplica a los Artículos 1 a 20.
- c) Cada uno de los países que, de conformidad con el apartado b), haya excluido las disposiciones allí establecidas de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del Director General.

2)

- a) Los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes :
 - i) que cinco países de la Unión por lo menos hayan ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1) b);
 - ii) que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971.

- b) La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado a) se hará efectiva, respecto de los países de la Unión que, tres meses antes de dicha entrada en vigor, hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una declaración de conformidad con el apartado 1) b).
 - c) Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el apartado b) y que ratifiquen la presente Acta o se adhieran a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1) b), los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión en cuestión, a menos que en el instrumento depositado se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor respecto de ese país en la fecha así indicada.
 - d) Las disposiciones de los apartados a) a c) no afectarán la aplicación del Artículo VI del Anexo.
- 3) Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella con o sin declaración de conformidad con el apartado 1) b), los Artículos 22 a 38 entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o adhesión de que se trate, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, los Artículos 22 a 38 entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 29. Aceptación y entrada en vigor respecto de países externos a la Unión. 1. Adhesión; 2. Entrada en vigor

- 1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser parte en el presente Convenio y miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Director General.
- 2)
- a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el presente Convenio entrará en vigor, respecto de todo país externo a la Unión, tres meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito de su instrumento de adhesión, a menos que se haya indicado una fecha posterior

en el instrumento depositado. En este último caso, el presente Convenio entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

- b) Si la entrada en vigor, en aplicación de lo dispuesto en el apartado a) precede a la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 28.2) a), dicho país no quedará obligado mientras tanto por los Artículos 1 a 21 y por el Anexo, sino por los Artículos 1 a 20 del Acta de Bruselas del presente Convenio.

Artículo 29 bis. Efecto de la aceptación del Acta con el fin de aplicar el Artículo 14.2) del Convenio que establece la OMPI.

La ratificación de la presente Acta o la adhesión a ella por cualquier país que no esté obligado por los Artículos 22 a 38 del Acta de Estocolmo del presente Convenio equivaldrá, con el fin único de poder aplicar el Artículo 14.2) del Convenio que establece la Organización, a la ratificación del Acta de Estocolmo o a la adhesión a esa Acta con la limitación prevista en el Artículo 28.1) b)i) de dicha Acta.

Artículo 30. Reservas: 1. Límites de la posibilidad de formular reservas; 2. Reservas anteriores; reserva relativa al derecho de traducción; retiro de la reserva

- 1) Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en el párrafo 2, del presente Artículo, el Artículo 28.1) b), el Artículo 33.2), y el Anexo, la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las disposiciones y la admisión para todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio.

- 2)
 - a) Cualquier país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella podrá conservar, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, el beneficio de las reservas que haya formulado anteriormente, a condición de declararlo al hacer el depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
 - b) Cualquier país externo a la Unión podrá declarar, al adherirse al presente Convenio y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, que piensa reemplazar, al menos provisionalmente, las disposiciones del Artículo 8 de la presente Acta relativas al derecho de traducción, por las disposiciones del Artículo 5 del Convenio de la Unión de

1886, revisado en París en 1896, en la inteligencia de que esas disposiciones se refieren únicamente a la traducción en un idioma de uso general en dicho país. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo I.6) b) del Anexo, en lo tocante al derecho de traducción de las obras que tengan como país de origen uno de los países que hayan hecho tal reserva, todos los países estarán facultados para aplicar una protección equivalente a la que aquél aplique.

- c) Los países podrán retirar en cualquier momento esa reserva mediante notificación dirigida al Director General.

Artículo 31. Aplicabilidad a determinados territorios. 1. Declaración; 2. Retiro de la declaración; 3. Fecha de vigencia; 4. No implica la aceptación de situaciones de hecho

- 1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.
- 2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.
- 3)
 - a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.
 - b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.
- 4) El presente Artículo no podrá interpretarse de manera que implique el reconocimiento o la aceptación tácita por un país cualquiera de la Unión de la situación de hecho de todo territorio al cual se haga aplicable el presente Convenio por otro país de la Unión en virtud de una declaración hecha en aplicación del párrafo 1).

Artículo 32. Aplicabilidad de la presente Acta y de las Actas anteriores. 1. Entre países que ya son miembros de la Unión; 2. Entre un país que llega a ser miembro de la Unión y otros países miembros de la Unión; 3. Aplicabilidad del Anexo en determinadas relaciones

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión a los cuales se aplique y en la medida en que se aplique, al Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 y a las Actas de revisión subsiguientes. Las Actas anteriormente en vigor seguirán siendo aplicables, en su totalidad o en la medida en que no las reemplace la presente Acta en virtud de la frase precedente, en las relaciones con los países de la Unión que no ratifiquen la presente Acta o que no se adhieran a ella.

a) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes en la presente Acta, la aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3), en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el Artículo 28.1) b). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate, en sus relaciones con ellos :

i) Aplique las disposiciones del Acta más reciente de la que sea parte, y

ii) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo I.6) del Anexo, esté facultado para adaptar la protección al nivel previsto en la presente Acta.

2) Los países que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las facultades previstas en el Anexo podrán aplicar las disposiciones del Anexo con respecto a la facultad o facultades cuyo beneficio hayan invocado, en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no esté obligado por la presente Acta, a condición de que este último país haya aceptado la aplicación de dichas disposiciones.

Artículo 33. Diferencias. 1. Competencia de la Corte Internacional de Justicia; 2. Reserva respecto de esta competencia; 3. Retiro de la reserva

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte

Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

- 2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1 no serán aplicables en lo que respecta a las diferencias entre uno de esos países y los demás países de la Unión.
- 3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 34. Cierre de algunas disposiciones anteriores. 1. De Actas anteriores; 2. Del Protocolo anexo al Acta de Estocolmo

- 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 29bis, después de la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá adherirse a Actas anteriores del presente Convenio o ratificarlas.
- 2) A partir de la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá hacer una declaración en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 del Protocolo relativo a los países en desarrollo anexo al Acta de Estocolmo.

Artículo 35. Duración del Convenio; Denuncia: 1. Duración ilimitada; 2. Posibilidad de denuncia; 3. Fecha en que surtirá efecto la denuncia; 4. Moratoria relativa a la denuncia

- 1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
- 2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto del país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.
- 3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

- 4) La facultad de denuncia prevista por el presente Artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 36. Aplicación del Convenio. 1. Obligación de adoptar las medidas necesarias; 2. Momento a partir del cual existe esta obligación

- 1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.
- 2) Se entiende que, en el momento en que un país se obliga por este Convenio, se encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo.

Artículo 37. Cláusulas finales. 1. Idiomas del Acta; 2. Firma; 3. Copias certificadas; 4. Registro; 5. Notificaciones

- 1)
 - a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), se depositará en poder del Director General.
 - b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en alemán, árabe, español, italiano y portugués y en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.
 - c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.
- 2) La presente Acta estará abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1972. Hasta esa fecha, el ejemplar al que se hace referencia en el apartado 1) a) se depositará en poder del Gobierno de la República Francesa.
- 3) El Director General remitirá dos copias certificadas del texto firmado de la presente Acta a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.
- 4) El Director General hará registrar la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.
- 5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en

esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento de los Artículos 28.1) c), 30.2) a) y b) y 33.2), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 30.2) c), 31.1) y 2), 33.3) y 38.1) y en el Anexo.

Artículo 38. Disposiciones transitorias. 1. Ejercicio del «privilegio de cinco años»; 2. Oficina de la Unión, Director de la Oficina; 3. Sucesión de la Oficina de la Unión

- 1) Los países de la Unión que no hayan ratificado la presente Acta o que no se hayan adherido a ella y que no estén obligados por los Artículos 22 a 26 del Acta de Estocolmo podrán, si lo desean, ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos previstos en dichos Artículos como si estuvieran obligados por ellos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará en poder del Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de la citada fecha.
- 2) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.
- 3) Una vez que todos los países de la Unión se hayan hecho miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Artículo I. Facultades ofrecidas a los países en desarrollo.

1. Posibilidad de hacer uso de algunas facultades; declaración; 2. Duración de la validez de la declaración; 3. País que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo; 4. Existencias de ejemplares; 5. Declaraciones respecto de algunos territorios; 6. Límites de la reciprocidad

1) Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual forma parte integrante el presente Anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones de tomar de inmediato las disposiciones necesarias para asegurar la protección de todos los derechos tal como están previstos en la presente Acta, podrá declarar, por medio de una notificación depositada en poder del Director General, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.1.c), en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, de aquélla prevista por el Artículo III o de ambas facultades. Podrá, en lugar de hacer uso de la facultad prevista por el Artículo II, hacer una declaración conforme al Artículo V.1) a).

2)

a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1) y notificada antes de la expiración de un período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los Artículos 1 a 21 y del Anexo seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho período. Tal declaración podrá ser renovada total o parcialmente por períodos sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder del Director General en un término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del período decenal en curso.

b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1), que fuere notificada una vez expirado el término de diez años después de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los

Artículos 1 a 21 y del Anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del período decenal en curso. Tal declaración podrá ser renovada de la manera prevista en la segunda frase del subpárrafo a).

- 3) Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, según lo dispuesto por el párrafo 1), ya no estará habilitado para renovar su declaración conforme al párrafo 2) y, la retire oficialmente o no, ese país perderá la posibilidad de invocar el beneficio de las facultades a que se refiere el párrafo 1), bien sea tres años después de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien sea a la expiración del período decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde.
- 4) Si, a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1) o 2) deja de surtir efectos, hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en virtud de las disposiciones del presente Anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo puestos en circulación hasta agotar las existencias.
- 5) Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya depositado una declaración o una notificación de conformidad con el Artículo 31.1) con respecto a la aplicación de dicha Acta a un territorio determinado cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los países a que se hace referencia en el párrafo 1), podrá, con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se refiere el párrafo 1) y la notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2). Mientras esa declaración o esa notificación sigan siendo válidas las disposiciones del presente Anexo se aplicarán al territorio respecto del cual se hayan hecho.
- 6)
 - a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a las que se hace referencia en el párrafo 1) no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el primer país en cuestión, una protección inferior a la que está obligado a otorgar de conformidad a los Artículos 1 a 20.
 - b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del Artículo 30.2) b), no se podrá ejercer, antes

de la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), con respecto a las obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración en virtud del Artículo V.1) a).

Artículo II. Limitaciones del derecho de traducción. 1. Licencias concedidas por la autoridad competente; 2. a 4. Condiciones en que podrán concederse estas licencias; 5. Usos para los que podrán concederse licencias; 6. Expiración de las licencias; 7. Obras compuestas principalmente de ilustraciones; 8. Obras retiradas de la circulación; 9. Licencias para organismos de radiodifusión

1) Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el presente Artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho exclusivo de traducción, previsto en el Artículo 8, por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación, conforme a lo dispuesto en el Artículo IV.

2)

- a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3), si a la expiración de un plazo de tres años o de un periodo más largo determinado por la legislación nacional de dicho país, contados desde la fecha de la primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha obra en un idioma de uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su autorización, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para efectuar la traducción de una obra en dicho idioma, y publicar dicha traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.
- b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente Artículo, si se han agotado todas las ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que se trate.

3)

- a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más países desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al plazo de tres años previsto en el párrafo 2) a).

- b) Todo país de los mencionados en el párrafo 1) podrá, con el acuerdo unánime de todos los países desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma fuere de uso general, sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los tres años a que se refiere el párrafo 2) a) por el plazo inferior que ese acuerdo determine y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o inglés. Los gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, deberán notificar los mismos al Director General.
- 4)
- a) La licencia a que se refiere el presente Artículo no podrá concederse antes de la expiración de un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de tres años, y de nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de un año :
- i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV.1);
- ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente.
- b) Si, durante el plazo de seis o de nueve meses, una traducción en el idioma para el cual se formuló la petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización, no se podrá conceder la licencia prevista en el presente Artículo.
- 5) No podrán concederse licencias en virtud de este Artículo sino para uso escolar, universitario o de investigación.
- 6) Si la traducción de una obra fuere publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión por obras de naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este Artículo cesarán si esa traducción fuera en el mismo idioma y substancialmente del mismo contenido que la traducción publicada en virtud de la licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución de los ejemplares comenzada antes de la terminación de la licencia, hasta agotar las existencias.

- 7) Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá conceder una licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y publicar las ilustraciones, si se cumplen las condiciones del Artículo III.
- 8) No podrá concederse la licencia prevista en el presente Artículo, si el autor hubiere retirado de la circulación todos los ejemplares de su obra.
- 9)
- a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquellos a los que se refiere el párrafo 1) una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya sido publicada en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad competente de ese país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes :
 - i) que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación de dicho país;
 - ii) que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una profesión determinada;
 - iii) que la traducción sea usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo ii) a través de emisiones efectuadas legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho país, incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales efectuadas en forma legal y exclusivamente para esas emisiones;
 - iv) que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro.
 - b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un organismo de radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá, para los fines y sujeto a las condiciones previstas en el subpárrafo a), con el consentimiento de ese organismo, ser usada también por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el país cuyas autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestión.
 - c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se cumplan todos los requisitos

y condiciones establecidos en el subpárrafo a), para traducir textos incorporados a una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o universitarios.

- d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos a) a c), las disposiciones de los párrafos precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo.

Artículo III. Limitaciones del derecho de reproducción.

1. Licencias concedidas por la autoridad competente; 2. a 5. Condiciones en que se podrán conceder estas licencias; 6. Expiración de licencias; 7. Obras a las que se aplica el presente Artículo

- 1) Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista por el presente Artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto en el Artículo 9 por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo IV.

2)

- a) Cuando, con relación a una obra a la cual este Artículo es aplicable en virtud del párrafo 7), a la expiración :

i) del plazo establecido en el párrafo 3) y calculado desde la fecha de la primera publicación de una determinada edición de una obra, o

ii) de un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en el párrafo 1) y contado desde la misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho país, ejemplares de esa edición para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al que se cobre en dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para reproducir y publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

- b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente Artículo, licencias para reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el

subpárrafo a), siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto en venta ningún ejemplar de dicha edición durante un período de seis meses, en el país interesado, para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria y a un precio comparable al que se cobre en dicho país por obras análogas.

3) El plazo al que se hace referencia en el párrafo 2) a)i) será de cinco años. Sin embargo,

- i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología, será de tres años;
- ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación tales como novelas, obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años.

4)

a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse en virtud del presente Artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses

- i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el Artículo IV.1);
- ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el Artículo IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente.

b) En los demás casos y siendo aplicable el Artículo IV.2), no se podrá conceder la licencia antes de que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud.

c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el subpárrafo a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2).

d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya solicitado.

5) No se concederá en virtud del presente Artículo una licencia para reproducir y publicar una traducción de una obra, en los casos que se indican a continuación :

- i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de autor o con su autorización;
 - ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga la licencia.
- 6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia en el párrafo 1) para responder a las necesidades bien del público, bien de la enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia concedida en virtud del presente Artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación de todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.
- 7)
 - a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente Artículo se aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.
 - b) Las disposiciones del presente Artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

Artículo IV. Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Artículos II y III : 1. y 2. Procedimiento; 3. Indicación del autor y del título de la obra; 4. Exportación de ejemplares; 5. Nota; 6. Remuneración

- 1) Toda licencia referida al Artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una

- i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de autor o con su autorización;
 - ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga la licencia.
- 6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia en el párrafo 1) para responder a las necesidades bien del público, bien de la enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia concedida en virtud del presente Artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación de todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.
- 7)
- a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente Artículo se aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.
 - b) Las disposiciones del presente Artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

Artículo IV. Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Artículos II y III : 1. y 2. Procedimiento; 3. Indicación del autor y del título de la obra; 4. Exportación de ejemplares; 5. Nota; 6. Remuneración

- 1) Toda licencia referida al Artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una

traducción y publicarla o reproducir y publicar la edición, según proceda, y que, después de las diligencias correspondientes por su parte, no ha podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido obtener su autorización. En el momento de presentar su petición el solicitante deberá informar a todo centro nacional o internacional de información previsto en el párrafo 2).

- 2) Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir, por correo aéreo certificado, copias de la petición de licencia que haya presentado a la autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o internacional de información que pueda haber sido designado, para ese efecto, en una notificación depositada en poder del Director General, por el gobierno del país en el que se suponga que el editor tiene su centro principal de actividades.
- 3) El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o reproducción publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el Artículo II o del Artículo III. El título de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una traducción, el título original de la obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares mencionados.
- 4)
 - a) Las licencias concedidas en virtud del Artículo II o del Artículo III no se extenderán a la exportación de ejemplares y no serán válidas sino para la publicación de la traducción o de la reproducción, según el caso, en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia.
 - b) Para los fines del subpárrafo a), el concepto de exportación comprenderá el envío de ejemplares desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaración de acuerdo al Artículo I.5).
 - a) Si un organismo gubernamental o público de un país que ha concedido una licencia para efectuar una traducción en virtud del Artículo II, a un idioma distinto del español, francés o inglés, envía ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío no será considerado como exportación, para los fines del subpárrafo a), siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes :

- i) que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del país cuya autoridad competente otorgó la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales;
 - ii) que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitarios o de investigación;
 - iii) que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tengan fines de lucro;
 - iv) que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el país cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la distribución o ambas operaciones y que el gobierno de ese último país lo haya notificado al Director General.
- 5) Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del Artículo II o del Artículo III deberá contener una nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se pone en circulación sólo en el país o en el territorio donde dicha licencia se aplique.
- 6)
- a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar
 - i) que la licencia prevea en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, según el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que normalmente se abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados en los dos países de que se trate;
 - ii) el pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional en materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los mecanismos internacionales, para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda internacionalmente convertible o en su equivalente.
 - b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, según los casos.

Artículo V. Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción.

1. Régimen previsto por las Actas de 1886 y de 1896. 2. Imposibilidad de cambiar de régimen después de haber elegido el del Artículo II;

3. Plazo para elegir el otro régimen

- 1)
 - a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, podrá, al ratificar la presente Acta o al adherirse a ella, en lugar de tal declaración :
 - i) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) es aplicable, formular una declaración de acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción;
 - ii) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) no es aplicable, aun cuando no fuera un país externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase.
 - b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el Artículo I.1), toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).
 - c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II ni siquiera en el caso de retirar dicha declaración.
- 2) Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), todo país que haya invocado el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1).
- 3) Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el Artículo I.1) podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), hacer una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

Artículo V. Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción.

1. Régimen previsto por las Actas de 1886 y de 1896.
2. Imposibilidad de cambiar de régimen después de haber elegido el del Artículo II;
3. Plazo para elegir el otro régimen

- 1)
 - a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, podrá, al ratificar la presente Acta o al adherirse a ella, en lugar de tal declaración :
 - i) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) es aplicable, formular una declaración de acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción;
 - ii) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) a) no es aplicable, aun cuando no fuera un país externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase.
 - b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el Artículo I.1), toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).
 - c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II ni siquiera en el caso de retirar dicha declaración.
- 2) Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), todo país que haya invocado el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1).
- 3) Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el Artículo I.1) podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), hacer una declaración en el sentido del Artículo 30.2) b), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).

Artículo VI. Posibilidades de aplicar o de aceptar la aplicación de determinadas disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por éste. 1. Declaración; 2. Depositario y fecha en que la declaración surtirá efectos

1) Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente Acta o en cualquier momento antes de quedar obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo :

i) si se trata de un país que estando obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades a las que se hace referencia en el Artículo I.1), que aplicará las disposiciones de los Artículos II o III o de ambos a las obras cuyo país de origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo ii) que figura a continuación, acepte la aplicación de esos Artículos a tales obras o que esté obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo; esa declaración podrá referirse también al Artículo V o solamente al Artículo II.

ii) que acepta la aplicación del presente Anexo a las obras de las que sea país de origen por parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del subpárrafo i) anterior o una notificación en virtud del Artículo I.

2) Toda declaración de conformidad con el párrafo 1) deberá ser hecha por escrito y depositada en poder del Director General. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito.

CONVENCION DE ROMA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O
EJECUTANTES,
LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS ORGANISMOS
DE RADIODIFUSIÓN

Hecho en Roma el 26 de octubre de 1961

Los Estados Contratantes, animados del deseo de asegurar la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión,

Han convenido:

Artículo 1. [Salvaguardia del derecho de autor]. La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

Artículo 2. [Protección que dispensa la Convención. Definición del trato nacional]

- 1) A los efectos de la presente Convención se entenderá por «mismo trato que a los nacionales» el que conceda el Estado Contratante en que se pida la protección, en virtud de su derecho interno:
 - a) a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio;
 - b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio;
 - c) a los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.
- 2) El «mismo trato que a los nacionales» estará sujeto a la protección expresamente concedida y a las limitaciones concretamente previstas en la presente Convención.

Artículo 3. [Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) productor de fonogramas; d) publicación; e) reproducción; f) emisión; g) retransmisión]

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:

- a) «artista intérprete o ejecutante», todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística;
- b) «fonograma», toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos;
- c) «productor de fonogramas», la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos;
- d) «publicación», el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma;
- e) «reproducción», la realización de uno o más ejemplares de una fijación;
- f) «emisión», la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público;
- g) «retransmisión», la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión.

Artículo 4. [Interpretaciones o ejecuciones protegidas. Criterios de vinculación para los artistas]

Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales siempre que se produzca una de las siguientes condiciones:

- a) que la ejecución se realice en otro Estado Contratante;
- b) que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del Artículo 5;
- c) que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una emisión protegida en virtud del Artículo 6.

Artículo 5. [Fonogramas protegidos. 1. Criterios de vinculación para los productores de fonogramas; 2. Publicación simultánea; 3. Facultad de descartar la aplicación de determinados criterios]

- 1) Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los productores de fonogramas

siempre que se produzca cualquiera de las condiciones siguientes:

- a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la nacionalidad);
 - b) que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de la fijación);
 - c) que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante (criterio de la publicación).
- 2) Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no contratante pero lo hubiere sido también, dentro de los 30 días subsiguientes, en un Estado Contratante (publicación simultánea), se considerará como publicado por primera vez en el Estado Contratante.
- 3) Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el criterio de la fijación. La notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 6. [Emisiones protegidas: 1. Criterios de vinculación para los organismos de radiodifusión; 2. Facultad de formular una reserva]

- 1) Cada uno de los Estados Contratantes concederá igual trato que a los nacionales a los organismos de radiodifusión, siempre que se produzca alguna de las condiciones siguientes:
 - a) que el domicilio legal del organismo de radiodifusión esté situado en otro Estado Contratante;
 - b) que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio de otro Estado Contratante.
- 2) Todo Estado Contratante podrá, mediante notificación depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, declarar que sólo protegerá las emisiones en el caso de que el domicilio legal del organismo de radiodifusión esté situado en el territorio de otro Estado Contratante y de que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo Estado Contratante. La notificación podrá hacerse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento;

en este último caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 7. [Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o ejecutantes: 1. Derechos específicos; 2. Relaciones de los artistas con los organismos de radiodifusión]

1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir:

- a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de una fijación;
- b) la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada;
- c) la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución:
 - (i) si la fijación original se hizo sin su consentimiento;
 - (ii) si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado
 - (iii) si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese Artículo.

2.

- 1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado Contratante donde se solicite la protección, regular la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la reproducción de esa fijación para la difusión, cuando el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la difusión.
- 2) Las modalidades de la utilización por los organismos radiodifusores de las fijaciones hechas para las emisiones radiodifundidas, se determinarán con arreglo a la legislación nacional del Estado Contratante en que se solicite la protección.
- 3) Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia en los apartados 1) y 2) de este párrafo no

podrán privar a los artistas intérpretes o ejecutantes de su facultad de regular, mediante contrato, sus relaciones con los organismos de radiodifusión.

Artículo 8. [Interpretaciones o ejecuciones colectivas] Cada uno de los Estados Contratantes podrá determinar, mediante su legislación, las modalidades según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados para el ejercicio de sus derechos, cuando varios de ellos participen en una misma ejecución.

Artículo 9. [Artistas de variedades y de circo] Cada uno de los Estados Contratantes podrá, mediante su legislación nacional, extender la protección a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas.

Artículo 10. [Derecho de reproducción de los productores de fonogramas] Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Artículo 11. [Formalidades relativas a los fonogramas] Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislación nacional, como condición para proteger los derechos de los productores de fonogramas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, o de unos y otros, en relación con los fonogramas, el cumplimiento de formalidades, se considerarán éstas satisfechas si todos los ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o sus envolturas, llevan una indicación consistente en el símbolo (P) acompañado del año de la primera publicación, colocados de manera y en sitio tales que muestren claramente que existe el derecho de reclamar la protección. Cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar al productor del fonograma o a la persona autorizada por éste (es decir, su nombre, marca comercial u otra designación apropiada), deberá mencionarse también el nombre del titular de los derechos del productor del fonograma. Además, cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar a los principales intérpretes o ejecutantes, deberá indicarse el nombre del titular de los derechos de dichos artistas en el país en que se haga la fijación.

Artículo 12. [Utilizaciones secundarias de los fonogramas]

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.

Artículo 13. [Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión]

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

- a) La retransmisión de sus emisiones;
- b) La fijación sobre una base material de sus emisiones;
- c) La reproducción:
 - (i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;
 - (ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el Artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho Artículo;
- d) La comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

Artículo 14. [Duración mínima de la protección] La duración de la protección concedida en virtud de la presente Convención no podrá ser inferior a veinte años, contados a partir:

- a) Del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos;
- b) Del final del año en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones o ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma;
- c) Del final del año en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusión.

Artículo 15. [Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección; 2. Paralelismo con el derecho de autor]

- 1) Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:
 - a) cuando se trate de una utilización para uso privado;
 - b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad;
 - c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones;
 - d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.
- 2). Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 16. [Reservas]

- 1) Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente Convención, aceptará todas las obligaciones y disfrutará de todas las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado podrá indicar en cualquier momento, depositando en poder del Secretario General de las Naciones Unidas una notificación a este efecto:
 - a) en relación con el Artículo 12,
 - (i) Que no aplicará ninguna disposición de dicho Artículo;
 - (ii) Que no aplicará las disposiciones de dicho Artículo con respecto a determinadas utilidades;
 - (iii) Que no aplicará las disposiciones de dicho Artículo con respecto a los fonogramas cuyo productor no sea nacional de un Estado Contratante;
 - (iv) Que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea

nacional de otro Estado Contratante, limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho Artículo en la medida en que lo haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por un nacional del Estado que haga la declaración; sin embargo, cuando el Estado Contratante del que sea nacional el productor no conceda la protección al mismo o a los mismos beneficiarios que el Estado Contratante que haga la declaración, no se considerará esta circunstancia como una diferencia en la amplitud con que se concede la protección;

- b) en relación con el Artículo 13, que no aplicará la disposición del apartado d) de dicho artículo. Si un Estado Contratante hace esa declaración, los demás Estados Contratantes no estarán obligados a conceder el derecho previsto en el apartado d) del Artículo 13 a los organismos de radiodifusión cuya sede se halle en aquel Estado.
- 2) Si la notificación a que se refiere el párrafo 1 de este Artículo se depositare en una fecha posterior a la del depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 17. [Aplicación exclusiva del criterio de la fijación]

Todo Estado cuya legislación nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 conceda protección a los productores de fonogramas basándose únicamente en el criterio de la fijación, podrá declarar, depositando una notificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas al mismo tiempo que el instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, que sólo aplicará, con respecto al Artículo 5, el criterio de la fijación, y con respecto al párrafo 1, apartado a), (iii) y (iv) del Artículo 16, ese mismo criterio en lugar del criterio de la nacionalidad del productor.

Artículo 18. [Modificación o retirada de las reservas] Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los Artículos 5, párrafo 3, 6, párrafo 2, 16, párrafo 1, ó 17 podrá, mediante una nueva notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, limitar su alcance o retirarla.

Artículo 19. [Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes en las fijaciones visuales o audiovisuales] No obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable el Artículo 7.

Artículo 20. [Irretroactividad de la Convención]

1. La presente Convención no entrañará menoscabo de los derechos adquiridos en cualquier Estado Contratante con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención en ese Estado.
2. Un Estado Contratante no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente Convención a interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión realizadas, ni a fonogramas grabados con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención en ese Estado.

Artículo 21. [Otras fuentes de protección] La protección otorgada por esta Convención no podrá entrañar menoscabo de cualquier otra forma de protección de que disfruten los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Artículo 22. [Arreglos particulares] Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre sí acuerdos especiales, siempre que tales acuerdos confieran a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión derechos más amplios que los reconocidos por la presente Convención o comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias a la misma.

Artículo 23. [Firma y depósito de la Convención] La presente Convención será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Estará abierta hasta el 30 de junio de 1962 a la firma de los Estados invitados a la Conferencia Diplomática sobre la Protección Internacional de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión,

que sean Partes en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Artículo 24. [Acceso a la Convención]

- 1) La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados firmantes.
- 2) La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados invitados a la Conferencia señalada en el Artículo 23, así como a la de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, siempre que ese Estado sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 3) La ratificación, la aceptación o la adhesión se hará mediante un instrumento que será entregado, para su depósito, al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 25. [Entrada en vigor de la Convención] 1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del sexto instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión. 2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor, para cada Estado, tres meses después de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

Artículo 26. [Aplicación de la Convención mediante la legislación interna] 1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad con sus disposiciones constitucionales, las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Convención. 2. En el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, todo Estado debe hallarse en condiciones de aplicar, de conformidad con su legislación nacional, las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 27. [Ampliación del ámbito territorial de aplicación de la Convención]

- 1) Todo Estado podrá, en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier momento ulterior, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General

de las Naciones Unidas, que la presente Convención se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, a condición de que la Convención Universal sobre Derecho de Autor o la Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas sean aplicables a los territorios de que se trate. Esta notificación surtirá efecto tres meses después de la fecha en que se hubiere recibido.

- 2) Las declaraciones y notificaciones a que se hace referencia en los Artículos 5, párrafo 3, 6, párrafo 2, 16, párrafo 1, 17 ó 18 podrán ser extendidas al conjunto o a uno cualquiera de los territorios a que se alude en el párrafo precedente.

Artículo 28. [Cese de los efectos de la Convención]

- 1) Todo Estado Contratante tendrá la facultad de denunciar la presente Convención, ya sea en su propio nombre, ya sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios señalados en el Artículo 27.
- 2) La denuncia se efectuará mediante comunicación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto doce meses después de la fecha en que se reciba la notificación.
- 3) La facultad de denuncia prevista en el presente Artículo no podrá ejercerse por un Estado Contratante antes de la expiración de un período de cinco años a partir de la fecha en que la Convención haya entrado en vigor con respecto a dicho Estado.
- 4) Todo Estado Contratante dejará de ser Parte en la presente Convención desde el momento en que no sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor ni Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 5) La presente Convención dejará de ser aplicable a los territorios señalados en el Artículo 27 desde el momento en que también dejen de ser aplicables a dichos territorios la Convención Universal sobre Derecho de Autor y la Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.



Artículo 29. [Revisión de la Convención]

- 1) Una vez que la presente Convención haya estado en vigor durante un período de cinco años, todo Estado Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la convocatoria de una conferencia con el fin de revisar la Convención. El Secretario General notificará esa petición a todos los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis meses después de que el Secretario General de las Naciones Unidas hubiese enviado la notificación, la mitad por lo menos de los Estados Contratantes le dan a conocer su asentimiento a dicha petición, el Secretario General informará de ello al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, quienes convocarán una conferencia de revisión en colaboración con el Comité Intergubernamental previsto en el Artículo 32.
- 2) Para aprobar un texto revisado de la presente Convención será necesaria la mayoría de dos tercios de los Estados que asistan a la conferencia convocada para revisar la Convención; en esa mayoría deberán figurar los dos tercios de los Estados que al celebrarse dicha conferencia sean Partes en la Convención.
- 3) En el caso de que se apruebe una nueva Convención que implique una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención contenga disposiciones en contrario:
 - a) La presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión a partir de la fecha en que la Convención revisada hubiere entrado en vigor;
 - b) La presente Convención continuará en vigor con respecto a los Estados Contratantes que no sean partes en la Convención revisada.

Artículo 30. [Solución de los conflictos entre Estados Contratantes]

Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes sobre la interpretación o aplicación de la presente

Convención que no fuese resuelta por vía de negociación será sometida, a petición de una de las partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia con el fin de que ésta resuelva, a menos que los Estados de que se trate convengan otro modo de solución.

Artículo 31. [Límites de la facultad de formular reservas]

- 1) Se establecerá un Comité Intergubernamental encargado de:
 - a) Examinar las cuestiones relativas a la aplicación y al funcionamiento de la presente Convención, y
 - b) Reunir las propuestas y preparar la documentación para posibles revisiones de la Convención.
- 2) El Comité estará compuesto de representantes de los Estados Contratantes, elegidos teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Constará de seis miembros si el número de Estados Contratantes es inferior o igual a doce, de nueve si ese número es mayor de doce y menor de diecinueve, y de doce si hay más de dieciocho Estados Contratantes.
- 3) El Comité se constituirá a los doce meses de la entrada en vigor de la Convención, previa elección entre los Estados Contratantes, en la que cada uno de éstos tendrá un voto, y que será organizada por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, con arreglo a normas que hayan sido aprobadas previamente por la mayoría absoluta de los Estados Contratantes.
- 4) El Comité elegirá su Presidente y su Mesa. Establecerá su propio reglamento, que contendrá, en especial, disposiciones respecto a su funcionamiento futuro y a su forma de renovación. Este reglamento deberá asegurar el respeto del principio de la rotación entre los diversos Estados Contratantes.
- 5) Constituirán la Secretaría del Comité los funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas designados, respectivamente, por los Directores Generales y por el Director de las tres organizaciones interesadas.

- 6) Las reuniones del Comité, que se convocarán siempre que lo juzgue necesario la mayoría de sus miembros, se celebrarán sucesivamente en las sedes de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 7) Los gastos de los miembros del Comité correrán a cargo de sus respectivos Gobiernos.

Artículo 33. [Idiomas de la Convención]

- 1) Las versiones española, francesa e inglesa del texto de la presente Convención serán igualmente auténticas.
- 2) Se establecerán además textos oficiales de la presente Convención en alemán, italiano y portugués.

Artículo 34. [Notificaciones]

1. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados invitados a la Conferencia señalada en el Artículo 23 y a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas:
 - a) Del depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión;
 - b) De la fecha de entrada en vigor de la presente Convención;
 - c) De todas las notificaciones, declaraciones o comunicaciones previstas en la presente Convención; y
 - d) De todos los casos en que se produzca alguna de las situaciones previstas en los párrafos 4 y 5 del Artículo 28.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas informará asimismo al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de las peticiones que se le notifiquen de conformidad

con el Artículo 29, así como de toda comunicación que reciba de los Estados Contratantes con respecto a la revisión de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, firman la presente Convención.

HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en español, en francés y en inglés. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas conformes a todos los Estados invitados a la Conferencia indicada en el Artículo 23 y a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.



Bibliografía

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).
2. Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.
3. Castro Bonilla, Alejandra. El Derecho de Autor ante las TIC en la Economía del Conocimiento.
4. Código Civil de la República de Nicaragua.
5. Constitución Política de la República de Nicaragua.
6. Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
7. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
8. Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.
9. Decreto N° 22-2000, Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
10. Díaz Noci, Javier. Derechos de autor y sociedad digital de la información en España: Nuevos retos jurídicos.
11. Diccionario Jurídico Espasa. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1998.
12. Farré, Pedro. La Piratería Discográfica y Audiovisual en España y la campaña SGAE para combatirla. Curso OMPI/SGAE. Madrid, Octubre de 2004.
13. Ficsor, Mihály. La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos. OMPI. 2002.
14. Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Publicación OMPI N° L450CM/S.
15. Idris, Kamil. La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico. Reseña. Publicación de la OMPI No. 888.1 (s) Junio 2003.
16. Jiménez Fuentes, Esther. Derecho de Autor en Internet, Julio 2002.

17. Ley N° 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
18. Lipszyc, Delia. Transmisión de los Derechos de Autor y Conexos. Curso OMPI/SGAE. Lima, Perú. 2003.
19. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Información General. 2003. Publicación de la OMPI N° 400 (S).
20. Prado Canals, José E. Ayú. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. La experiencia en la República de Panamá. Décimo Curso Académico Regional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina. Lima, Perú, Octubre de 2003.
21. Qué es la Propiedad Intelectual? Publicación de la OMPI No. 450 (S).
22. Reseña de Convenios, Tratados y Acuerdos administrados por la OMPI. Publicación de la OMPI No. 442(S).
23. Rubio, Felipe. Artículos varios. CERLALC, 1998.
24. Santiago, Vanisa. Duración de los derechos de autor y conexos y excepciones y limitaciones impuestas a los mismos. Dominio público "oneroso". Curso OMPI/SGAE Lima, Perú. 2003.
25. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.
26. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. (WCT)
27. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. (WPPT).
28. Villate, Javier. La Propiedad Intelectual en la nueva era digital. 2001.



La publicación de la obra que ahora tiene usted entre sus manos es consecuencia de la labor conjunta de la Universidad Centroamericana y el Centro Nicaragüense de Estudios de Derecho, que como entidades que comparten el amor por la Ciencia, han puesto sus esfuerzos en propiciar la creación de un espacio de comunicación de obras nacionales que contribuyan al desarrollo del pensamiento, en este caso jurídico, tan útil y tan esencialmente necesario para el avance y fortalecimiento de la convivencia pacífica en nuestro país.



UCA
Universidad
Centroamericana



200680618